

Universidad ORT Uruguay

Facultad de Administración y Ciencias Sociales

**Rendición de cuentas en la  
ayuda humanitaria  
internacional: Un análisis crítico  
de la respuesta al terremoto de  
Haití de 2010**

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado en  
Estudios Internacionales

**Isabel Alvarez Paats - 274854**

**Sofía Lopes Apesteguy - 268752**

**Tutor: Inés Pousadela**

**2025**

## **Declaración de autoría**

Nosotras, Isabel Alvarez Paats y Sofía Lopes Apesteguy, declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos la Monografía;
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotras;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



**Isabel Alvarez Paats**

04/03/2025



**Sofía Lopes Apesteguy**

04/03/2025

## **Agradecimientos**

*Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras familias, cuyo apoyo incondicional, amor y comprensión han sido fundamentales a lo largo de este camino.*

*A nuestros amigos y seres queridos, por sus palabras de aliento y su compañía en cada etapa.*

*A nuestra tutora, Inés Pousadela, por su invaluable orientación y compromiso. Su conocimiento, experiencia y paciencia han sido esenciales para el desarrollo de esta investigación.*

*A la coordinación académica y el cuerpo docente, por su constante disposición y apoyo, facilitando nuestro crecimiento académico y profesional.*

*Finalmente, queremos destacar el vínculo que hemos fortalecido en este recorrido. La dedicación y el esfuerzo compartido han hecho de esta experiencia no solo un desafío académico, sino también una oportunidad para crecer juntas y encaminarnos con orgullo hacia nuestra futura profesión.*

***Isabel y Sofía***

## **Resumen**

Este trabajo analiza la relación entre los desafíos de la ayuda humanitaria y los mecanismos de rendición de cuentas, utilizando como caso de estudio la respuesta internacional al terremoto de Haití de 2010. A través de un análisis de las acciones de las principales organizaciones involucradas, incluyendo agencias gubernamentales estadounidenses, organismos de la ONU y ONG internacionales, identifica varias problemáticas fundamentales: ausencia de consulta con las comunidades locales, descoordinación y mala planificación, incumplimiento de objetivos, disparidades entre necesidades y respuestas, falta de transparencia, negligencia institucional y abusos de poder. El estudio revela que una parte significativa de estas dificultades puede atribuirse a deficiencias en los mecanismos de rendición de cuentas, tanto ascendentes como descendentes y horizontales. La investigación demuestra que, si bien el sector humanitario cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, también se caracteriza por asimetrías de poder que resultan en la priorización de la responsabilidad hacia los donantes por encima de la rendición de cuentas a las comunidades afectadas. Se concluye que el fortalecimiento de la rendición de cuentas es esencial para mejorar la efectividad de la ayuda humanitaria internacional.

**Palabras clave:** ayuda humanitaria, rendición de cuentas, responsabilidad, organizaciones internacionales, sociedad civil, Haití.

## **Abstract**

This paper analyzes the relationship between humanitarian challenges and accountability mechanisms, using the international response to the 2010 Haiti earthquake as a case study. Through an analysis of the actions of the main organizations involved, including U.S. government agencies, UN agencies, and international NGOs, it identifies several key problems: lack of consultation with local communities, lack of coordination and poor planning, failure to meet objectives, mismatches between needs and responses, lack of transparency, institutional neglect, and abuse of power. The study shows that a significant part of these difficulties can be attributed to deficiencies in accountability mechanisms, both upward, downward and horizontal. The research shows that while accountability mechanisms exist, the humanitarian sector is also characterized by power asymmetries that result in the prioritization of accountability to donors over accountability to affected communities. It concludes that strengthening accountability is essential to improving the effectiveness of international humanitarian assistance.

**Keywords:** humanitarian aid, accountability, responsibility, international organizations, civil society, Haiti.

## Índice

<b>1. Introducción</b> .....	<b>5</b>
1.1. Justificación del tema .....	7
1.2. Preguntas e hipótesis .....	7
1.3. Marco teórico.....	7
1.3.1. Ayuda humanitaria .....	7
1.3.2. Emergencia humanitaria compleja .....	12
1.3.3. Estado fallido.....	14
1.3.4. Rendición de cuentas.....	15
1.4. Metodología y fuentes .....	20
<b>2. La respuesta humanitaria: actores y acciones</b> .....	<b>23</b>
2.1. Estados Unidos .....	25
2.2. Naciones Unidas .....	30
2.3. Organizaciones no gubernamentales internacionales .....	32
<b>3. Problemas en la respuesta humanitaria internacional</b> .....	<b>35</b>
3.1. Epidemia de cólera .....	35
3.2. Abusos de poder .....	40
3.3. Incumplimiento de objetivos .....	46
3.4. Problemas de planificación.....	49
3.5. Disparidad entre la necesidad y la ayuda humanitaria .....	51
3.6. Descoordinación entre actores humanitarios .....	55
<b>4. Déficits de rendición de cuentas en la respuesta</b> .....	<b>57</b>
4.1. Limitaciones contextuales .....	57
4.2. Principales déficits de rendición de cuentas .....	59
4.3. Dimensiones de la rendición de cuentas.....	61
4.4. Consecuencias del déficit de rendición de cuentas.....	65
4.5. Lecciones y limitaciones .....	66
<b>5. Conclusión</b> .....	<b>70</b>
<b>Bibliografía</b> .....	<b>75</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>95</b>
Anexo 1: Entrevistas.....	95

## 1. Introducción

El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter sacudió Haití (Figura 1), desencadenando una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia moderna. La devastación fue enorme: aproximadamente 3,5 millones de personas se vieron afectadas, unas 220.000 fallecieron y más de 300.000 resultaron heridas. La infraestructura del país colapsó: más de 188.383 viviendas fueron gravemente dañadas y 105.000 fueron completamente destruidas (Disasters Emergency Committee, s.f.; IASC, 2010). En la zona metropolitana de Puerto Príncipe y Pétiou-Ville, el epicentro del desastre, el 65% de las construcciones quedaron reducidas a escombros, dejando a 1,5 millones de personas sin hogar (Durán Vargas, 2010; Disasters Emergency Committee, s.f.).

**Figura 1: Mapa del epicentro del terremoto de Haití de 2010**



Mapa: Adaptado por las autoras • Fuente: CIA (2010) • Creado con Datawrapper

El impacto del terremoto fue especialmente devastador dado el contexto preexistente. Antes del desastre, Haití ya era el país más pobre de América y ocupaba el puesto 145 de 169 países en el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Kent, 2011; UNDP, 2010). El sismo provocó una regresión del 7% en su Producto Interno Bruto (PIB), profundizando una ya frágil situación socioeconómica y agravando los desafíos

estructurales en un contexto marcado por una vulnerabilidad extrema.

La respuesta de la comunidad internacional fue inmediata y masiva. A finales de enero de 2010, más de 400 grupos humanitarios operaban en el terreno, logrando avances significativos en los primeros seis meses: cuatro millones de personas recibieron asistencia alimentaria y 1,2 millones accedieron diariamente a agua potable segura. Se distribuyeron materiales de emergencia a 1,5 millones de personas y se instalaron 11.000 letrinas. El 90% de los desplazados en Puerto Príncipe obtuvieron acceso a clínicas cercanas, y más de medio millón de niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia recibieron alimentación suplementaria. Unos 195.000 niños pudieron acceder a espacios de aprendizaje temporales (IASC, 2010).

Los donantes internacionales se comprometieron a aportar aproximadamente 10.400 millones de dólares para iniciativas de ayuda humanitaria, recuperación y alivio de la deuda, mientras que las contribuciones privadas alcanzaron un total de 3.100 millones. Sin embargo, pese al despliegue masivo de recursos y la llegada de ayuda humanitaria, la respuesta tuvo múltiples deficiencias. La mala coordinación entre los diferentes actores resultó en una distribución desigual de los recursos: mientras áreas como Pétion-Ville recibieron atención considerable, zonas periféricas como Carrefour fueron desatendidas (Katz, 2013). Además, aunque se destinaron fondos significativos para programas de recuperación y apoyo económico, muchos de estos esfuerzos no lograron abordar las necesidades estructurales del país ni generar un cambio sostenible en los medios de vida de la población (Johnston, 2015). La falta de consulta con las comunidades afectadas resultó en una desconexión entre las iniciativas implementadas y las realidades locales. En los años posteriores también se revelaron casos de corrupción, abuso de poder y mala gestión que derivaron en escándalos que sacudieron a la comunidad internacional.

El presente trabajo se enfoca en el caso de Haití para examinar los desafíos de la ayuda humanitaria, a partir de la conjetura de que muchos de dichos desafíos están vinculados con déficits de rendición de cuentas. El análisis se centra en el período subsiguiente al terremoto de 2010 debido a que eventos posteriores prolongaron la crisis humanitaria, tornándose crónica y dificultando la diferenciación entre ayuda humanitaria y asistencia para el desarrollo. Se espera que este estudio de caso contribuya a la comprensión de la importancia de la rendición de cuentas y ofrezca algunas pistas para mejorar la efectividad de la ayuda humanitaria.

El trabajo se estructura en cuatro capítulos principales, además de las conclusiones finales. Este capítulo introductorio establece las preguntas de investigación y la hipótesis, junto con los conceptos fundamentales que guían el desarrollo del análisis. El Capítulo 2 presenta el contexto en que se inscribe el caso estudiado, incorporando una revisión histórica y una descripción del terremoto de Haití en 2010 y la respuesta humanitaria internacional, e identifica a los principales actores involucrados. El Capítulo 3 identifica y analiza los problemas observados en la ayuda humanitaria internacional, mientras que el Capítulo 4 analiza los déficits de rendición de cuentas que subyacen a dichos problemas y examina lecciones y mejoras posteriores. Las conclusiones sintetizan los hallazgos y ofrecen reflexiones y recomendaciones para mejoras en el sector humanitario, así como posibles líneas para investigaciones futuras.

## **1.1. Justificación del tema**

El concepto de rendición de cuentas apenas está emergiendo en el ámbito de la ayuda humanitaria, donde se observa una notable brecha entre los principios teóricos y su implementación práctica. Aunque muchas organizaciones internacionales reconocen públicamente su importancia, sus mecanismos operativos frecuentemente resultan insuficientes o inadecuados, particularmente cuando se trata de responder ante las comunidades afectadas, colaborar con actores locales y coordinar con otras organizaciones humanitarias. En este contexto, el Estado debería desempeñar un rol crítico como entidad reguladora y fiscalizadora garantizando que las intervenciones humanitarias respondan efectivamente a las necesidades locales.

La catástrofe de Haití en 2010 es un caso particularmente relevante para analizar estas dinámicas. La respuesta internacional al terremoto evidenció graves déficits tanto en la coordinación como en la rendición de cuentas, especialmente considerando que las instituciones estatales haitianas carecían de capacidad para liderar eficazmente los esfuerzos de ayuda. La ausencia de mecanismos de rendición de cuentas hacia los diferentes actores involucrados comprometió seriamente la efectividad de la respuesta. Este caso subraya la necesidad de fortalecer los procesos de rendición de cuentas como elemento esencial para asegurar una adecuada gestión de la ayuda internacional y garantizar que responda genuinamente a las necesidades de las poblaciones afectadas.

## **1.2. Preguntas e hipótesis**

Esta investigación se articula en torno a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera los desafíos inherentes a la ayuda humanitaria se relacionan con deficiencias en los procesos de rendición de cuentas? De esta pregunta general se deriva una pregunta más específica centrada en el caso de estudio: ¿Qué revela la respuesta humanitaria al terremoto de Haití en 2010 sobre la importancia de la rendición de cuentas en contextos de emergencia?

Como hipótesis central se plantea que una parte significativa de los problemas recurrentes en las operaciones de ayuda humanitaria radica en deficiencias en los mecanismos de rendición de cuentas. En este sentido, el desarrollo y fortalecimiento de estos mecanismos podría contribuir a mejorar la efectividad, transparencia y eficiencia de la ayuda humanitaria.

## **1.3. Marco teórico**

La presente investigación requiere el desarrollo de dos conceptos fundamentales: ayuda humanitaria y rendición de cuentas. Asimismo, dada la naturaleza del caso estudiado, es necesario aclarar los conceptos de emergencia humanitaria compleja y Estado fallido. Dentro de este capítulo además se incluye un recorrido histórico del concepto de ayuda humanitaria y revisiones de los debates existentes.

### **1.3.1. Ayuda humanitaria**

La ayuda humanitaria, también denominada asistencia humanitaria, se define tradicionalmente como “la acción de proporcionar asistencia básica de supervivencia a las

comunidades afectadas por crisis, conflictos o catástrofes para aliviar el sufrimiento y recuperar un cierto nivel de normalidad”<sup>1</sup> (Arcos González y Gan, 2024, p. 05).

La ayuda humanitaria se administra en función de cuatro principios: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. El principio de humanidad implica el compromiso de aliviar el sufrimiento causado por conflictos y desastres, garantizando un trato respetuoso de la dignidad de las personas. La neutralidad exige que los actores humanitarios se abstengan de tomar partido en hostilidades o controversias políticas, raciales, religiosas o ideológicas. La imparcialidad dicta que la acción humanitaria sea proporcionada en función de las necesidades de las víctimas, sin discriminación alguna. Finalmente, el principio de independencia establece que los actores humanitarios deben mantener su autonomía operativa al margen de objetivos políticos, económicos, militares u otros fines no humanitarios (Sharpe, 2024).

Es importante distinguir entre ayuda humanitaria y acción humanitaria: mientras que la primera se centra en la asistencia directa a poblaciones beneficiarias, la segunda incluye también actividades de cabildeo, incidencia política y denuncia pública. Asimismo, ambos conceptos difieren de los de socorro y ayuda de emergencia, que no necesariamente se adhieren a los principios humanitarios (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2000; Arcos González y Gan, 2024).

La concepción moderna de la ayuda humanitaria surgió en 1859, cuando Henry Dunant, tras presenciar la Batalla de Solferino, propuso crear sociedades voluntarias de socorro y establecer un marco legal internacional para proteger a los hospitales militares y el personal sanitario. Esta iniciativa llevó a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 1864 y al establecimiento de las Convenciones de Ginebra, sentando las bases del derecho internacional humanitario (Barnett, 2011).

Durante el siglo XX, las dos guerras mundiales pusieron a prueba e impulsaron el desarrollo del sistema humanitario. La cantidad de actores involucrados se incrementó significativamente: el CICR consolidó su rol, hubo un auge de organizaciones de ayuda privadas como Save the Children, y los Estados empezaron a crear organismos intergubernamentales como la Liga de Naciones, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja —renombrada Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en 1991—, el Alto Comisionado para los Refugiados y la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto gobiernos como organizaciones no gubernamentales (ONG) ampliaron sus actividades de socorro a nuevas poblaciones y, en el contexto de la descolonización, pasaron a centrarse en las necesidades humanitarias mundiales, lo que marcó la transición hacia un humanitarismo verdaderamente internacional, con un enfoque más integral y sostenible que el del socorro o de la ayuda de emergencia (Barnett, 2011; Davey et al., 2013).

La década de 1990, tras el fin de la Guerra Fría, trajo grandes cambios para el humanitarismo. El aumento de los conflictos civiles generó emergencias humanitarias complejas, mientras que la proliferación de operaciones de paz en lugares como Somalia, Ruanda y la ex Yugoslavia incrementó los fondos para la ayuda humanitaria (Anderson et al.,

---

<sup>1</sup>Todas las citas en lenguas extranjeras han sido traducidas al español por las autoras de este trabajo.

2018). La mayor libertad de acción del Consejo de Seguridad de la ONU y la cobertura mediática de desastres en tiempo real movilizaron la opinión pública y estimularon la respuesta internacional (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2000). Como consecuencia, aumentaron los fondos para ayuda humanitaria, mientras que disminuyeron los destinados a cooperación para el desarrollo. Esta asignación de fondos respondió tanto a crisis reales como a intereses geopolíticos, generando disparidades regionales, con un particular uso estratégico de la ayuda por parte de Estados Unidos (EE.UU.) como herramienta de política exterior (Anderson et al., 2018; Abrisketa y Pérez de Armiño, 2000).

Otro desarrollo significativo fue la proliferación de las ONG y su creciente protagonismo, especialmente en contextos de conflicto, debido a dos factores: el debilitamiento del principio de soberanía y la privatización de la ayuda humanitaria. Durante la Guerra Fría, la intervención de agencias de la ONU y ONG en crisis humanitarias requería el consentimiento del gobierno receptor, lo que limitaba la asistencia a áreas bajo control gubernamental. Sin embargo, a partir de la década de 1980, y especialmente tras el fin de la Guerra Fría, el principio de soberanía se erosionó tanto *de facto* como *de iure*. La aparición de Estados frágiles y fallidos generó escenarios de colapso de la administración pública, obligando a las agencias a negociar con las facciones que controlan los territorios. Desde el punto de vista jurídico, la creciente disposición de los gobiernos occidentales para intervenir por motivos humanitarios sin el consentimiento del gobierno receptor abrió la puerta a la autorización de intervenciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Paralelamente, la privatización de la ayuda aumentó la importancia de las ONG como canalizadoras de fondos internacionales, reduciendo el papel de agencias oficiales de cooperación y gobiernos receptores bajo argumentos de incapacidad o corrupción estatal. En ciertos contextos, ONG y agencias de la ONU asumieron funciones estatales, lo que redundó en el debilitamiento de las capacidades locales (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2000).

Otro cambio importante fue el creciente uso de fuerzas militares en intervenciones humanitarias, normalmente en forma de operaciones de mantenimiento de la paz. Esto generó debate en la comunidad humanitaria, ya que ONG como el CICR y Médicos Sin Fronteras (MSF), que valoraban su independencia, neutralidad e imparcialidad, veían a los contingentes militares como partes del conflicto y criticaban a los grupos que colaboraban con ellos por contravenir los principios humanitarios (Anderson et al., 2018).

Finalmente, en la década de 1990 surgieron iniciativas para mejorar la coordinación y la respuesta humanitaria. En 1991, los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad se incorporaron en el marco de la ONU mediante la Resolución 46/182 y el principio de independencia se estableció en 2003 con la Resolución 58/114 (Sharpe, 2024). En 1992, la ONU creó el Comité Permanente entre Organismos (IASC), un foro que reúne a los principales organismos operativos de asistencia de la ONU, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Cruz Roja), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONG internacionales. Una de las iniciativas más reconocidas es el Proyecto Esfera, iniciado en 1997, que busca establecer normas para la prestación de ayuda humanitaria mediante un esfuerzo colaborativo entre ONG y la Cruz Roja. Estas normas reflejan los

principios que deben guiar la práctica humanitaria y fueron adoptadas por las principales ONG, gobiernos y donantes (Anderson et al., 2018).

La llegada del siglo XXI trajo consigo nuevos desafíos derivados del crecimiento demográfico, el cambio climático, la escasez de recursos, el aumento de las desigualdades, los cambios económicos y geopolíticos, la evolución de la violencia y los avances tecnológicos: un incremento en el número de situaciones humanitarias, una transformación en la naturaleza de las crisis, una mayor asertividad de los Estados receptores de la ayuda y una limitación de recursos financieros (Labbé, 2012). Junto con acontecimientos trascendentales como las guerras en los Balcanes, la guerra civil y hambruna en Somalia, el genocidio en Ruanda y la subsecuente crisis de refugiados, y las repercusiones del 11-S, estos desafíos derivaron en una mayor modernización, estandarización y profesionalización del sector humanitario (Barnett, 2011; Walker y Maxwell, 2014). Sin embargo, no todos los actores humanitarios experimentaron estos cambios y aumentó la heterogeneidad del sector en cuanto a mecanismos y enfoques de la ayuda humanitaria (Fox, 2001; Walker y Maxwell, 2014).

Estas transformaciones generaron debates en torno de la actualidad del humanitarismo clásico, basado en los principios promovidos por Dunant, enfocado en preservar vidas y mitigar el sufrimiento humano sin involucrarse en las causas subyacentes de las crisis (Walker y Maxwell, 2014). El nuevo humanitarismo propuso integrar la intervención humanitaria con objetivos políticos y de desarrollo, argumentando que es necesario abordar tanto las causas como los síntomas de las crisis y que las intervenciones deben alinearse con la defensa de los derechos humanos y la prevención de abusos (Barnett, 2011; Fox, 2001; Walker y Maxwell, 2014; Yamashita, 2015).

Uno de los principales puntos de debate radica en la creciente difuminación de la línea divisoria entre la ayuda humanitaria y el posicionamiento político. Según Yamashita (2015), se trata de una doble transformación: por un lado, la “politización de la ayuda humanitaria”, ya que los trabajadores humanitarios se posicionan políticamente; y, por otro lado, la “humanización de la política”, en la medida en que los actores políticos emplean estratégicamente la ayuda humanitaria para impulsar sus propios objetivos e intereses. Los tradicionalistas argumentan que esto socava los principios fundamentales de la ayuda humanitaria, en especial los de neutralidad e imparcialidad. Los nuevos humanitarios, en cambio, sostienen que la neutralidad es una postura idealista y éticamente discutible, y promueven una ayuda más políticamente consciente, capaz de analizar el impacto actual y futuro de las intervenciones en la dinámica política de los conflictos. Asimismo, abogan por integrar la ayuda humanitaria con herramientas militares y diplomáticas, dentro de una estrategia coherente para la resolución de conflictos (Fox, 2001).

Según Fox (2001), tres factores clave impulsan la politización de la ayuda humanitaria: el cuestionamiento del principio de neutralidad, el enfoque basado en los derechos humanos y la integración de la ayuda al desarrollo.

El humanitarismo clásico, fundamentado en los supuestos de las guerras interestatales de los siglos XIX y XX, considera a la neutralidad esencial para asegurar el acceso de los trabajadores humanitarios a las poblaciones afectadas por el conflicto (Fox, 2001). Asimismo,

Seybolt (1996) destaca la importancia de la neutralidad para asegurar que la ayuda humanitaria se mantenga al margen de las preferencias o alianzas políticas de los donantes. La falta de neutralidad no solo afecta a la distribución de los recursos, sino que también puede debilitar la confianza de las comunidades receptoras, que podrían percibir la asistencia como tendenciosa o condicionada. Esta percepción expone al personal humanitario a acusaciones de complicidad o favoritismo y, en consecuencia, aumentando su vulnerabilidad y el riesgo de ser blanco de ataques (Walker y Maxwell, 2014).

La mayoría de los analistas humanitarios, como Walker y Maxwell (2014), subraya que los conflictos contemporáneos, a diferencia de los del pasado, son mayoritariamente internos e incluyen la participación de actores no estatales, asimetrías de poder, y financiamiento a través de economías de guerra, saqueo y explotación de recursos naturales. Además, se observa un mayor número de víctimas civiles y una politización de las identidades. Seybolt (1996) sostiene que la neutralidad es inalcanzable en este tipo de conflictos, especialmente en emergencias complejas, ya que cualquier intervención significativa de un actor externo, aunque humanitaria, influirá inevitablemente en el resultado político en contextos de alta carga política. De ahí que los nuevos humanitarios perciban a la neutralidad como una postura idealista y consideren que la ayuda humanitaria debería funcionar como un instrumento para promover la paz y la justicia, especialmente en contextos de asimetrías de poder y violaciones de derechos humanos. Este planteamiento ha suscitado críticas hacia la neutralidad estricta del CICR, que evita condenar las violaciones de derechos humanos, y ha sido objeto de denuncias por parte de periodistas debido a su negativa a testificar ante los tribunales de crímenes de guerra en Ruanda y Bosnia (Fox, 2001).

Las organizaciones humanitarias tradicionales se centran en aliviar el sufrimiento humano y satisfacer las necesidades básicas, proporcionando asistencia sin tener en cuenta las causas fundamentales de las crisis o los efectos de su intervención. Los principios de neutralidad e imparcialidad de estas organizaciones delimitan su actuación al contexto amplio de los derechos humanos, un rol asumido por los Estados, organizaciones intergubernamentales y agencias internacionales de derechos humanos (Fox, 2001). Sin embargo, el debilitamiento de la soberanía —evidente en Estados fallidos— y el creciente interés de los trabajadores humanitarios en integrar su labor en un enfoque de derechos han cuestionado estos métodos tradicionales de asistencia. Desde una perspectiva fundamentada en los derechos, se sostiene que todas las personas poseen un derecho inherente a niveles mínimos de trato, servicios y oportunidades simplemente por el hecho de ser humanos, más allá de sus necesidades de supervivencia o dignidad. Este enfoque abarca derechos básicos relacionados con la seguridad de los medios de subsistencia, como la nutrición, la educación y las oportunidades económicas, así como otras condiciones que garantizan una vida digna y que contribuyen a mejorar la situación de los derechos humanos. En este sentido, un enfoque de derechos es amplio y abarca múltiples dimensiones de la vida cultural, religiosa, social, económica y política (Barnett, 2011).

Las posturas de Fox (2001) y Slim (2002) ilustran las líneas centrales del debate sobre la relación entre derechos humanos y ayuda humanitaria. Fox (2001) sostiene que la asistencia humanitaria debe concentrarse exclusivamente en atender las necesidades inmediatas, evitando

un enfoque de derechos humanos, ya que este podría comprometer su neutralidad e involucrar a la ayuda en proyectos de transformación política. En contraste, Slim (2002) concibe los derechos como un fundamento sólido y legítimo para el humanitarismo, que trasciende una perspectiva filantrópica limitada y orienta la respuesta humanitaria hacia una visión más amplia y justa.

Por su parte, el concepto de ayuda humanitaria de desarrollo se relaciona estrechamente con el nuevo enfoque humanitario basado en los derechos. Tradicionalmente, los campos del humanitarismo y el desarrollo se concibieron como separados: el primero centrado en la asistencia inmediata para salvar vidas, y el segundo orientado a la creación de medios de subsistencia a largo plazo. No obstante, hacia fines de la década de 1980 emergió la tendencia a integrar la ayuda de emergencia con el desarrollo sostenible, con el propósito de contribuir a la paz y la justicia, y responder a las críticas que señalaban que la ayuda humanitaria podía prolongar los conflictos (Fox, 2001). En este contexto, se popularizó el concepto de “no hacer daño” (Anderson, 1996), centrado en la promoción de prácticas humanitarias que no exacerben el conflicto. El cambio de paradigma se volvió especialmente relevante ante la acumulación, complejización y naturaleza crónica de muchas crisis, particularmente en Estados débiles o fallidos (Rotem, 2022).

En este sentido, el nuevo humanitarismo, promovido por figuras como Short, aboga por la integración de un enfoque de desarrollo en la ayuda humanitaria como estrategia para salvar vidas a largo plazo (Fox, 2001). No obstante, detractores como Fox (2001) señalan los riesgos intrínsecos a esta perspectiva, tales como la imposición de condiciones a la asistencia, una propensión hacia el colonialismo y una posible desviación del objetivo primordial de salvar vidas en el corto plazo, lo cual podría resultar en una priorización de metas futuras en perjuicio de las necesidades inmediatas.

### **1.3.2. Emergencia humanitaria compleja**

Una emergencia humanitaria compleja es una crisis severa y multifacética que combina conflictos violentos, desplazamientos masivos de población, el colapso de las instituciones estatales y un deterioro grave de las condiciones de vida, como el acceso a alimentos, agua, servicios de salud y refugio. Estos eventos suelen ser prolongados y van más allá de los desastres naturales, ya que también involucran factores políticos, sociales y de seguridad (Barreto, 2021).

Las emergencias humanitarias complejas son claramente multidimensionales, por lo que requieren una respuesta integral y coordinada. No basta con atender sólo las necesidades inmediatas de la población afectada, como alimentos, agua potable y atención médica, sino que también se deben abordar problemas relacionados con la protección, la rehabilitación y el desarrollo a largo plazo (Duffield, 2001).

La provisión y protección de bienes esenciales en emergencias humanitarias complejas es un tema central en la literatura humanitaria. De Waal (1997) critica la tendencia de la ayuda humanitaria a enfocarse exclusivamente en la provisión de bienes, como alimentos y agua, sin considerar la protección física y jurídica de las poblaciones afectadas. Las crisis prolongadas,

como hambrunas o desplazamientos masivos, requieren tanto la provisión de recursos como la protección efectiva de los derechos humanos, en particular de los grupos más vulnerables. En la misma línea, Harrell-Bond (1986) argumenta que limitar la respuesta humanitaria a la entrega de bienes y servicios subestima la importancia de garantizar la seguridad y protección de las personas desplazadas y afirma que la ayuda humanitaria también debe incluir medidas la creación de marcos legales que protejan los derechos de los refugiados y desplazados. También cuestiona la dinámica de poder entre las agencias humanitarias y las poblaciones beneficiarias.

Este debate subraya la necesidad de estrategias humanitarias que combinen asistencia inmediata con una perspectiva a largo plazo que incluya la protección y los derechos de las comunidades afectadas. Esta interacción entre provisión y protección es crucial para evitar que las intervenciones humanitarias perpetúen situaciones de dependencia o vulnerabilidad, sin abordar las causas estructurales que originan las crisis (Barnett, 2011).

La rehabilitación y el desarrollo a largo plazo son pilares críticos para prevenir futuras crisis. Valencia Londoño (2019) argumenta que, en ausencia de estrategias de desarrollo económico sostenible que incluyan la revitalización de las economías locales, las poblaciones afectadas por conflictos y desastres tienden a recaer en situaciones de extrema vulnerabilidad. La rehabilitación post-crisis no puede limitarse a la reconstrucción física, sino que debe incluir la revitalización de economías locales mediante inversiones estratégicas y el fortalecimiento de capacidades productivas (Valencia Londoño, 2019). Los esfuerzos de rehabilitación también deben contemplar la reconstrucción del tejido social y la reintegración de las comunidades afectadas, así como la construcción de instituciones judiciales y administrativas para garantizar que los logros se mantengan a lo largo del tiempo (Duffield, 2001).

La novedad de la respuesta a las emergencias humanitarias complejas radica en su mayor vinculación con objetivos políticos y de seguridad, que en muchos casos las han vuelto dependientes de la cooperación con fuerzas militares. Esta securitización de la ayuda humanitaria ha diluido el principio de neutralidad (Chandler, 2004).

Las agencias humanitarias cada vez están más condicionadas por las agendas políticas de los donantes. El uso de la ayuda humanitaria como herramienta política complica la labor de las ONG, que enfrentan dificultad para mantener su autonomía (Correa Da Silva, 2020). Asimismo, la vinculación de la ayuda humanitaria con objetivos de seguridad puede infringir la soberanía de los Estados receptores (García Neumann, 2009). Aún si la intervención humanitaria está motivada por la protección de los derechos humanos, la influencia de intereses geopolíticos socava su legitimidad y la confianza de las poblaciones afectadas.

El tema de la defensa de los derechos humanos en contextos de emergencia humanitaria compleja es un tema crítico y ampliamente debatido en la literatura académica. Al operar en entornos donde las violaciones de derechos humanos son generalizadas, los actores humanitarios enfrentan el dilema de tomar o no una postura activa respecto a cuestiones de justicia, reparación y rendición de cuentas. Para quienes se pronuncian en ese sentido, el enfoque humanitario se vincula estrechamente con la protección y promoción de los derechos humanos (Barnett y Weiss, 2008).

El concepto de responsabilidad de proteger, impulsado por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados en su informe de 2001, subraya que la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir cuando un Estado no puede proteger a sus ciudadanos de crímenes como el genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Este principio redefine la soberanía estatal, al afirmar que la soberanía conlleva responsabilidades hacia los ciudadanos, y que la inacción ante violaciones masivas de derechos humanos justifica la intervención externa (Correa Da Silva, 2020).

La intervención humanitaria está justificada cuando se violan los derechos humanos de manera sistemática. Sin embargo, esta intervención siempre debe ser proporcional, es decir, que los medios utilizados deben ser los mínimos necesarios para salvar vidas y restaurar los derechos humanos (Wheeler, 2000). Las intervenciones no solo deben centrarse en salvar vidas a corto plazo, sino también en construir mecanismos duraderos que prevengan futuras violaciones de derechos humanos y fortalezcan la justicia y el imperio de la ley (Barnett y Weiss, 2008).

### **1.3.3. Estado fallido**

Un Estado fallido es aquel que ha perdido su capacidad para ejercer funciones esenciales de gobernanza, mantener el control territorial, proporcionar servicios públicos básicos, proteger los derechos de sus ciudadanos y actuar con legitimidad ante la comunidad internacional (Alonso Berrio, 2003). Este tipo de Estado presenta una estructura gubernamental y una capacidad de gobernanza tan debilitadas que no puede cumplir con las funciones básicas que definen a un Estado soberano (Ruiz Medrano, 2011).

Según la definición clásica del Estado moderno de Max Weber, la soberanía estatal se define por el monopolio legítimo del uso de la fuerza en un territorio (Inda, 2012). Este monopolio no solo implica la capacidad de ejercer el control físico, sino también de establecer el orden, la ley y las instituciones que lo sostienen. La pérdida del control físico o la incapacidad para ejercer autoridad legítima y constante dentro de un territorio es una característica central del Estado fallido (Call, 2008; Ruiz Medrano, 2011).

Cuando un Estado pierde el control del territorio, actores no estatales como milicias, insurgencias, grupos terroristas o incluso redes criminales organizadas tienden a llenar el vacío, desempeñando funciones de autoridad y gobernanza que corresponden al Estado (Alonso Berrio, 2003; Inda, 2012). Este proceso es uno de los síntomas más visibles y graves del carácter fallido del Estado (Call, 2008).

Weber señala que el Estado se caracteriza no solo por controlar el uso legítimo de la fuerza, sino también por establecer instituciones que aseguran la cohesión social y el respeto por la autoridad. Pero con la pérdida del control territorial se desintegra también la capacidad de administración y provisión de bienestar social. La pérdida de control territorial también debilita la posición del Estado en el sistema internacional (Call, 2008).

Cuando el Estado pierde la capacidad de tomar decisiones efectivas, proporcionar seguridad, ofrecer servicios públicos básicos, administrar justicia e implementar políticas

sociales, pierde legitimidad. La pérdida de legitimidad es una característica central del Estado fallido (Rotberg, 2003).

El vacío de autoridad puede propiciar la intervención de actores internacionales que, si bien pueden contribuir a estabilizar la situación, también pueden crear dependencia externa e inhibir el desarrollo de instituciones estatales (Rotberg, 2003).

La incapacidad de un Estado para interactuar diplomáticamente con otros actores internacionales es otro rasgo distintivo de los Estados fallidos (López Martín, 2011). Cuando un Estado no puede establecer o mantener relaciones diplomáticas efectivas o cumplir con los compromisos derivados de tratados y acuerdos internacionales, su soberanía y legitimidad en el plano internacional se ven comprometidas (Krasner, 2001). Esta situación configura lo que Krasner (2001) denomina una “desintegración diplomática” y Jackson (2009) designa como “soberanía negativa”, caracterizada por la incapacidad de defender sus intereses en foros internacionales. En muchos casos, los Estados fallidos dependen de la ayuda internacional para sobrevivir, y su aislamiento agudiza su vulnerabilidad (López Martín, 2011). La situación puede ser aprovechada por actores externos para intervenir bajo pretextos humanitarios, de seguridad o de gobernanza, debilitando aún más su estructura y perpetuando su condición de Estado fallido (García Neumann, 2009).

#### **1.3.4. Rendición de cuentas**

Con orígenes en el campo de la auditoría legal y contable, la rendición de cuentas, del inglés *accountability*, refiere a la obligación de las entidades públicas de informar y explicar sus actividades a la ciudadanía. En su uso actual en las ciencias sociales, se vincula con los conceptos de democracia, transparencia, e integridad pública. Sin embargo, en otros idiomas como el español, el término no se ha desvinculado de su origen legal, por lo que no necesariamente confiere estos otros elementos (Bovens, 2007; Lindberg, 2013). Por tanto, no sería posible decir que “rendición de cuentas” es una traducción correcta de “*accountability*”, aunque, con motivo de facilitar la lectura, se utilizará “rendición de cuentas” como equivalente del término en inglés en el contexto humanitario a lo largo de este trabajo.

Bovens et al. (2014) conceptualizan la rendición de cuentas a partir de la teoría del principal-agente, según la cual los agentes tienen la obligación de rendir cuentas y los principales tienen derecho a exigirla. Esta relación suele comprender tres etapas. En primer lugar, el agente debe informar al principal sobre su desempeño, proporcionando datos sobre las tareas realizadas, los procedimientos empleados y los resultados obtenidos. En casos de fallos o incidentes, esto incluye la presentación de justificaciones. En segundo lugar, el principal puede interrogar al agente y cuestionar tanto la validez de la información como la legitimidad de su conducta. Finalmente, el principal emite un juicio sobre el agente, que puede traducirse en aprobación de informes, denuncia de políticas o sanción de comportamientos. La rendición de cuentas es retrospectiva, ya que implica la evaluación de acciones pasadas, y consecencial, puesto que puede derivar en sanciones o ajustes.

En la ciencia política, el concepto tiene sus raíces en el liberalismo de John Locke (1690), quien destacó la importancia de la separación entre gobernantes y gobernados y la

existencia para el desarrollo de una opinión pública con capacidad de crítica para garantizar la responsabilidad política de los gobernantes.

O'Donnell (1993; 1998; 2001) diferencia entre rendición de cuentas vertical y horizontal. El concepto de rendición de cuentas vertical se refiere fundamentalmente a los mecanismos democráticos formales que permiten a los ciudadanos ejercer control sobre sus gobernantes. Este tipo de rendición de cuentas opera principalmente a través de las elecciones periódicas, donde los votantes tienen la oportunidad de premiar o castigar a los funcionarios públicos basándose en su desempeño. O'Donnell planteó que en las democracias representativas, las elecciones constituyen el principal canal mediante el cual los ciudadanos pueden hacer responsables a sus gobernantes, estableciendo así una relación vertical de control desde abajo (ciudadanos) hacia arriba (gobernantes).

Sin embargo, O'Donnell también señaló las limitaciones de este mecanismo, particularmente en el contexto latinoamericano, donde identificó lo que llamó “democracias delegativas”. En estas, una vez elegidos, los gobernantes tienden a actuar con considerable autonomía respecto a las preferencias de los electores, y el control ciudadano queda restringido principalmente al momento electoral, siendo insuficiente para garantizar la responsabilidad gubernamental durante los períodos entre elecciones.

Es precisamente ante estas limitaciones que Peruzzotti y Smulovitz (2002) desarrollaron el concepto de rendición de cuentas societal. Este concepto complementa la noción de rendición de cuentas vertical al enfocarse en mecanismos no electorales de control que operan entre períodos electorales. La rendición de cuentas societal se refiere a un conjunto diverso de iniciativas llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y medios de comunicación independientes que monitorean la conducta de funcionarios públicos, exponen casos de corrupción o abuso de poder, y activan la acción de instituciones encargadas de ejercer rendición de cuentas horizontal.

Held (1996) integra estas variantes de rendición de cuentas en el concepto de rendición de cuentas democrática, que además del mecanismo fundamental del sufragio universal, incluye otros mecanismos institucionales y sociales entre los cuales se destacan los derechos de petición, las acciones judiciales, la protección legal de la libertad de asociación y las normas de transparencia y acceso a la información que permiten que periodistas y actores de sociedad civil fiscalicen al poder, complementando los controles entre organismos del gobierno y oficinas como los auditores públicos. Según Warren (2014), estos mecanismos trabajan en conjunto para reforzar tres pilares fundamentales de la rendición de cuentas democrática: limitar vulnerabilidades, justificar decisiones y empoderar a la ciudadanía.

La rendición de cuentas horizontal, por su parte, opera a través de un sistema de pesos y contrapesos institucionales donde diferentes organismos estatales se supervisan y limitan mutuamente (O'Donnell, 1998). Los principales mecanismos de rendición de cuentas horizontal son la división de poderes y los frenos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos como tribunales constitucionales, contralorías o auditorías generales, defensorías del pueblo, fiscalías independientes, bancos centrales autónomos, comisiones electorales y agencias anticorrupción.

Adicionalmente, en grupos como unidades militares emerge una responsabilidad horizontal interna colectiva —o lateral, en vez de horizontal, para enfatizar las interacciones de responsabilidad entre los miembros de un mismo grupo, diferenciándose de las relaciones horizontales entre diferentes grupos o estructuras—, donde los miembros del grupo se supervisan mutuamente mediante normas informales, complementando la rendición de cuentas formal hacia sus superiores (Fox, 2007).

Más recientemente, autores como Ackerman (2004) y Olvera e Isunza Vera (2004) introdujeron una tercera dimensión: la rendición de cuentas diagonal o transversal, que combina elementos de los modelos anteriores e involucra la colaboración entre actores estatales y sociales a través de mecanismos participativos.

En la esfera internacional, la viabilidad de un sistema de rendición de cuentas mediante el cual los actores con poder rindan cuentas ante las personas y grupos cuyas vidas afectan es defendida por Held (2004) y rechazada por utópica por quienes, como Keohane (2006), consideran que requeriría de un equivalente global del Estado y la esfera pública nacionales.

Grant y Keohane (2005) subrayan que, sin embargo, existen a nivel internacional mecanismos de rendición de cuentas jerárquicos, de supervisión, fiscales, jurídicos, de mercado, entre pares y de reputación pública. Los autores destacan también que los organismos intergubernamentales se encuentran entre los actores más responsables en el ámbito global, pese a carecer de legitimidad democrática y no responder ante aquellos cuyas vidas afectan o en cuyo nombre actúan. El problema, por lo tanto, no es la falta de mecanismos de rendición de cuentas, sino el hecho de que estos refuerzan las políticas de actores dominantes que no siempre están sujetos a los mismos estándares democráticos que se esperan en el ámbito nacional.

Según Goodhart (2014), este problema tiene raíces en una confusión conceptual sobre la rendición de cuentas, que proviene de su uso ambiguo en la literatura, donde se emplea tanto para describir mecanismos y procesos específicos como para referirse a una virtud política normativa. Por un lado, los procesos de rendición de cuentas se enfocan en los mecanismos a través de los cuales los responsables supervisan y sancionan a los detentores del poder, evaluando su desempeño en función de estos mecanismos. Por otro lado, la virtud de la rendición se refiere a consideraciones normativas, incluyendo tanto las normas que guían el comportamiento de los agentes, como su obligación de rendir cuentas en función de dichas normas. Esta virtud está vinculada a principios democráticos como la transparencia, la responsabilidad, la participación y la deliberación (Bovens, 2010).

La confusión entre ambos conceptos explica por qué muchos actores transnacionales, aunque sujetos a mecanismos eficaces de rendición de cuentas, son percibidos como ilegítimos. Esto se debe a que los mecanismos que regulan su actuación no se basan en normas democráticas, lo que socava su legitimidad política. Así, la legitimidad de la rendición de cuentas en el ámbito global no depende solo de la eficacia de los mecanismos, sino de su alineación con principios democráticos fundamentales (Goodhart, 2014). Por tanto, Goodhart (2014) subraya la importancia de distinguir entre los mecanismos y las virtudes de la rendición de cuentas, ya que la legitimidad política de un sistema global de gobernanza no se garantiza únicamente por la existencia de mecanismos eficaces, sino por su congruencia con las normas

democráticas esenciales.

En el terreno de la acción humanitaria, la rendición de cuentas es fundamental para garantizar que las organizaciones sean receptivas a las necesidades de las poblaciones afectadas. De ahí que las agencias humanitarias deban rendir cuentas tanto a quienes financian las actividades como a las comunidades a las que sirven, siguiendo criterios establecidos que pueden ser morales, religiosos, jurídicos, fiscales o culturales (Anstorp y Horst, 2021).

La rendición de cuentas en la ayuda humanitaria posee tanto una connotación legal, vinculada a estándares que obligan a los proveedores de ayuda humanitaria a rendir cuentas, sobre todo financiera, jurídica y democrática, como un sentido moral fundamentado en los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad (Anstorp y Horst, 2021). La premisa es que la rendición de cuentas no solo constituye un derecho de las poblaciones afectadas, sino que también contribuye al mejor desempeño del sector, mejorando la capacidad de respuesta a las necesidades, reforzando la calidad de la asistencia, y fomentando la confianza y el empoderamiento de las comunidades (Darcy et al., 2013). Así, la rendición de cuentas en la ayuda humanitaria también se inscribe dentro de la categorización propuesta por Bovens (2010), que la distingue como mecanismo o como virtud. Como mecanismo, se entiende en términos normativos, es decir, como un conjunto de reglas que permiten evaluar el comportamiento de los agentes humanitarios. Por otro lado, cuando se percibe como una virtud, se considera una cualidad positiva inherente a dichos agentes, reflejando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la ética en su labor.

Históricamente, la rendición de cuentas ascendente fue la primera en consolidarse (Hilhorst et al., 2021; Crack, 2013), centrándose en las relaciones entre actores humanitarios, donantes y autoridades reguladoras (Edwards y Hulme, 1995; Crack, 2013; Anstorp y Horst, 2021). Estas relaciones se basan en requisitos fiscales y legales relacionados con el uso de recursos, que los actores humanitarios deben cumplir para operar y acceder a fondos. (Hilhorst et al., 2021; Baranda y Büchner, 2019; Crack, 2013; Roberts, 2005; Ebrahim, 2003). Aunque estos mecanismos son efectivos para garantizar el uso adecuado de los fondos (Anstorp y Horst, 2021), también generan desafíos importantes. En particular, la asimetría de poder, con frecuencia obliga a los actores humanitarios a alinearse con las prioridades de los donantes y los coloca bajo intenso escrutinio, enfrentándolos a condicionalidades excesivas que les demandan recursos significativos, ralentizan sus operaciones y reducen su flexibilidad (Hilhorst et al., 2021; Anstorp y Horst, 2021; Ebrahim, 2003). Asimismo, este enfoque prioriza la rendición de cuentas financiera, la adhesión a procesos y la verificación de resultados por encima de los aspectos éticos y morales —donde los mecanismos de informes y evaluaciones tienden a enfocarse en resultados que cumplan con los requisitos impuestos, en lugar de centrarse en las responsabilidades morales individuales (Knox Clarke, 2018; Anstorp y Horst, 2021)— y por sobre la relación con las comunidades beneficiarias —que suelen carecer de medios para exigirles explicaciones por las acciones realizadas en su nombre (Roberts, 2018).

Como respuesta a las limitaciones de la rendición de cuentas ascendente, desde mediados de la década de 1990 ha evolucionado la rendición de cuentas hacia las poblaciones afectadas (AAP, por sus siglas en inglés), sobre la base del reconocimiento de que ellas son la

razón de ser del trabajo humanitario (Egeland, 2005; Hilhorst et al., 2021; Crack, 2013). (Egeland, 2005). Este enfoque representa un compromiso activo de los actores humanitarios para ejercer su poder de manera responsable, considerando y respondiendo a las demandas de las personas a las que buscan ayudar (IASC, 2023).

La rendición de cuentas horizontal surgió para enfrentar las limitaciones del modelo vertical (O'Donnell, 1998; Hilhorst et al., 2021). Se basa en las interacciones y responsabilidades entre los actores humanitarios, donde se fomenta elevar los estándares e intercambiar buenas prácticas (Crack, 2019).

También fomenta la rendición de cuentas interna, que refiere a las responsabilidades que los actores humanitarios tienen con su misión y con las personas que forman parte de la organización, incluyendo a empleados, voluntarios y miembros (Ebrahim, 2003). Los mecanismos de rendición de cuentas interna pueden incluir reuniones de equipo, evaluaciones del rendimiento y oportunidades de formación (Christensen y Ebrahim, 2006), además de buenas prácticas en la gestión de los recursos humanos (Crack, 2019).

Estos avances se reflejaron en la proliferación de códigos, normas, cartas, plataformas de coordinación, mecanismos y marcos para orientar a los actores humanitarios (ver IASC, 2012; ACNUR, 2020; CHS, 2024; CICR, 2019; Doherty, 2023), además de iniciativas de autorregulación o de regulación entre pares, estándares o “clubes” de rendición de cuentas (Roberts, 2018; Crack, 2019; Anstorp y Horst, 2021). Entre 2000 y 2012 el número de iniciativas e instrumentos de “calidad y rendición de cuentas” se triplicó, pasando de 42 a 147 (Tan y Von Schreeb, 2015), lo que ha sido calificado como una “revolución de la rendición de cuentas” (Davis, 2007). En este contexto, la calidad de la ayuda (Egeland, 2005) y la responsabilidad moral cobraron mayor importancia (Anstorp y Horst, 2021), traducándose en nuevos procedimientos para la rendición de cuentas a poblaciones específicas y mecanismos de participación y tramitación de reclamaciones (Roberts, 2018).

Sin embargo, los beneficios de la rendición de cuentas humanitaria han sido cuestionados de varias maneras. La rendición de cuentas descendente carece de mecanismos concretos y comunes a todos los actores humanitarios (Sawandi y Thomson, 2014; Anstorp y Horst, 2021; Knox Clarke, 2018). A diferencia de la rendición de cuentas ascendente, la descendente es un proceso de habilitación más que de supervisión (Fry, 1995), y es percibido como un componente secundario más que un objetivo en sí mismo (Knox Clarke, 2018). De ahí que se la haya utilizado más para conferir legitimidad a las prácticas que rendir cuentas efectivamente a las poblaciones beneficiarias (Knox Clarke, 2018; Tan y Von Schreeb, 2015).

Si bien existe consenso respecto de la importancia de la participación para la rendición de cuentas descendente (Hilhorst et al., 2021; Ebrahim, 2003), en la práctica las opiniones y críticas de los beneficiarios casi nunca son bien aceptadas y rara vez provocan modificaciones en las prácticas humanitarias. En las escasas ocasiones en que las quejas se consideran positivamente, la sustancia de las críticas suele quedar sin resolver (Knox Clarke, 2018). Asimismo, es común que las personas afectadas por crisis se limiten a responder preguntas o recibir información, aunque los temas que les preocupan estén ausentes. Además, la influencia de figuras de autoridad, como líderes comunitarios o políticos, puede reforzar desigualdades y

limitar el acceso equitativo a servicios humanitarios (Roberts, 2018). Adicionalmente, la participación suele limitarse a proyectos individuales en vez de al conjunto del trabajo humanitario de la organización, lo cual impide una comprensión real sobre las dinámicas de poder y el potencial para lograr cambios sistémicos (Baranda y Büchner, 2019). En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas horizontal, hay incertidumbre sobre su eficacia real, ya que pueden resaltar asimetrías de poder donde los actores de mayor tamaño tienen más capacidades y recursos para cumplir con los diferentes estándares y requisitos que los más pequeños, especialmente los del “sur global” (Crack, 2019). Los actores más poderosos no muestran interés en mejorar las capacidades de las ONG locales (Hilhorst et al., 2021). También hay dudas sobre si la motivación de los actores para formar parte de iniciativas horizontales es realmente mejorar las prácticas o elevar la imagen pública (Crack, 2019).

La rendición de cuentas interna, por su parte, es importante porque su ausencia puede repercutir sobre la rendición de cuentas externa (Ebrahim, 2003). Sin embargo, es común que las organizaciones no admitan e investiguen abiertamente fracasos e incluso faltas éticas o legales, como casos de acoso, violencia sexual o discriminación, por miedo a las repercusiones con los donantes (Crack, 2013).

En los últimos años ha habido un reconocimiento creciente de estos problemas. En la ONU, por ejemplo, en 2016 el Secretario General nombró a un Coordinador Especial para mejorar la respuesta de la organización a la explotación y el abuso sexual, y al año siguiente presentó una estrategia en la Asamblea General con el mismo fin. Sin embargo, en la práctica los avances son lentos y el tema recibe poca atención. Tampoco hay claridad sobre cómo se implementan los estándares y códigos de conducta (Knox Clarke, 2018) o sobre el grado de cumplimiento de las normativas (Tan y Von Schreeb, 2015).

En suma, la rendición de cuentas dentro del sector humanitario comprende varias dimensiones. Incorpora variados actores con diferentes grados de poder (actores humanitarios, donantes y beneficiarios), motivaciones (responsabilidad jurídica y principios morales normativos) y mecanismos (internos y externos, legales y voluntarios). A pesar de que no hay una definición común de rendición de cuentas y persisten los desacuerdos, hay consenso en que es un proceso relacional que involucra responsabilidad ante múltiples actores (Ebrahim, 2003; Edwards y Hulme, 1995; Grant y Keohane, 2005). Su desarrollo ha sido tal en el campo de la ayuda humanitaria que hoy en día los actores humanitarios arriesgan gravemente su reputación si no logran demostrar elevados niveles de rendición de cuentas (Crack, 2019) hacia sus diversas partes interesadas. Como explica Ebrahim (2003), la multiplicidad de actores genera inevitablemente competencia entre las diferentes direcciones hacia las cuales los actores humanitarios deben rendir cuentas, ya que no es posible satisfacer todas las demandas en la misma medida (Edwards y Hulme, 1995; Anstorp y Horst .2021).

#### **1.4. Metodología y fuentes**

A efectos de responder las preguntas de investigación, la estrategia metodológica empleada es la del estudio de caso, donde el valor reside en el caso estudiado en sí mismo debido a sus especificidades propias. Haití constituye un escenario único, caracterizado por elevados niveles de pobreza tanto rural como urbana, estructuras gubernamentales frágiles,

presencia del crimen organizado, brotes esporádicos de violencia y un notable grado de degradación medioambiental. El terremoto de 2010 exacerbó estas vulnerabilidades y evidenció deficiencias significativas en la respuesta humanitaria. El análisis de este caso permite examinar en qué medida dichas deficiencias pueden atribuirse a limitaciones en los mecanismos de rendición de cuentas, considerando que el contexto haitiano ofrecía condiciones propicias para su escasa activación. A partir de este análisis, se busca extraer lecciones que ayuden a comprender mejor los desafíos en la gestión de la ayuda humanitaria, destacando la importancia de la rendición de cuentas.

Para desarrollar este estudio se utilizaron fuentes tanto primarias como secundarias. Entre las fuentes primarias, destacan entrevistas semiestructuradas a cuatro actores clave.

La primera entrevista se realizó a Nathalye Cotrino, Investigadora Sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien ha investigado y publicado numerosos informes sobre abusos relacionados con conflictos armados, represión contra manifestantes y atentados contra el Estado de derecho en Haití, incluyendo publicaciones como “World Leaders Should Stand up for Haiti” (Cotrino y Sawyer, 2024), “Children Are Among the Hardest Hit by Haiti’s Violence” (Cotrino, 2024), y ““Viviendo una pesadilla”: Haití necesita una respuesta urgente y basada en los derechos humanos ante la escalada de la crisis” (Cotrino y Sawyer, 2023).

En segunda instancia se entrevistó a la Dra. Claire Antone Payton, historiadora especializada en América Latina y el Caribe, con una década de experiencia investigando la historia de Haití. Actualmente trabaja en un libro sobre Puerto Príncipe durante la era Duvalier y es la creadora del “Haiti Memory Project”, una colección de más de 100 archivos de testimonios de supervivientes del terremoto de 2010, que constituye uno de los archivos más íntimos de la catástrofe y sus secuelas.

La tercera entrevista se realizó a la Dra. Sabine Lee, Profesora de Historia Moderna en la Universidad de Birmingham, cuya investigación actual se centra en las consecuencias sociales de la guerra, particularmente en la violencia de género y en los niños nacidos en contextos bélicos. Como coordinadora de CHIBOW, una red internacional interdisciplinaria e intersectorial sobre los niños nacidos de la guerra, e investigadora principal de un proyecto sobre los hijos de las fuerzas de paz en Haití, ha estudiado en profundidad la situación de los “bebés de la paz”, concebidos por personal asociado a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

La cuarta entrevista se realizó a un exfuncionario de la ONU que solicitó mantener su anonimato.

Complementariamente, se analizaron testimonios de haitianos, periodistas e investigadores, obtenidos a través de artículos de prensa y publicaciones como “The Big Truck That Went By: How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster”, de Jonathan M. Katz. También se consultaron documentos, reportes, memorandos y comunicaciones del gobierno de Haití, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), así como de ONG internacionales como Oxfam y

organizaciones internacionales como la ONU, la Cruz Roja y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

Respecto a las fuentes secundarias, la investigación se apoyó en análisis de documentos oficiales, bases de datos, artículos académicos, libros especializados y publicaciones periodísticas que abordan tanto la situación específica de Haití como aspectos generales de la ayuda humanitaria y los mecanismos de rendición de cuentas.

## 2. La respuesta humanitaria: actores y acciones

La ayuda humanitaria en Haití se inscribe en un largo proceso de intervención internacional, el cual se ha visto influido por una historia marcada por dictaduras, inestabilidad política y desastres naturales recurrentes (Aín, 2009). En este contexto, la relación entre EE.UU. y Haití ha sido particularmente compleja y ambivalente.

Después de negarse a reconocer la independencia haitiana durante casi sesenta años, en 1915, EE.UU. ocupó Haití, argumentando la necesidad de restaurar el orden político en un país que, en los últimos cinco años, había visto la destitución o asesinato de siete presidentes. Esta ocupación inicial sentó las bases para una intervención que, con el tiempo, se ha transformado en diversas formas de ayuda internacional, aunque no siempre con resultados positivos o sostenibles para el desarrollo del país. Durante la ocupación, EE.UU. controló la seguridad, política y finanzas nacionales de Haití (Roy y Cara Labrador, 2024), y, al retirarse en 1934, no hubo un proceso de transición gubernamental, y realizó escasos esfuerzos para establecer instituciones locales o preparar a los haitianos para el liderazgo. Además, mantuvo el control sobre las finanzas de Haití hasta 1947 (Ramachandran y Walz, 2015).

Durante las décadas de 1950 y 1960, Haití estuvo bajo el régimen dictatorial de François “Papa Doc” Duvalier, quien asumió el poder en 1957 con el apoyo de EE.UU. (Ramachandran y Walz, 2015). Este período se definió por una fuerte represión política, corrupción y violaciones a los derechos humanos. A su vez, la administración de Duvalier utilizó la fuerza paramilitar de los Tonton Macoutes para mantener el control y suprimir a la oposición (Derby y Turits, 1993).

Las primeras intervenciones de organizaciones internacionales se dieron a finales de los años 60. A principios de los 70, la ONU jugó un papel crucial con programas de desarrollo rural, salud pública y educación, como parte de sus esfuerzos globales para mejorar las condiciones socioeconómicas en los países en vías de desarrollo (Zavaleta Hernández y Franco Silva, 2020). Simultáneamente, diversas ONG como Caritas Internationalis y CARE comenzaron a operar en Haití, centrándose en proyectos de desarrollo comunitario y saneamiento básico. Aunque la asistencia internacional proporcionó recursos esenciales para el desarrollo de infraestructuras básicas y la mejora de los servicios, la corrupción y mala gestión por parte del gobierno de Duvalier limitaron significativamente su impacto, con gran parte de la ayuda malversada o utilizada para fortalecer el régimen dictatorial (Derby y Turits, 1993).

Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier sucedió a su padre en 1971, continuando con un régimen caracterizado por la corrupción y la represión. A pesar de esto, hubo una apertura limitada a la ayuda externa, y el país experimentó ciertos intentos de modernización económica (Trouillot, 2018). USAID se convirtió en uno de los principales donantes en Haití, proporcionando asistencia en agricultura, salud y educación. Además, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron a intervenir, ofreciendo préstamos y asistencia técnica para proyectos de desarrollo. Aunque se observaron mejoras en la infraestructura agrícola y en la provisión de servicios de salud y educación, la corrupción

endémica y la falta de capacidad institucional del gobierno haitiano limitaron el impacto de estos programas. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI a menudo exacerbaban las desigualdades económicas (Zavaleta Hernández y Franco Silva, 2020).

La década de 1980 fue un período de creciente descontento social y político. La corrupción y la represión del régimen de Duvalier provocaron una serie de protestas y disturbios, culminando en su derrocamiento en 1986 (Roy y Cara Labrador, 2024). Haití entró entonces en un período de transición hacia la democracia, aunque marcado por una inestabilidad continua. Durante este tiempo, la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con la ONU, jugó un papel importante en apoyar la transición democrática y proporcionar asistencia humanitaria y técnica. Además, hubo un aumento en la actividad de ONG y organizaciones religiosas, como MSF y la Iglesia Católica, que se centraron en proporcionar asistencia médica, alimentaria y de desarrollo comunitario (Lengyel et al., 2010). La transición a la democracia en 1986, con una nueva constitución e instituciones, y la elección de Jean-Bertrand Aristide en 1990 y 2004 no significó el fin de la inestabilidad política: Aristide fue derrocado en ambos casos —en golpes de Estado donde el ejército haitiano y el Servicio Nacional de Inteligencia de Haití, instituciones fundadas y financiadas por EE.UU., jugaron roles importantes (Crawford-Roberts, s.f.)—, provocando la intervención militar estadounidense para restaurar la democracia (Roy y Cara Labrador, 2024).

Entre 2004 y 2010, Haití enfrentó una serie de desafíos que profundizaron su crisis política, económica y humanitaria. Durante este período, Haití sufrió el impacto de varios desastres naturales. En 2004, la tormenta tropical Jeanne provocó severas inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Gonaïves, cobrándose la vida de más de 3.000 personas y dejando a decenas de miles sin hogar (BBC News, 2010b). Posteriormente, en 2008, el país fue golpeado por cuatro ciclones consecutivos —Fay, Gustav, Hanna e Ike— que destruyeron gran parte de la infraestructura agrícola y dejaron a más de 800.000 personas en situación de emergencia humanitaria (Schuller, 2012). Estas catástrofes agravaron la inseguridad alimentaria y la crisis socioeconómica, impulsando una mayor dependencia de la ayuda internacional.

El devastador terremoto que sacudió Haití el 12 de enero de 2010, con una magnitud registrada de 7,0 en la escala de Richter, tuvo su epicentro en las cercanías de la capital, Puerto Príncipe. El impacto del terremoto dejó a Haití sumido en una crisis humanitaria de proporciones enormes. Además de las devastadoras pérdidas de vidas humanas y la destrucción generalizada de la infraestructura, el desastre agudizó los desafíos sociales y económicos previamente existentes en el país (Durán Vargas, 2010). Entre estos desafíos destacan la persistente pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios básicos para la población afectada. A su vez, la dificultad de obtención de financiamiento adecuado, el no establecimiento de una gobernanza efectiva y las complicaciones en los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo del país, convirtieron a este episodio en el comienzo de una brutal crisis humanitaria en Haití (Gauthier, 2010).

Esto llevó a que la respuesta humanitaria tuviera desafíos significativos. La destrucción de infraestructuras, la falta de transporte adecuado, los sistemas de comunicación

extremadamente limitados, la escasez de equipos de rescate adecuados, así como la insuficiencia de servicios médicos obstaculizaron gravemente los esfuerzos humanitarios (Cecchine et al., 2013; Durán Vargas, 2010). Estas dificultades se vieron agravadas por vulnerabilidades estructurales preexistentes, como la pobreza sistémica, la débil gobernanza y la recurrente exposición a desastres naturales. Además, el contexto urbano del desastre planteó retos logísticos y de acceso inéditos para muchos actores humanitarios. A ello se sumó la afectación directa de los principales actores locales e internacionales que habrían liderado la respuesta —incluyendo el gobierno de Haití, la sociedad civil, la MINUSTAH y las organizaciones humanitarias presentes en el país—, quienes sufrieron una considerable pérdida de capacidades, recursos y personal, lo que comprometió gravemente la efectividad de la respuesta en los primeros momentos de la crisis (IASC, 2010). Adicionalmente, el brote de cólera de octubre de 2010, que entre su aparición y febrero de 2019 registró un total de 820.000 casos y 9.792 muertes (WHO, 2022), causó problemas en la respuesta de ayuda (Disasters Emergency Committee, s.f.).

A pesar de esto, la comunidad internacional se movilizó rápidamente para brindar asistencia humanitaria, con la participación de más de 400 grupos, incluidos gobiernos, organismos intergubernamentales y ONG, proporcionando alimentos, agua, refugio, atención médica y educación a millones de personas, además de empleo temporal y reubicación de desplazados (IASC, 2010). Los donantes internacionales comprometieron 10.400 millones de dólares, con 6.400 millones desembolsados hasta 2013 y 3.800 millones asignados a proyectos futuros (Congreso de los Estados Unidos, 2014).

Esta sección examina los principales actores involucrados en la respuesta al desastre y las medidas implementadas para la asistencia inmediata y la reconstrucción a largo plazo en Haití.

## **2.1. Estados Unidos**

Desde la promesa de fondos hasta el despliegue de personal militar, así como la dotación de recursos, la evacuación de ciudadanos y la implementación de proyectos, la respuesta humanitaria al terremoto incluyó a numerosos gobiernos nacionales de todo el mundo (The Guardian, 2011). EE.UU. fue ampliamente el mayor contribuyente individual a los esfuerzos humanitarios.

Tras el terremoto, el gobierno haitiano solicitó ayuda urgente a EE.UU. La administración de Obama rápidamente designó a USAID para liderar la respuesta estadounidense, respaldada significativamente por el DOD, bajo la supervisión del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el mando de combate estadounidense (COCOM) responsable de la región geográfica de Haití (Cecchine et al., 2013).

En la Conferencia Internacional de Donantes “Hacia Un Nuevo Futuro Para Haití” en mayo de 2010, EE.UU. prometió 1.150 millones de dólares para la reconstrucción de Haití en 2010-2011, lo que representó el 22% de los 5.270 millones comprometidos por casi cuarenta países y organismos intergubernamentales. Esto se sumó a 1.100 millones aportados para los

esfuerzos de socorro y recuperación, que incluyeron 623 millones de dólares de USAID y 459 millones de dólares del DOD (The White House Office of the Press Secretary, 2010).

Desde el terremoto, la asistencia estadounidense a Haití fue desembolsada principalmente a través de USAID (Johnston y Main, 2013). Con fines de ayuda humanitaria, el aporte de USAID fue de \$406.427.525, representando el 29,6% de los fondos totales estadounidenses en esta área. Según USAID, el financiamiento “apoyó refugios y asentamientos, salud, coordinación humanitaria y gestión de la información, suministros logísticos y de socorro, recuperación económica y sistemas de mercado, protección, riesgos naturales y tecnológicos, y actividades de agua, saneamiento y salud (WASH, por sus siglas en inglés)” (USAID, 2011, p. 01). Sin embargo, aunque se sabe que el 14% del presupuesto total de USAID destinado a Haití durante el período fiscal 2010-2012 fue asignado a asistencia humanitaria, como indica un estudio del Center for Economic and Policy Research (CEPR), la información proporcionada por la agencia es insuficiente para rastrear con precisión cómo y dónde se gastaron los fondos a nivel de proyecto (Johnston y Main, 2013). Esto limita la posibilidad de obtener una visión clara sobre el uso de los recursos, especialmente al clasificarlos sectorialmente, como se muestra en la Figura 2. Por esta razón, se ofrecerá una visión más general del financiamiento y los proyectos, que abarcan también tareas de reconstrucción y desarrollo.

**Figura 2: Distribución sectorial del gasto de USAID en Haití, 2010-2012**

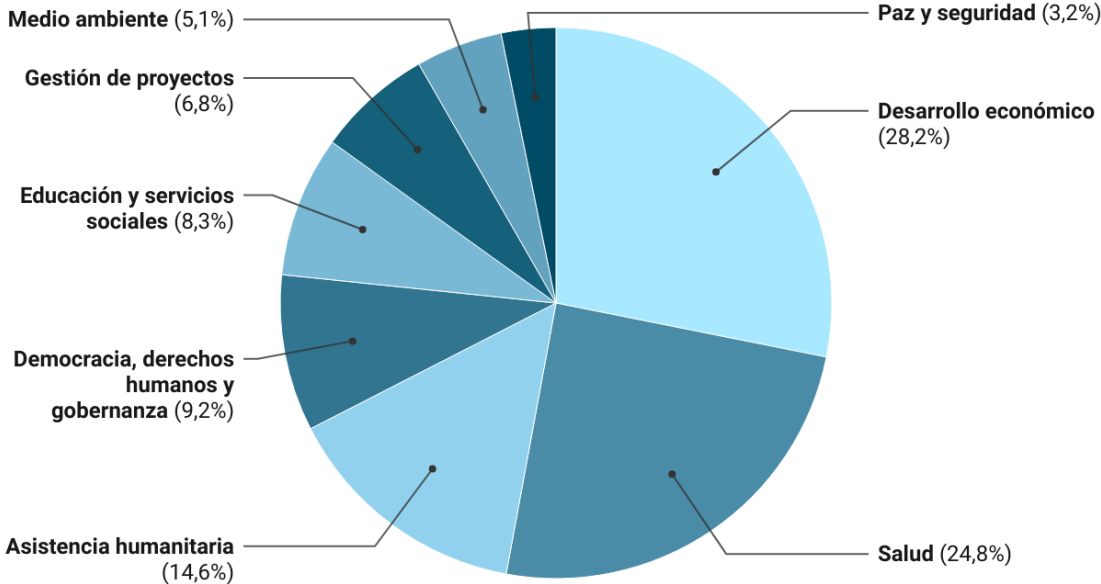


Gráfico: Elaboración propia • Fuente: U.S. Foreign Assistance Dashboard via Johnston y Main (2013) • Creado con Datawrapper

Casi toda la financiación de USAID para la ayuda a Haití se canalizó a contratistas y beneficiarios privados estadounidenses, principalmente del área de Washington, D.C., Maryland y Virginia (área metropolitana de Washington, D.C), mientras que el Estado haitiano recibió el 0,7% de los fondos (Figura 3).

### Figura 3: Principales beneficiarios de los fondos humanitarios de USAID para Haití por ubicación

Desglose porcentual por ubicación de los principales beneficiarios de los fondos de USAID concedidos para la ayuda y el desarrollo tras el terremoto de Haití de 2010

■ Área metropolitana de Washington D.C. (56,3%) ■ Todo el resto (43,0%) ■ Haití (0,7%)

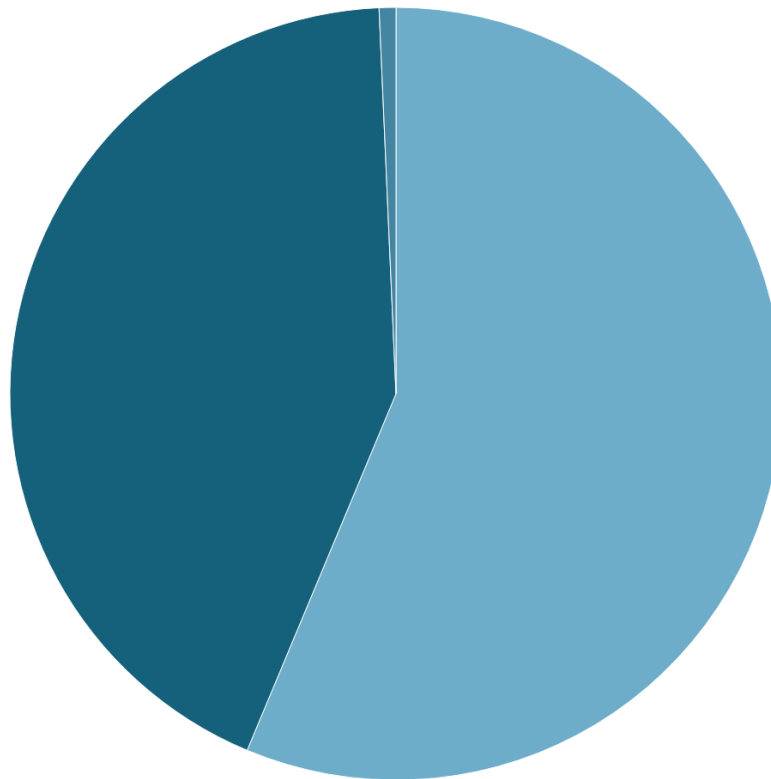


Gráfico: Elaboración propia • Fuente: USASpending.gov y FPDS vía Johnston y Main (2013) • Creado con Datawrapper

El principal receptor fue Chemonics International Inc. (Chemonics), una empresa de desarrollo internacional con ánimo de lucro con sede en Washington, D.C. (Figura 4). Según un análisis de Johnston y Main (2013) de los registros disponibles públicamente en el Sistema de Base de Datos de Adquisiciones Federales y de USASpending.gov, USAID concedió 1.154,3 millones de dólares en contratos y subvenciones desde el terremoto de 2010 a abril de 2013.

## Figura 4: Principales beneficiarios de los fondos humanitarios de USAID para Haití

Principales beneficiarios de los fondos de USAID concedidos para la ayuda y el desarrollo tras el terremoto de Haití de 2010 (en millones de dólares)

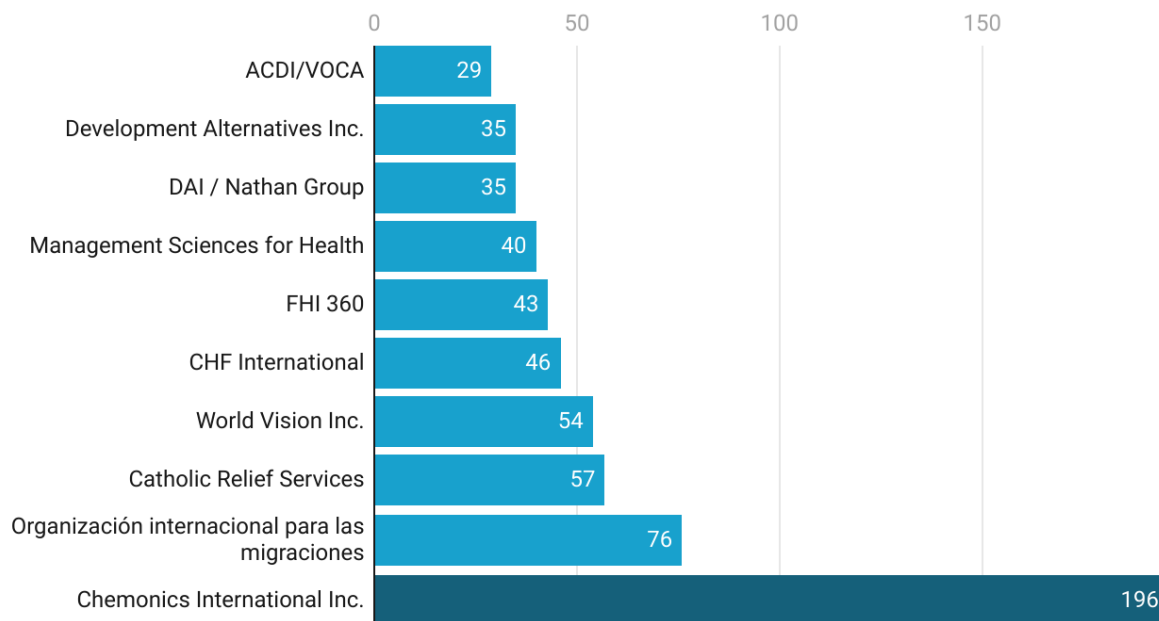


Gráfico: Elaboración propia • Fuente: USASpending.gov y FPDS vía Johnston y Main (2013) • Creado con Datawrapper

En el ámbito de la financiación y gestión, USAID implementó, tanto de manera directa como indirecta a través de contratistas, diversos proyectos. Entre los programas destacados se encuentran el New Settlements Program, que preveía la construcción de 15.000 viviendas permanentes en Puerto Príncipe y el Departamento Norte con un presupuesto inicial de 59 mil millones de dólares (GAO, 2013), Cash-for-Work, diseñado para proporcionar ingresos a hogares vulnerables mientras se abordaban necesidades comunitarias prioritarias (OIG, 2010), y la Haiti Recovery Initiative, que contó con la contratación de Chemonics International Inc. (Chemonics), una empresa de desarrollo internacional con ánimo de lucro con sede en D.C., para parte de su ejecución. Esta iniciativa tenía como objetivos principales la estabilización de Haití mediante la revitalización de comunidades, el fomento de la participación ciudadana y la mejora de la gobernanza (OIG, 2012). Sin embargo, el proyecto más emblemático de USAID fue el Parque Industrial de Caracol (PIC) y proyectos complementarios para su desarrollo, para los cuales se destinó más de una cuarta parte de la financiación de la agencia tras el terremoto (ActionAid USA, s.f.).

Como parte del Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo Nacional, presentado en la conferencia de donantes de la ONU de marzo de 2010, el gobierno haitiano articulaba una visión de la reconstrucción haciendo hincapié en la vivienda y en proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero también incluía la creación de centros de desarrollo económico fuera de Puerto Príncipe para estimular el crecimiento económico y llevar empleo a las regiones desatendidas. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión Interina para la Recuperación de Haití, organismo internacional encargado de garantizar la rendición de

cuentas en la reconstrucción posterior al terremoto y copresidido por Bill Clinton, aprobó la construcción del PIC, una planta de manufactura ligera de uso mixto que representó la mayor inversión extranjera desde el terremoto. El Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) contrató a Sae-A Trading Co. Ltd. (Sae-A), un importante fabricante textil coreano, como inquilino principal, quien se comprometió a aportar 78 millones de dólares al proyecto y predijo 20.000 nuevos puestos de trabajo, obteniendo a cambio instalaciones gratuitas y exenciones fiscales. El BID ofreció 100 millones de dólares para la construcción y EE.UU. a través de USAID prometió 124 millones para una central eléctrica, un nuevo puerto y un proyecto de viviendas. (U.S. Department of State, 2015; Jean-Mary Chérestal, 2015).

De acuerdo con el DOS, la construcción de la central eléctrica se trataba de una central de 10 megavatios con el fin de suministrar electricidad fiable al PIC, además de la posibilidad de ampliar el suministro eléctrico a otras comunidades más allá del PIC. USAID financiaría el funcionamiento y mantenimiento de la central durante tres años (U.S. Department of State, 2015).

En relación con el puerto, USAID consideraba que la construcción de un nuevo puerto en Fort Liberté era clave para garantizar el éxito del cercano PIC. Esto se debía a que las cinco empresas del PIC dependían mayoritariamente de los puertos de la vecina República Dominicana para sus envíos, lo que implicaba una pérdida significativa de ingresos en divisas para el tesoro haitiano. Aunque el proyecto fue finalmente descartado, en su momento se estimó que la construcción del puerto tendría un costo de entre 185 y 257 millones de dólares, de los cuales el gobierno estadounidense había comprometido una inversión de 70 millones (Johnston, 2014).

En el marco del New Settlements Program, se proyectó la construcción de 750 de las viviendas en el asentamiento Caracol-EKAM, situado en el corredor norte de Haití, cerca del PIC y la central eléctrica, para ayudar a integrar a la comunidad local en el desarrollo del PIC (USAID, 2015).

En cuanto al DOD, el Teniente General P. K. Keen, comandante adjunto del SOUTHCOM, se encontraba en Haití en una visita previamente programada y estaba presente en la residencia del embajador estadounidense cuando ocurrió el terremoto. Ante esta situación, y dado que la MINUSTAH ya desempeñaba funciones de seguridad y estabilidad, las autoridades estadounidenses y de la ONU consideraron más efectivo establecer una fuerza estadounidense independiente en lugar de una fuerza conjunta internacional, con el fin de evitar confusiones de roles y preservar la credibilidad de la MINUSTAH. En este marco, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos (JTF-Haití), que en veinticuatro horas ya había desplegado un Equipo de Asistencia y Respuesta ante Desastres (DART) y, hacia el 1 de febrero de 2010, estaba conformado por más de 22.000 efectivos, 58 aviones y 23 buques. Su labor se enmarcó en la denominada Operación Respuesta Unificada, que en los casi cinco meses de su duración, coordinó estrechamente con la MINUSTAH para la ejecución de labores de ayuda humanitaria y socorro en desastres (Keen et al., 2011; Cecchine et al., 2013).

En las primeras horas posteriores al terremoto, el General Keen dirigió la movilización de fuerzas militares estadounidenses y supervisó la coordinación de los esfuerzos de asistencia

con diversos países y organizaciones internacionales que ya estaban presentes en Haití o en camino hacia el país. Este operativo se consolidó como la mayor respuesta humanitaria internacional liderada por EE.UU. ante un desastre natural, destacándose por la magnitud de su alcance y el nivel de cooperación interinstitucional e internacional (Keen et al., 2011; Cecchine et al., 2013).

La Operación Respuesta Unificada se estructuró originalmente en cinco fases para abordar las operaciones de ayuda humanitaria y socorro en Haití de las fuerzas militares estadounidenses. La Fase I (respuesta inicial) se centró en la evacuación, el rescate de víctimas y la provisión de suministros básicos. En la Fase II (socorro), las operaciones se enfocaron en la distribución de ayuda humanitaria y el apoyo a los desplazados internos. La Fase III (restablecimiento) priorizó la rehabilitación de infraestructuras esenciales y la transferencia gradual de responsabilidades al gobierno haitiano y organismos internacionales. La Fase IV (estabilización), que buscaba reforzar la provisión de servicios básicos en ausencia de un gobierno plenamente operativo, fue cancelada debido al comportamiento ordenado de la población y a la eficacia de la MINUSTAH en el mantenimiento de la paz. Finalmente, la Fase V (recuperación) promovió la restauración de la gobernanza civil y la retirada progresiva de las fuerzas estadounidenses, culminando el 1 de junio de 2010 con la transferencia total de funciones al gobierno de Haití (Cecchine et al., 2013).

## **2.2. Naciones Unidas**

Diversos organismos intergubernamentales participaron en la respuesta humanitaria al terremoto de Haití, incluyendo la ONU, la OEA, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comisión Europea, el BID, el Banco de Desarrollo del Caribe (Caribank), el BM y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), los cuales contribuyeron principalmente mediante donaciones (ver OAS, 2010, Infobae, 2010; ECHO, 2015, IDB, 2010; Caribank, 2012; World Bank Group, 2019; ALBA-TCP, s.f.). Entre ellos, la ONU destacó como uno de los principales coordinadores de la respuesta humanitaria.

Haití es miembro fundador de la ONU desde 1945, y desde 1947 la organización ha participado en el país a través de diferentes agencias, misiones políticas y de paz, fondos y programas (Nations Unies en Haïti, 2025).

El 1 de junio de 2004 mediante la resolución S/RES/1542, el Consejo de Seguridad de la ONU (2004) estableció la MINUSTAH, para hacer frente a las amenazas que presentaba Haití para la paz y la seguridad internacional y regional (Margesson y Taft-Morales, 2010). La MINUSTAH se destaca como un organismo especializado en Haití, que buscaba, como operación de mantenimiento de la paz, centrarse en tres áreas clave: entorno seguro y estable, proceso político, y derechos humanos (Consejo de Seguridad de la ONU, 2004).

El trabajo de la MINUSTAH previo al terremoto de 2010 despertó opiniones negativas, donde ya desde su primer año de operaciones, la MINUSTAH fue percibida con desconfianza y criticada por los haitianos, quienes la calificaban como una intervención extranjera, sin entender su mandato ni su misión en el país, y donde muchos de sus miembros no hablaban

francés ni criollo haitiano (Couceiro Arroyo, 2005). A la vez, presentó resultados mixtos. Por ejemplo, la lucha de la MINUSTAH en conjunto con la Policía Nacional Haitiana contra las bandas criminales ayudó a normalizar la vida diaria y a reducir riesgos físicos de los haitianos, pero tuvo un alto costo en vidas civiles (Prieto Olivares, 2017).

Durante el terremoto, 102 funcionarios de la ONU perdieron la vida cuando el edificio de la MINUSTAH colapsó (UN, 2011), de los cuales 96 eran soldados de la MINUSTAH, incluido su jefe, Hedi Annabi, y su adjunto, Luiz Carlos da Costa (Margesson y Taft-Morales, 2010). De todas formas, la organización logró coordinar una respuesta humanitaria de gran escala (UN, 2011).

Dentro de las veinticuatro horas posteriores al terremoto, la ONU estableció un equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), que coordinó el Centro de Operaciones y Coordinación sobre el Terreno (OSOCC). Se crearon dos sub-OSOCC en Jacmel y Leogane para ayudar a las autoridades locales y otros actores humanitarios. UNDAC, en cooperación con expertos técnicos del equipo de Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), llevó a cabo la evaluación inicial de daños e impactos en las zonas afectadas por el terremoto. El equipo permaneció en el país hasta el 27 de enero, donde se desempeñó coordinando los equipos de búsqueda y rescate y apoyando la coordinación humanitaria y las evaluaciones iniciales (IASC, 2010).

El 19 de enero de 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU (2010), siguiendo la recomendación del Secretario General, incrementó los niveles de efectivos de la MINUSTAH para apoyar las tareas inmediatas de recuperación, reconstrucción y estabilidad. La misión pasó a contar con un componente militar de hasta 8.940 efectivos y un componente policial de hasta 3.711 integrantes. Asimismo, Edmond Mulet, entonces Subsecretario General de la Oficina de Operaciones del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, fue designado Representante Especial en funciones del Secretario General y jefe de la MINUSTAH, asumiendo la coordinación de las actividades de socorro. La misión llevó a cabo operaciones de búsqueda y rescate, brindó seguridad y ofreció asistencia (Margesson y Taft-Morales, 2010).

El 22 de enero de 2010, EE.UU. y la MINUSTAH firmaron un acuerdo que delineó sus responsabilidades en la coordinación de los esfuerzos internacionales de socorro con el gobierno de Haití. La MINUSTAH mantuvo un rol clave en garantizar un entorno seguro para la recuperación y en la formación de una fuerza policial sostenible (Margesson y Taft-Morales, 2010).

También la ONU fortaleció el equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que ya tenía presencia en Haití y vio bajas durante el terremoto. Tuvo las funciones clave de apoyar el desarrollo de una arquitectura de coordinación adaptable, integradora y coherente, y de facilitar la planificación y los recursos conjuntos a través de sectores temáticos y liderar la financiación humanitaria (Bhattacharjee y Lossio, 2011).

Bajo la coordinación y supervisión de la OCHA, diversas agencias de la ONU participaron en la respuesta humanitaria al terremoto de Haití, que trabajaron en doce sectores —o clústeres— temáticos para facilitar la acción conjunta de las diferentes agencias involucradas. Los sectores, junto con las respectivas agencias que trabajaron en su desarrollo, fueron: agricultura (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO); coordinación y gestión de campamentos (OIM); recuperación temprana (PNUD); educación (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF); refugio de emergencia y artículos no alimentarios (OIM); telecomunicaciones de emergencia (PMA); alimentos (PMA); salud (Organización Mundial de la Salud, OMS; y Organización Panamericana de la Salud, OPS); logística (PMA); nutrición (UNICEF); protección (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH), con protección de la infancia (UNICEF), y; violencia de género (Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA); agua, saneamiento e higiene (UNICEF). Simultáneamente, se crearon seis grupos de apoyo en República Dominicana que replicaban la estructura temática de los establecidos en Haití (Bhattacharjee y Lossio, 2011).

### **2.3. Organizaciones no gubernamentales internacionales**

Antes del terremoto de 2010, varias ONG internacionales ya estaban operando en Haití, principalmente en áreas relacionadas con la salud, la educación y el desarrollo comunitario. MSF comenzó a trabajar en Haití en 1991, con un enfoque especial en atención médica de emergencia. Save the Children comenzó su labor en el país en 1978 y Caritas Internationalis ha estado trabajando en Haití desde 1955, ofreciendo apoyo a las comunidades más vulnerables, incluyendo proyectos de desarrollo rural y servicios de salud. CARE también empezó su trabajo en Haití en 1954, implementando programas de desarrollo rural, salud y asistencia humanitaria.

Tanto la Cruz Roja Americana (Cruz Roja) como Oxfam son organizaciones internacionales con una larga trayectoria en Haití, enfocadas en la respuesta humanitaria y el desarrollo. Tras el terremoto de 2010, la Cruz Roja destinó millones a proyectos de vivienda e infraestructura, mientras que Oxfam centró sus esfuerzos en agua potable, saneamiento y apoyo comunitario.

La Cruz Roja comenzó a trabajar en Haití en 1915, y su presencia en el país se intensificó con el tiempo, enfocándose en la respuesta ante desastres naturales, la atención a la salud y la promoción de la paz. La respuesta de la organización al terremoto fue rápida, activando de inmediato su plan de emergencia. La FICR se movilizó para coordinar la ayuda internacional, y la Cruz Roja se unió a este esfuerzo para proporcionar asistencia a los millones de haitianos afectados. La organización recaudó casi 500 millones para ayudar a la población afectada, destinando gran parte de ellos a grandes proyectos de infraestructura y viviendas, como el proyecto Lavi Nan Miyò Katye Pam (LAMIKA), y, concretamente, su desarrollo en Campeche (American Red Cross, 2015b).

## Figura 5: Fondos totales gastados y comprometidos por la Cruz Roja Americana para Haití tras el terremoto de 2010

A fecha de enero de 2015, la Cruz Roja Americana recibió 488 millones de dólares en donaciones en respuesta al terremoto de Haití de 2010.

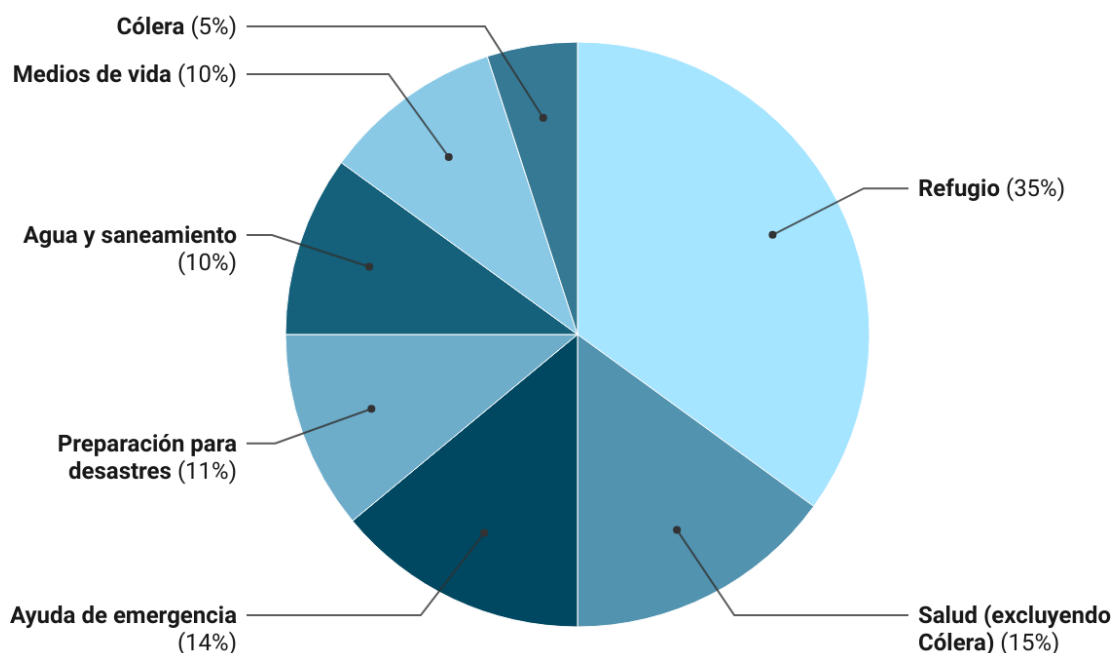


Gráfico: Elaboración propia. • Fuente: American Red Cross (2015b) • Creado con Datawrapper

Más de 170 millones de dólares se asignaron a proyectos relacionados con vivienda, incluyendo el programa LAMIKA, que prometía construir comunidades modelo en áreas afectadas. LAMIKA —que significa “un mejor lugar para vivir”— prometía la construcción de comunidades sostenibles en diversas zonas del territorio haitiano. El 1 de enero de 2011, se puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de LAMIKA en Campeche. Con un presupuesto de 24.281.522 dólares, el plan inicial de la Cruz Roja establecía como prioridad la construcción de viviendas, con un objetivo de 700 casas según una propuesta interna. Estas viviendas contarían con una sala de estar, un dormitorio, una cocina, un baño con ducha y un *deck* de madera exterior, además de pisos terminados, inodoros, duchas y sistemas de recolección de agua de lluvia. Se esperaba que las construcciones estuvieran finalizadas para enero de 2013 (American Red Cross, 2012). Ninguna de esas promesas se cumplió, lo que llevó a cuestionamientos sobre la efectividad de su respuesta (Sullivan, 2015).

Por su parte, Oxfam comenzó a operar en Haití en 1978, y, a lo largo de los años, sus intervenciones se han centrado en áreas como el desarrollo agrícola, la provisión de agua potable y el fortalecimiento de los derechos humanos. La organización ya tenía una fuerte presencia en el país antes del terremoto de 2010, especialmente trabajando en ayuda humanitaria y desarrollo económico. Después del terremoto de 2010, Oxfam amplió significativamente su presencia en Haití. La organización recaudó cerca de 98 millones de dólares para su programa de tres años de respuesta al terremoto, que incluyó fondos para la

respuesta inmediata, la rehabilitación y la reconstrucción. El objetivo principal de Oxfam era proporcionar ayuda de emergencia y contribuir a la reconstrucción del país mediante proyectos enfocados en agua potable, saneamiento, alimentos y vivienda para las comunidades afectadas. Entre los proyectos liderados por Oxfam, se encontraba la creación de sistemas de purificación de agua y la distribución de kits de higiene para prevenir brotes de enfermedades como el cólera. Además, impulsó programas de apoyo económico destinados a empoderar a las mujeres y fortalecer a las comunidades rurales (Oxfam International, 2011). Sin embargo, detrás de estos esfuerzos, comenzaron a surgir informes preocupantes sobre la conducta de miembros del personal de Oxfam en el terreno, que terminaron empañando la reputación y generando una crisis ética dentro de la organización (BBC Mundo, 2018).

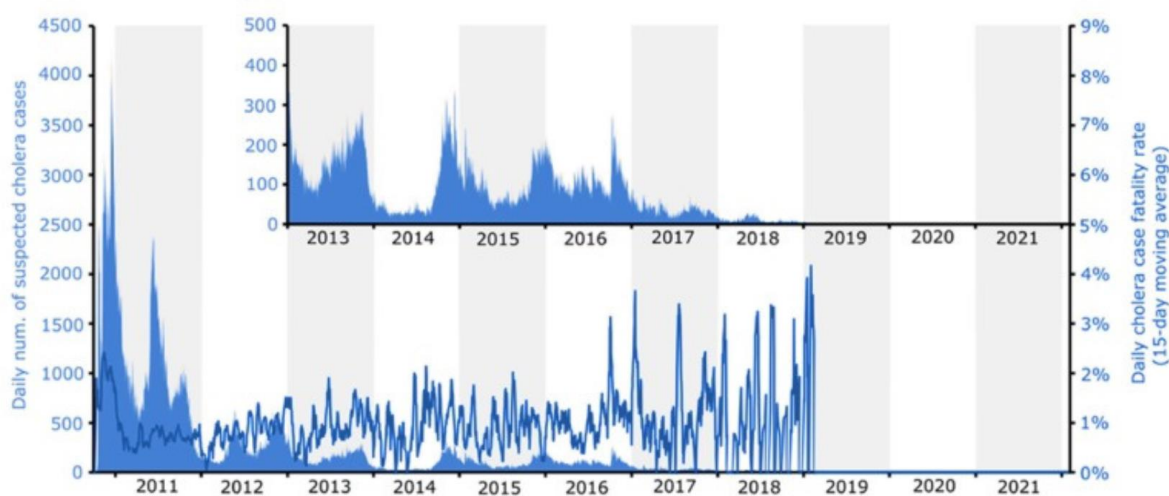
### 3. Problemas en la respuesta humanitaria internacional

A pesar de la magnitud de la respuesta internacional, la ayuda humanitaria en Haití estuvo marcada por múltiples disfuncionalidades que socavaron su efectividad y generaron controversias. Como resultado, y en línea con su evaluación de la situación actual del país, Cotrino (comunicación personal, 19 de diciembre de 2024) sostiene que “esa ayuda humanitaria no ha generado un cambio” y “no cumplió con su finalidad”. En este capítulo, se identificarán y analizarán en detalle las principales deficiencias observadas en la respuesta humanitaria internacional al terremoto de 2010. Se abordan cuestiones críticas como la epidemia de cólera, abusos de poder, incumplimiento de objetivos, problemas de planificación, disparidad entre la necesidad y la ayuda, y descoordinación entre actores humanitarios, con el objetivo de comprender mejor los desafíos y limitaciones de la ayuda humanitaria, y luego poder evaluar su vínculo con la rendición de cuentas.

#### 3.1. Epidemia de cólera

El cólera se registró por primera vez en Haití en octubre de 2010, conduciendo al peor brote de esta enfermedad globalmente en los últimos 25 años en términos de mortalidad y la segunda mayor (después de la epidemia de Yemen) en términos de morbilidad (WHO, 2017). El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití registró más de 820.000 casos y casi 10.000 muertes entre 2010 y 2019 (Piarroux et al., 2022), aunque debido al subregistro durante el brote inicial, un estudio de MSF sugiere que las cifras de mortalidad podrían ser mucho más elevadas que las contabilizadas oficialmente (Luquero et al., 2016). Luego de un hiato de tres años, nuevos casos aparecieron en octubre de 2022 (WHO, 2022).

**Figura 6: Número diario de casos sospechosos de cólera y tasa de mortalidad en Haití, 10/2010 - 02/2022**



Fuente: Elaborado por Piarroux et al. (2022) con datos del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití - Creado con Datawrapper

Las secuelas físicas de la enfermedad, junto con el trauma psicológico, continúan afectando a los sobrevivientes. En muchos casos, los niños han perdido a sus padres y principales proveedores, generando inestabilidad social y educativa al verse obligados a

abandonar la escuela. Además, numerosas familias enfrentan cargas económicas significativas debido a las deudas contraídas para cubrir costos médicos y funerarios, lo que ha agravado su situación de pobreza (IHRC et al., 2020).

El origen del brote de cólera en Haití fue objeto de prolongado debate, pero se terminó atribuyendo a una base de mantenimiento de la paz de la ONU operada por personal nepalés, cuya inadecuada gestión de aguas residuales contaminó un afluente del río Artibonite, una fuente de agua potable para la población local (Hendriksen et al., 2011; Eppinger et al., 2014).

En respuesta a las acusaciones iniciales sobre su posible responsabilidad en el brote, los funcionarios de la MINUSTAH emitieron un comunicado de prensa negando que la base nepalesa pudiera haber causado la epidemia, argumentando que cumplía con estrictas normas de saneamiento (MINUSTAH, 2010). Sin embargo, el 27 de octubre de 2010, el corresponsal de Associated Press, Jonathan Katz, visitó la base y encontró serias discrepancias entre las declaraciones oficiales y las condiciones reales en el lugar. Durante su visita, Katz observó a la policía militar de la ONU tomando muestras de agua subterránea para analizarlas en busca de cólera, lo que contrastaba con la postura oficial de que no había preocupación alguna por un vínculo entre las fuerzas de paz y la enfermedad. Además, residentes locales afirmaron que los residuos de la base solían ser vertidos al río Artibonite (Katz, 2010). Ese mismo día, un equipo de Al Jazeera, encabezado por el periodista Sebastian Walker, filmó a soldados intentando reparar una tubería con fugas. Pese a las crecientes evidencias, portavoces de la MINUSTAH aseguraron que las pruebas realizadas en la base habían dado negativo para cólera (Al Jazeera, 2010). Sin embargo, una investigación posterior de Associated Press reveló que las pruebas habían sido realizadas de manera inadecuada en un laboratorio dominicano sin experiencia previa en la detección de esta enfermedad (Katz, 2010).

En noviembre de 2010, el gobierno haitiano contrató a un equipo de epidemiólogos haitianos e internacionales para investigar el origen del cólera, que concluyó que probablemente fue introducido por el contingente nepalí de mantenimiento de la paz (Piarroux et al., 2011). Mientras tanto, durante los tres meses posteriores al inicio del brote, funcionarios de la ONU, los CDC y otras organizaciones se opusieron a investigar el origen (Katz, 2010; Al Jazeera, 2010).

Bajo creciente presión, la ONU anunció en diciembre de 2010 la creación de un panel independiente para estudiar la fuente del brote (UN Radio, 2010). El informe del panel, publicado en mayo de 2011, concluyó que existían pruebas contundentes de que las tropas nepalesas habían introducido la enfermedad en Haití. Sin embargo, el informe atribuyó el brote a una “confluencia de circunstancias” y evitó señalar directamente culpables (Cravioto et al., 2011, p. 04).

En noviembre de 2010, la ONU realizó una evaluación interna sobre las prácticas de saneamiento de la MINUSTAH, cuyos resultados no se hicieron públicos hasta 2016 (Pilkington y Sandler Clarke, 2016). La revisión concluyó que, incluso un mes después del inicio del brote de cólera, persistían condiciones de saneamiento inadecuadas en múltiples bases. Más del 10% vertían aguas residuales de inodoros directamente al medio ambiente, mientras que el 70% lo hacía con los residuos de cocinas y duchas. Además, a pesar de contar

con cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en Haití, la MINUSTAH no las utilizó para mejorar las condiciones, citando “prioridades contrapuestas” (IHRC et al., 2020, p. 10). Una auditoría de 2015 realizada por la Oficina de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) reveló que estos problemas de saneamiento seguían sin resolverse cinco años después (OIOS, 2015).

El 3 de noviembre de 2011, 5.000 víctimas del cólera representadas por el BAI y el IJDH intentaron obtener reparaciones a través del proceso interno de reclamaciones de la ONU en conformidad con la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU (la Convención), que establece vías legales para que las víctimas de los daños causados por la organización busquen soluciones y la obligación recíproca de resolver extrajudicialmente las reclamaciones de derecho privado (IHRC et al., 2020). La petición exigía a la ONU la instalación de un sistema nacional de agua y saneamiento para controlar la epidemia, el pago de indemnizaciones a las víctimas por sus pérdidas y una disculpa pública por sus “actos ilícitos” (IJDH, 2011).

Sin embargo, la Convención se ve limitada por la amplia inmunidad de la ONU, ya que en el mismo instrumento la ONU se otorga a sí misma protección jurídica en los países en los que opera, y en la sección 29 extiende esa inmunidad a cualquier trabajador de la ONU que actúe en calidad oficial (Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU, 1946). Por tanto, tras 15 meses de silencio luego de presentada la demanda, la ONU rechazó las reclamaciones por “no ser admisibles”, con la única justificación de que las reclamaciones de las víctimas “incluirían necesariamente un examen de cuestiones políticas y normativas” (O’Brien, 2013a, p. 02). La ONU también rechazó la posterior solicitud de las víctimas de una reunión, mediación y el establecimiento de la comisión permanente de reclamaciones —exigida por el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA)—, adoptando la postura de que no hay obligación de hacerlo para las reclamaciones que no son admisibles (O’Brien, 2013b).

Tras el rechazo de las reclamaciones iniciales, abogados presentaron demandas en tribunales federales de EE.UU., cuestionando la inmunidad de la ONU debido a su incumplimiento en gestionar las reclamaciones y crear una comisión para resolverlas. La ONU invocó su inmunidad y prevaleció en todos los casos. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo de EE.UU. se negó a revisar la desestimación de una apelación, cerrando el último proceso pendiente (IHRC et al., 2020).

Además de los esfuerzos legales, el BAI y el IJDH lideraron una coalición global para exigir remedios extrajudiciales. En Haití, comunidades afectadas y organizaciones de base comunitaria se movilizaron mediante protestas pacíficas, actividades en medios de comunicación y organización comunitaria para defender sus derechos y exigir remedios extrajudiciales (ver Joseph, s.f.; scjoshRussell, 2015; Young, 2015; Bartels et al., 2022). Ante las manifestaciones, Edmond Mulet, jefe de la MINUSTAH, respondió que “es realmente injusto acusar a la ONU de traer el cólera a Haití” (Desvarieux, 2010, párr. 02) y criticó a los manifestantes, acusándolos de “perder el tiempo y costar vidas” con sus protestas (BBC News, 2010a, párr. 05). Internacionalmente, medios de comunicación, grupos haitiano-estadounidenses, miembros del Congreso de EE.UU., ONG, juristas y organizaciones de derechos humanos presionaron reiteradamente a la ONU para que cumpliera con sus

obligaciones, respetara los derechos de las víctimas y asumiera su responsabilidad conforme a sus propios principios y normativas (ver Farha et al., 2014; Amnesty International, 2015; Haitian-American Community, 2015; Congress of the United States, 2016; *UN Accountability Pledge*, 2016).

A pesar de las evidencias y demandas, incluidas aquellas provenientes de investigaciones internas que señalaban a la ONU como responsable de introducir el cólera en Haití y de mantener deficientes prácticas de saneamiento, la organización negó de manera reiterada su responsabilidad. Altos funcionarios tanto en Haití como en Nueva York rechazaron sistemáticamente cualquier implicación de la ONU en el brote, restando importancia a la investigación sobre los orígenes de la epidemia. En este contexto, el portavoz de la ONU en Haití desestimó las consultas de los medios al afirmar que “desde nuestro punto de vista, [el origen] realmente no importa” (McNeil, 2010, párr. 06), mientras que otro funcionario rechazó activamente los intentos de identificar la fuente del brote:

Son sólo rumores.... No hay ningún agente, entidad, persona o estructura responsable de llevar el cólera a Haití.... No hay nada más que decir al respecto, y cualquier intento de estigmatizar, señalar con el dedo o identificar es erróneo y ciertamente prematuro (Thieren, 2010, s.d.).

En agosto de 2016, la ONU dio un reconocimiento tácito de su responsabilidad, luego de que se filtrara un informe confidencial enviado al entonces Secretario General, Ban Ki-moon, por el relator especial de la ONU, Philip Alston. En este documento, se afirmaba que el brote “no habría ocurrido de no ser por la actuación de la ONU” (UN General Assembly, 2016, p. 09). En respuesta, Ban Ki-moon reconoció públicamente el “involucramiento inicial [de la ONU] en el brote” y anunció un “nuevo conjunto significativo de acciones” para abordar la crisis (Katz, 2016; párr. 02; párr. 01). Grupos de defensa como el IJDH calificaron este cambio como un avance significativo hacia la justicia, subrayando que aún quedaba un largo camino por recorrer para reparar los daños sufridos por las víctimas (Pilkington, 2016). Sin embargo, este reconocimiento no incluyó una admisión explícita de responsabilidad (Katz, 2016).

En diciembre de 2016, Ban se disculpó formalmente por el rol de la ONU en la epidemia de cólera en Haití. Presentó un informe en una reunión especial de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en el cual admitió que la enfermedad fue introducida en Haití por las fuerzas de paz de la ONU nepalesas. Se dirigió directamente al pueblo haitiano en tres idiomas: criollo, francés e inglés (UN News, 2016). En inglés, dijo:

En nombre de las Naciones Unidas, quiero decir muy claramente: pedimos disculpas al pueblo haitiano. Sencillamente no hicimos lo suficiente con respecto al brote de cólera y su propagación en Haití. Lamentamos profundamente nuestro papel. Esto ha ensombrecido la relación entre las Naciones Unidas y el pueblo de Haití. Es una mancha en la reputación del mantenimiento de la paz de la ONU y de la Organización en todo el mundo. Por el bien del pueblo haitiano, pero también por el bien de las propias Naciones Unidas, tenemos la responsabilidad moral de actuar. Y tenemos la responsabilidad colectiva de cumplir (ONU, 2016).

A pesar de estos reconocimientos de responsabilidad moral de la ONU por la introducción del cólera en Haití, no tomó responsabilidad legal, ya que no hubo cambios en la

inmunidad jurídica de la organización y tampoco respondió a las demandas legales presentadas por las víctimas que reclamaban indemnizaciones por los daños causados (IHRC et al., 2020).

Junto con la disculpa de diciembre de 2016, la ONU estableció medidas inmediatas para detener el brote y el apoyo a largo plazo para los afectados a través de un proyecto de 400 millones de dólares denominado Un Nuevo Enfoque para el Cólera en Haití (Nuevo Enfoque), establecido a través del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas para la Respuesta al Cólera en Haití (MPTF) en 2016 con el fin de afrontar la enfermedad en el país (ONU, 2016). Como indica un estudio de International Human Rights Clinic Harvard Law School (IHRC), Bureau des Avocats Internationaux (BAI), y el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH) (2020, p. 03), “la elaboración y aplicación del Nuevo Enfoque por parte de la ONU indican que la organización ha tomado la decisión unilateral de excluir la compensación en favor de los proyectos comunitarios”. Hasta la fecha, la asistencia material proporcionada por la ONU se ha limitado a cinco proyectos de infraestructura en la región de Mirebalais, con un valor total de 150.000 dólares, junto con otros 20 proyectos programados para iniciarse en cuatro municipios cercanos a Cap-Haïtien, en el norte de Haití.

Sin embargo, la ONU no ha cumplido con su obligación de establecer una comisión de reclamaciones permanente, tal como lo estipula el SOFA firmado con Haití, y las víctimas continúan siendo privadas de su derecho a un recurso efectivo, oportuno y adecuado, un principio fundamental del derecho internacional. Según un estudio de IHRC et al. (2020), esta situación refleja varias violaciones, incluyendo la falta de financiamiento para garantizar una reparación efectiva, la negación de indemnización, la exclusión de las víctimas en el proceso y la ausencia de reformas institucionales para prevenir futuras violaciones, ya que el sistema que impidió el acceso a reparaciones en Haití sigue vigente en todas las operaciones de la ONU. Como concluye el estudio de IHRC et al. (2020),

El fracaso continuo de la ONU a la hora de proporcionar soluciones efectivas a las víctimas del cólera ha prolongado el sufrimiento en Haití y envía un mensaje perjudicial a los Estados en el sentido de que remediar las violaciones de los derechos humanos es opcional. La eficacia de la ONU en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo depende de su capacidad para ejercer la autoridad moral necesaria para persuadir a los actores de que respeten, protejan y cumplan los derechos humanos. La erosión de esa autoridad moral socava el sistema de derechos humanos de la ONU y merece la atención urgente de los procedimientos especiales (IHRC et al., 2020, p. 04).

Además, la organización no cumplió con principios fundamentales del derecho sanitario internacional. A pesar de seguir las recomendaciones de la OMS en materia de prevención (Pilkington y Sandler Clarke, 2016), la ONU ignoró normas que han sido clave en la regulación de la transmisión internacional del cólera durante más de 160 años. Estas normas, presentes en los primeros tratados vinculantes de derecho sanitario y en el actual Reglamento Sanitario Internacional, han evolucionado hasta acercarse al estatus de derecho internacional consuetudinario. Un estudio publicado en *International Library of Ethics, Law, and the New Medicine* concluyó que la ONU incumplió estas obligaciones, lo que podría haber evitado la crisis sanitaria en Haití (Houston, 2020).

Asimismo, un estudio por investigadores de la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Derecho de Yale (Lewnard et al., 2016) analizó posibles intervenciones preventivas que podrían haber evitado la introducción del cólera en Haití. Según sus estimaciones, la epidemia podría haberse prevenido con una inversión de menos de 2.000 dólares en pruebas de detección básicas en las fuerzas de paz, combinadas con el uso de antibióticos y vacunación (Lewnard et al., 2016). Esto representa una cifra insignificante en comparación con los 2.200 millones de dólares que la ONU estimó necesarios en 2013 para erradicar la enfermedad durante la próxima década (Knox, 2013) o los 400 millones de dólares necesarios para implementar el Nuevo Enfoque (ONU, 2016).

Como consecuencia del episodio, el vínculo entre las comunidades afectadas en Haití y los actores internacionales fue perjudicado (Bartels et al., 2022; Payton, 2010; Ground Truth Solutions, 2022). El exfuncionario de la ONU afirmó que la epidemia de cólera marcó un punto de inflexión en la relación del pueblo haitiano con la organización, ya que la falta de asunción de responsabilidad erosionó su credibilidad (Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025).

### **3.2. Abusos de poder**

Los abusos de poder en Haití representan un problema de gran magnitud con profundas implicaciones éticas. Previo al terremoto, una encuesta aleatoria de hogares haitianos realizada por Kolbe y Hutson (2006) reveló que el 16,8% y el 14,4% de los encuestados señalaron haber sido amenazados con violencia física y sexual de fuerzas extranjeras, principalmente de tropas de paz de la ONU. Tras el terremoto de 2010, tanto la MINUSTAH como Oxfam estuvieron involucradas en casos de este tipo. Estas situaciones de abusos de poder abarcan violencia física, incluyendo amenazas, y violencia sexual y de género.

En cuanto a violencia física, el 17 de agosto de 2010, el cadáver de Jean Gérald Gilles, un joven de 16 años, fue hallado colgado dentro de la base de la MINUSTAH en Cabo Haitiano. Según los soldados nepaleses de la ONU, Gilles habría ingresado a la base y se habría ahorcado, aunque el informe oficial no explicó cómo logró entrar, atar una cuerda en el patio y ahorcarse sin ser detectado por el personal militar. Esta versión fue rechazada por la familia y amigos de Gilles, quienes afirmaron que el joven realizaba trabajos ocasionales para los soldados nepaleses a cambio de comida o dinero y que había sido acusado de robar 200 dólares a uno de ellos, lo que algunos consideran el motivo de un posible asesinato. El mismo día, empleados del cercano hotel Henri Christophe escucharon un grito de “me están asfixiando”. A pesar de estas circunstancias, la causa real de la muerte de Gilles sigue sin esclarecerse. La MINUSTAH entregó el cuerpo para la autopsia más de 72 horas después del deceso, lo que pudo haber afectado los resultados forenses. Otro incidente de violencia ocurrió días antes de la muerte de Gilles. La prensa local informó que un soldado nepalí detuvo y torturó a un menor en una plaza pública de Cabo Haitiano. Según los reportes, el soldado intentó separar la mandíbula inferior de la superior del joven forzando sus manos en su boca, lo que resultó en desgarros en la piel (Gomes, 2010).

La controversia y los abusos no se limitaron a las fuerzas nepalesas. El 24 de mayo de 2010, soldados brasileños ingresaron al campus de la Universidad Estatal de Haití, alegando

que una piedra había sido lanzada contra un vehículo de la MINUSTAH. Utilizando porras y gases lacrimógenos, confiscaron libros, cuadernos y computadoras portátiles de varios estudiantes y detuvieron al estudiante Mathieu Frantz Junior. Las granadas de gas lacrimógeno también afectaron a las víctimas del terremoto alojadas en campamentos improvisados cercanos a la universidad (Gomes, 2010).

La revelación de que las fuerzas de paz de la ONU fueron responsables de la introducción del cólera en Haití provocó una ola de protestas y disturbios dirigidos contra la MINUSTAH, en los que también se registraron actos de violencia por parte de los soldados. Según informes de la ONU, las manifestaciones dejaron al menos dos muertos y más de veinte heridos, incluidos tanto haitianos como miembros del personal de la misión. Durante un enfrentamiento en Quartier Morin, un manifestante murió a manos de un soldado de la ONU, quien, según la misión, actuó en defensa propia (UN News, 2010). Por su parte, el presidente del Senado de Haití, Kelly Bastien, informó a Radio Visión 2000 que un segundo manifestante había fallecido por disparos en Cabo Haitiano, aunque no se determinó el responsable (AP, 2010). En un estudio publicado en el *International Journal of Environmental Research and Public Health*, un residente de Cabo Haitiano relató cómo las fuerzas de paz dispararon contra dos jóvenes durante una revuelta contra la MINUSTAH (Bartels et al., 2022):

Un grupo de jóvenes de la zona dijo que la MINUSTAH debía irse. Estos chicos cavaron un agujero profundo en la intersección de las calles, y un tanque de la MINUSTAH cayó en él. Pero sin dudarlo, cuando el tanque se estrelló en el agujero, la MINUSTAH se arrodilló y disparó a dos jóvenes, uno de ellos llamado [ ], no murió, pero se rompió los pies, y el otro murió en el acto (Bartels et al., 2022, p. 08).

En términos de violencia sexual, el problema de explotación y abuso sexual por parte de los cascos azules de la ONU en Haití no puede ser reducido a un fenómeno puntual, además de que se han reportado casos de abuso que se remontan a 2004 (Consejo de Seguridad de la ONU, 2011). Un estudio que documentó abusos en Haití entre 2004 y 2006 indicó que las tropas de MINUSTAH estaban implicadas en coaccionar a menores para actividades sexuales por dinero (Csáky, 2008). Según un informe interno de la ONU obtenido por Associated Press, al menos 134 soldados de mantenimiento de la paz de Sri Lanka explotaron a nueve niños en una red de explotación sexual en Haití entre 2004 y 2007. A raíz del informe, 114 cascos azules fueron devueltos a su país de origen, pero ninguno de ellos fue condenado o acusado ante un tribunal de Sri Lanka (Dodds, 2017). Una investigación realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU destacó la naturaleza transaccional de estos abusos, donde los soldados intercambiaban alimentos, dinero o promesas de protección por actos sexuales. El Secretario General Adjunto para el Apoyo a la Consolidación de la Paz reconoció que tal explotación de poblaciones vulnerables era un problema generalizado dentro de la misión (Zúñiga, 2019).

En cuanto a situaciones de violencia sexual posteriores al terremoto, en 2011, un grupo de marinos uruguayos pertenecientes a la MINUSTAH cometió un abuso sexual contra un joven haitiano en la localidad costera de Port-Salut. El hecho se hizo público gracias a la filtración de un video grabado por los mismos soldados, en el que se veía a la víctima inmovilizada en el suelo mientras los militares se burlaban y lo sometían a vejaciones (Johnston, 2012). Como

explica el exfuncionario de la ONU (comunicación personal, 11 de febrero de 2025), la situación no fue una violación, pero sí un caso de abuso. Adicionalmente, en 2012, se descubrió que tres soldados pakistaníes estacionados en Gonaïves abusaron sexualmente de un adolescente haitiano de 14 años (UN News, 2012).

Asimismo, en los campamentos de desplazados internos tras el terremoto, la violencia de género se convirtió en una crisis extendida. Mujeres y niñas, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones en grupo, generalmente cometidas por hombres armados durante la noche. Komisyon Fanm Viktim pou Viktim (KOFAVIV), una organización local, documentó más de 640 casos de violación en el primer año después del desastre, mientras que MSF registró decenas de casos en solo un mes en sus clínicas de Puerto Príncipe. A pesar de la presencia de más de 8.000 militares y 3.000 policías de la ONU, la MINUSTAH no implementó medidas básicas de seguridad como patrullas nocturnas o iluminación adecuada en los campamentos, dejando a las comunidades expuestas (Klarreich, 2010).

Un estudio de Lee y Bartels (2019) reveló que las fuerzas de paz, principalmente provenientes de Uruguay y Brasil, fueron responsables de ofrecer pequeñas cantidades de dinero o comida a cambio de sexo. Para algunas personas en situación de pobreza extrema, incluso unos pocos dólares pueden representar un cambio significativo, lo que genera dinámicas de abuso que no siempre son reconocidas por quienes las perpetúan (S. Lee, comunicación personal, 14 de enero de 2025). Entre los casos más graves se encuentran testimonios de mujeres que fueron violadas y posteriormente abandonadas con hijos nacidos de estas agresiones, a menudo referidos como “*petit MINUSTAH*” (Lee y Bartels, 2019).

La reacción institucional ante las denuncias de abuso de poder por parte de las tropas de la MINUSTAH ha sido criticada por su ineficacia. La ONU enfrentó una presión significativa por su manejo inadecuado de las acusaciones. En respuesta a las críticas, estableció un fondo de confianza para las víctimas con el objetivo de proporcionarles apoyo económico, educativo y psicológico. Sin embargo, muchas víctimas han denunciado que estos esfuerzos son insuficientes y que persiste una cultura de impunidad entre los responsables, especialmente en lo que respecta a la compensación y el tratamiento de las víctimas (Hu et al., 2023).

En el caso puntual de los abusos cometidos por las tropas uruguayas, cuando el video se hizo viral, se desató un escándalo internacional que obligó a Uruguay a repatriar a los cinco soldados implicados. Sin embargo, en lugar de ser procesados por violación o abuso sexual, fueron juzgados por “coacción privada”, lo que redujo considerablemente la gravedad del crimen en términos legales. Además, la justicia uruguaya dictó penas menores para los responsables, sin que hubiera una condena acorde con la evidencia y la gravedad del delito (Johnston, 2012).

Por otro lado, según investigaciones de Human Rights Watch (2012), la víctima de los abusos cometidos por las tropas pakistaníes denunció el ataque, lo que llevó a una investigación dentro de la MINUSTAH. Sin embargo, la ONU no tomó medidas inmediatas ni proporcionó transparencia sobre el proceso judicial. Finalmente, los soldados pakistaníes fueron juzgados por un tribunal militar de Pakistán, que los condenó a solo un año de prisión (Al Jazeera, 2012).

A pesar de la creación en 2016 del Fondo Fiduciario en Apoyo a las Víctimas de la Explotación y los Abusos Sexuales, establecido por la ONU para la asistencia y el apoyo a las víctimas de explotación y abusos sexuales por parte del personal de la organización, que actualmente cuenta con más de 4.8 millones de dólares, el uso efectivo de estos recursos ha sido cuestionable. Según el informe anual de 2022, solo se han gastado \$249,738 en Haití desde su creación, lo que indica una mala gestión de los fondos destinados a ayudar a las víctimas. Además, el proceso para recibir compensaciones ha sido complicado y poco accesible. Las víctimas deben presentar una gran cantidad de documentación, incluyendo firmas y pruebas como facturas escolares, lo que dificulta aún más su acceso a la ayuda. Este enfoque burocrático ha sido descrito por las propias víctimas como un maltrato (“Nos tratan como prostitutas. Como si debiéramos ser pobres”) que refleja una falta de sensibilidad y comprensión por parte de las autoridades sobre la situación precaria en la que se encuentran (Hu et al., 2023).

En cuanto a las madres de los *petit MINUSTAH*, sus denuncias no llegan a una resolución efectiva. Incluso cuando se logra comprobar la paternidad, las madres siguen enfrentando dificultades, agravadas por la discriminación hacia sus hijos birraciales. Como resultado, muchas de estas mujeres caen en una pobreza aún mayor, perpetuando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad (S. Lee, comunicación personal, 14 de enero de 2025). De acuerdo con el exfuncionario de la ONU, hay una tendencia de la organización de aprovecharse de las dificultades procesales (Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025).

Jane Connors, la Defensora de los Derechos de las Víctimas en Nueva York, ha señalado que “la ONU no otorga compensaciones directas a las víctimas”, lo que significa que muchas mujeres quedan sin ningún tipo de reparación. El marco legal bajo la Convención hace que los cascos azules estén sujetos a las leyes de sus países de origen y, por lo tanto, no pueden ser investigados por las autoridades locales en Haití (Hu et al., 2023). Esto crea un vacío legal que impide que las víctimas busquen justicia efectiva.

La combinación de estos factores contribuyó a un entorno donde el abuso sexual podía ocurrir con impunidad. El gobierno haitiano ha reclamado compensaciones directas para las víctimas y ha exigido medidas concretas para garantizar que estas situaciones no se repitan (Elks, 2019). Sin embargo, Lee y Bartels (2019, p. 25) revelaron que las comunidades afectadas perciben “expectativas incumplidas” en cuanto al apoyo a las víctimas por parte de las autoridades haitianas.

A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha revisado las políticas internas relacionadas con la conducta de los cascos azules, implementando medidas más estrictas para prevenir futuros abusos, estas reformas han sido calificadas como tardías y reactivas por parte de activistas y observadores internacionales. La falta de acción efectiva ha llevado a cuestionar la voluntad real de la ONU para abordar estos problemas estructurales, especialmente teniendo en cuenta que muchos soldados responsables fueron repatriados sin enfrentar consecuencias legales significativas (Lee y Bartels, 2019; Hu et al., 2023; Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025).

Escándalos de explotación sexual también se extendieron a Oxfam. En 2018 se reveló que varios empleados, incluyendo al entonces director de operaciones en Haití, Roland van Hauwermeiren, participaron en fiestas en propiedades alquiladas por Oxfam y pagadas con fondos destinados a la ayuda humanitaria donde contrataron prostitutas, algunas de las cuales podrían haber sido menores de edad (Charity Commission, 2019). También hubo situaciones de intimidación al personal local y negligencia en la supervisión de las operaciones. Testimonios de ex-empleados revelan que el ambiente laboral estaba marcado por una cultura de tolerancia hacia comportamientos inapropiados: “Personas poderosas hacían lo que querían y se salían con la suya” (Grant, 2018, párr. 9). Esto se tradujo en un clima donde los abusos eran minimizados y no se tomaban medidas adecuadas para proteger a los beneficiarios vulnerables (Grant, 2018).

En 2011, tras denuncias de estos casos de explotación y abuso sexual cometidos por su personal, la organización adoptó una respuesta discreta, llevando a cabo una investigación interna en lugar de informar a las autoridades haitianas. Como resultado de esta indagación, tres hombres, incluido Van Hauwermeirne, fueron autorizados a renunciar, mientras que otros cuatro involucrados fueron despedidos por violaciones de conducta grave (Ratcliffe, 2019; Charity Commission, 2019).

Los casos no salieron a la luz hasta 2018, cuando The Times (2018) filtró la información junto con evidencias de las investigaciones internas (Figura 7), desencadenando una ola de indignación pública y cuestionamientos sobre la falta de rendición de cuentas tanto dentro de Oxfam como de todo el sector humanitario. En consecuencia, varias agencias gubernamentales y donantes, incluido el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), amenazaron con retirar su financiamiento de la ONG, exigiendo mayores niveles de transparencia y medidas correctivas inmediatas (OECD, 2020). Posteriormente, el gobierno de Haití decidió retirar el permiso de operación de Oxfam en el país, citando una “violación de la legislación haitiana y violación grave del principio de dignidad humana” (Charity Commission, 2019, p. 63).

## Figura 7: Fragmento del informe final de la investigación interna de Oxfam

Final reports on those investigated were submitted to the [REDACTED] who, with support from HR from the LAC region and Oxford, carried out disciplinary hearings. The outcome of this process to date is as follows:

- (1) [REDACTED] [A] has been dismissed for gross misconduct for failing in his duty to protect staff. He is currently considering whether to appeal against this decision.
  - (2) [REDACTED] [B] has been dismissed for gross misconduct for use of prostitutes in OGB property.
  - (3) [REDACTED] [C] has been dismissed for gross misconduct for bullying and intimidation of OGB staff and for the misuse of OGB computing equipment through the access and download of pornographic and illegal material. He appealed against this decision, however, this appeal was subsequently rejected after having been considered by the [REDACTED] and the [REDACTED].
  - (4) [REDACTED] [D] was charged with gross misconduct for the use of prostitutes in OGB property and for bullying and intimidation of OGB staff. He resigned under investigation and is currently outside of the country but has agreed to undergo a disciplinary hearing on 2 September.
  - (5) [REDACTED] [E] has been dismissed gross misconduct for bullying and intimidation of OGB staff.
  - (6) [REDACTED] [F] was charged with use of prostitutes in OGB property and for CV fraud. He resigned under investigation during his home leave but has agreed to undergo a disciplinary hearing at a later date which is to be agreed.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- (8) [REDACTED] [G] has been given a final written warning for a breach of trust and confidence through the unauthorised sharing of an investigation report.

In addition due to an incident that occurred during the investigation, [REDACTED] [H] has had his probationary period extended following substantiated allegations of threats of violence against contractors and behaviour that could bring OGB into disrepute.

Fuente: Oxfam International (2018) • Creado con Datawrapper

La Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales (Comisión de Caridad), llevó a cabo una investigación en 2019 sobre el manejo interno de las denuncias de conducta sexual inapropiada por parte del personal de Oxfam en Haití. El reporte, titulado “Statement of the Results of an Inquiry: Oxfam”, concluyó que la investigación institucional interna en 2011 no fue realmente un ejercicio de rendición de cuentas honesto, sino un intento de encubrimiento para proteger la reputación de la organización. Además, durante la investigación interna se filtró información que comprometía la seguridad y confidencialidad de un testigo. La Comisión de Caridad prueba que el testigo fue posteriormente intimidado, lo cual pone aún más en duda la eficiencia de la investigación interna (Ratcliffe, 2019).

A su vez, el reporte señaló que “el riesgo para, y el impacto en, las víctimas parecían en ocasiones quedar en segundo plano y no se les tomaba suficientemente en serio; las víctimas, los denunciantes y aquellos empleados que intentaron plantear preocupaciones fueron defraudados” (Charity Commission, 2019, p. 6). También destacó problemas adicionales en la gobernanza interna, como la insuficiencia de los mecanismos de salvaguardia y supervisión, lo que permitió que las denuncias fueran sistemáticamente desestimadas, contribuyendo a una

cultura de encubrimiento que protegía los intereses organizacionales en detrimento de la justicia para las víctimas (Ratcliffe, 2019). La Comisión de Caridad también destacó que “lo que salió mal en Haití no ocurrió de forma aislada. Nuestra investigación demuestra que, durante varios años, la cultura interna de Oxfam toleró comportamientos inadecuados y, en ocasiones, perdió de vista los valores que la organización defiende” (Stephenson, citado en Ratcliffe, 2019, párr. 6).

En respuesta a las críticas y a la necesidad de reformas internas, Oxfam implementó nuevas medidas para prevenir incidentes similares en el futuro. Entre estas medidas se incluyeron programas obligatorios de capacitación sobre códigos de conducta y la creación de un comité independiente de ética (Oxfam Internacional, s.f.; Charity Commission, 2019).

### **3.3. Incumplimiento de objetivos**

Varios de los programas implementados en la respuesta humanitaria al terremoto no lograron cumplir con las metas inicialmente previstas. Este hecho subraya la relevancia de establecer objetivos claros y medibles como un componente esencial para asegurar la efectividad de las operaciones humanitarias. Sin metas bien definidas, resulta complejo evaluar el impacto real de los programas, identificar áreas de mejora y garantizar una adecuada rendición de cuentas. A continuación, se presentarán algunos ejemplos específicos de la Cruz Roja, USAID y la ONU que ilustran el incumplimiento de objetivos.

De las 700 viviendas permanentes que la Cruz Roja planificó construir en Campeche, no construyó ninguna. Los residentes continuaron viviendo en chozas de metal oxidado, sin acceso a agua potable, electricidad ni servicios básicos. Cuando llueve, sus hogares se inundan, obligándolos a sacar el barro y el agua (Elliott y Sullivan, 2015). Esto fue revelado por una investigación conjunta de ProPublica y National Public Radio (NPR) sobre la actividad de la Cruz Roja en Haití tras el terremoto de 2010, que evidenció malversación de fondos, sobrecostos generales y sentimientos de rencor de los haitianos hacia la organización de ayuda. La publicación de este estudio en 2015 atrajo un escrutinio significativo de la organización, la cual respondió con un comunicado de prensa, expresando que se sentía “decepcionada, una vez más, por la falta de equilibrio, contexto y exactitud en el reportaje más reciente de ProPublica/NPR” (American Red Cross, 2015a, párr. 04).

La declaración fue acompañada de un artículo que “aborda directamente las numerosas inexactitudes de la cobertura de ProPublica/NPR” (American Red Cross, 2015a, párr. 05), detallando que la Cruz Roja “ha proporcionado a más de 132.000 personas una vivienda segura y duradera, a través de diversos métodos” (American Red Cross, 2015a, s.d.). Sostuvo que, en muchos casos, la forma más rápida y eficiente de garantizar refugio fue a través de subsidios de alquiler, reparaciones y mejoras en viviendas existentes, en lugar de construir nuevas unidades. También atribuyó la falta de construcción de nuevas viviendas a problemas con los títulos de propiedad de las tierras y escasez de terrenos disponibles, especialmente en las zonas más afectadas de Puerto Príncipe, donde muchas personas deseaban permanecer para conservar sus lazos comunitarios y laborales. Por tanto, la Cruz Roja defendió que cumplió con su compromiso de asegurar que decenas de miles de haitianos cuenten con un hogar tras el terremoto (American Red Cross, 2015a; Meltzer, 2015).

Sin embargo, no hay evidencia clara de estos proyectos y, cuando los investigadores de ProPublica y NPR solicitaron visitar las iniciativas en Haití para evaluar sus resultados, la Cruz Roja se negó. Ante la falta de información, en 2015 —dos años después de la fecha en que las viviendas en Campeche supuestamente debían estar terminadas— decidieron visitar la zona para comprobar el estado del proyecto. Allí no solo encontraron una ausencia total de las viviendas prometidas, sino también el descontento de la comunidad. Jean Flaubert, líder de un grupo comunitario creado por la propia Cruz Roja para proporcionar información y asesoramiento local, expresó su frustración, al igual que sus colegas, señalando la falta de avances en el barrio y los elevados salarios destinados a los cooperantes expatriados (Elliott y Sullivan, 2015).

Diferentes medios de prensa intentaron contactarse con la Cruz Roja luego de publicado el reportaje de ProPublica y NPR, pero la organización se negó a declarar o responder preguntas (ver Dawson, 2015; Elliott, 2015c). Por su parte, el Senador de Iowa Chuck Grassley y su oficina realizó una investigación de casi un año tras la cobertura por ProPublica y NPR, donde en la publicación de los resultados afirmó que los altos cargos de la Cruz Roja fueron evasivos con los investigadores del Congreso, donde no proporcionaron datos solicitados y hasta compartieron información falsa, y publicaron información incompleta sobre su programa para Haití (Chuck Grassley, 2016).

En cuanto a USAID, un informe publicado en diciembre de 2010 por la OIG (2010) de USAID sobre los programas Cash-for-Work reveló que los contratistas solo emplearon a 8.000 haitianos por día, una cifra considerablemente menor que los 25.000 previstos. En mayo de 2011, la OIG destacó problemas graves en la provisión de viviendas, donde sólo se completó el 6% de los refugios transitorios planificados antes del inicio de la temporada de huracanes de 2010 (Johnston y Main, 2013). En septiembre de 2012, la OIG (2012) evaluó la Haiti Recovery Initiative, concluyendo que Chemonics no estaba en camino de alcanzar los objetivos del programa. En junio de 2013, la GAO (2013) descubrió que el objetivo inicial de USAID de construir 15.000 viviendas permanentes en Haití se había reducido a solo 2.600, al tiempo que los costes aumentaban de 53 millones de dólares a más de 90 millones (GAO, 2013). Vinculado al PIC de USAID, la GAO lo calificó de “resultados mixtos” en el mismo reporte de 2013 y, en general, se considera que el PIC no ha logrado la transformación económica prometida (Jean-Mary Chérestal, 2015; Kushner, 2019). Por ejemplo, de los 65.000 puestos de trabajo que el PIC pretendía crear, solo había empleado a 13.000 personas a fecha de junio de 2017 (OIG, 2018).

Pese a estas advertencias, USAID continuó diseñando nuevos proyectos sin abordar de manera adecuada los problemas señalados. No fue hasta diciembre de 2014 que la agencia accedió a realizar análisis detallados de sostenibilidad para sus actividades de infraestructura, después de haber invertido ya cientos de millones de dólares. Además, un informe de la GAO de 2015 reveló que los funcionarios de USAID no tenían previsto aplicar análisis similares para actividades no vinculadas a infraestructura hasta 2018. Según la GAO, esta falta de evaluación implicaba que USAID seguiría asignando fondos a nuevos proyectos sin contar con información suficiente sobre los riesgos para su sostenibilidad, lo que limitaba su capacidad para mitigarlos (GAO, 2015). A pesar de que la GAO reiteró estas advertencias en su informe más reciente de

2023 y recomendó a USAID actualizar o desarrollar planes estratégicos de infraestructura basados en información de calidad, así como realizar un seguimiento y evaluación consistentes y completos de los resultados de estas actividades, la agencia no ha mostrado ningún avance para cumplir con dichas recomendaciones (GAO, 2023).

En 2013, Johnston y Main (2013) publicaron un informe en el que evidenciaron una falta generalizada de transparencia sobre el uso de los miles de millones de dólares destinados a la ayuda estadounidense en Haití. En respuesta a este y otros reportes del inspector general de USAID y de la GAO, que señalaban incumplimientos en los objetivos de los programas y falta de transparencia, el Congreso de EE.UU. aprobó en 2014 la Ley de Evaluación del Progreso en Haití (APHA), una legislación bipartidista que exige mayores requisitos de información por parte del Estado y de USAID (CEPR, 2014), con el objetivo de “medir el progreso de los esfuerzos de recuperación y desarrollo en Haití tras el terremoto del 12 de enero de 2010” (Congreso de los Estados Unidos, 2014, p. 01). Para cumplir con la APHA, el DOS publicó dos reportes con descripciones cuantitativas y cualitativas de los programas de ayuda, que incluyen información sobre subcontratistas, así como puntos de evaluación y objetivos. Sin embargo, una revisión conjunta publicada en diciembre de 2016 por CEPR y el Grupo de Trabajo de Defensa de Haití (HAWG) encontró que los informes sobre la asistencia de EE.UU. en Haití contienen omisiones y deficiencias, incluyendo datos incompletos, falta de vinculación entre proyectos y resultados, escasa información sobre la coordinación de EE.UU. con entidades haitianas e internacionales, ninguna información sobre el desarrollo de capacidades no gubernamentales, y falta de identificación de los errores y las lecciones aprendidas (Main et al., 2016). CEPR y HAWG también señalaron que la mayoría de los grupos de la sociedad civil haitiana desconocen los informes de la APHA, lo que indica que USAID y el DOS han hecho poco por difundirlos. Además, el informe no ha sido traducido al francés ni al criollo haitiano, lo que lo hace inaccesible para la mayoría de la población (Main et al., 2016).

En cuanto al Nuevo Enfoque de la ONU, fue diseñado para depender de financiamiento voluntario, a pesar de que su propia planificación también establecía un presupuesto considerable para su implementación (IJDH y BAI, 2020). En diciembre de 2023, sólo se habían recaudado 21,88 (5,4%) de los 400 millones de dólares solicitados para el MPTF. La Secretaría del MPTF y la Oficina del Coordinador Residente en Haití (2024) identificó la escasez de fondos como una limitante a la implementación de proyectos, concluyendo en su reporte anual de 2023 que “la financiación disponible en el MPTF ha disminuido considerablemente y, sin nuevas contribuciones, nuestra capacidad para capitalizar los logros de 2023, que tanto nos ha costado conseguir, se verá gravemente limitada” (p. 21).

A pesar de la insuficiencia de fondos para cumplir con los objetivos establecidos, el Secretario General ha descartado la opción de financiar el plan a través de cuotas obligatorias. Como señalan estudios de IHRC et al. (2020) y de IJDH y BAI (2020), esta decisión hace improbable que la ONU logre cumplir sus compromisos en el marco del Nuevo Enfoque. Inicialmente, al presentar el plan, la ONU contempló la posibilidad de recurrir a un modelo de cuotas si el financiamiento voluntario resultaba insuficiente. Este mecanismo habría permitido asignar fondos de manera obligatoria dentro del presupuesto de la organización, alineándose con las obligaciones legales que la ONU habría asumido de haber reconocido su

responsabilidad jurídica ante las víctimas del cólera. Sin embargo, debido a la oposición de Estados miembros influyentes como EE.UU., el Reino Unido y Francia, la ONU no ha avanzado en la implementación de esta alternativa (IJDH y BAI, 2020). Como indica el estudio de la IHRC et al. (2020),

La dependencia de la ONU de las contribuciones benéficas obstaculizó el éxito del plan desde el principio y ha dado lugar a una financiación muy insuficiente (...). La escasez de financiación —más que los derechos de las víctimas o los deberes de la ONU— ha determinado el contenido y el alcance del Nuevo Enfoque (IHRC et al., 2020).

Además, algunos actores humanitarios carecían de objetivos claros desde el inicio. Un ejemplo de ello es la respuesta de las fuerzas militares estadounidenses, cuya efectividad resulta difícil de evaluar debido a la ausencia de objetivos definidos y parámetros concretos para medir el desempeño de su operación (Cecchine et al., 2013). No obstante, en una autoevaluación posterior de su respuesta humanitaria, califican que cumplieron con sus objetivos, aunque bajo la suposición de que todos los actores compartían un propósito común de “salvar vidas y aliviar el sufrimiento” (Keen et al., 2011, p. 24).

### **3.4. Problemas de planificación**

La respuesta humanitaria al terremoto estuvo marcada por una planificación deficiente. Entre las causas de esta debilidad destacan falta de personal capacitado, tanto en aspectos técnicos específicos como en conocimiento del contexto haitiano, así como problemas de liderazgo y ausencia de medidas adecuadas para garantizar los recursos monetarios y técnicos necesarios para la ejecución de los programas. Asimismo, la rotación constante de personal y la subestimación de los tiempos requeridos agravaron aún más la situación. Esta falta de planificación tuvo consecuencias significativas, como ineficiencias en la asignación de recursos, indecisión en la gestión de donaciones, y retrasos e inconclusión de proyectos clave. A continuación, se presentan ejemplos específicos que ilustran estas problemáticas.

Informes de la GAO y de RAND Corporation de la respuesta humanitaria de las fuerzas armadas estadounidenses calificaron las deficiencias en la planificación como uno de los principales problemas de sus operaciones. Por ejemplo, señalan que el proceso informal y vertical sin planificación formal mediante el cual se desarrolló su liderazgo aceleró la asignación de recursos, generando ineficiencias al enviar un exceso de personal y equipos, mientras que otros recursos clave faltaron (GAO, 2010; Cecchine et al., 2013).

Aunque evaluaciones internas posteriores de las fuerzas militares estadounidenses calificaron la respuesta al terremoto en Haití de 2010 como un éxito en términos generales, al igual que los informes externos mencionados, también reconocieron deficiencias en la planificación que afectaron su eficacia e incluyeron recomendaciones concretas para mejorar futuras operaciones (DiOrío, 2010; Keen et al., 2011). Para evaluar si estas recomendaciones se tradujeron en mejoras reales o quedaron sin aplicarse, un análisis publicado en el *Journal of Advanced Military Studies* comparó la respuesta del SOUTHCOM al terremoto de Haití en 2010 con su actuación ante el sismo de 2021, concluyendo que se superaron los desafíos previos y se aplicaron las lecciones aprendidas (Davis, 2022). Según el estudio,

Tras haber abordado su ausencia en los futuros planes para grandes contingencias después de 2010, el SOUTHCOM estaba preparado para responder a un acontecimiento de este tipo cuando la historia se repitiera (imperfectamente). Aunque la devastación del terremoto de 2011 no fue, afortunadamente, tan extrema como la de 2010, el SOUTHCOM, que ya había demostrado su capacidad para responder a lo imprevisto, demostró que está aún mejor preparado ahora que existen planes de contingencia para grandes catástrofes (Davis, 2022).

Documentos internos y correos electrónicos de la Cruz Roja revelaron graves deficiencias en la planificación de su programa de vivienda en Haití, evidenciando una serie de problemas que afectaron directamente la ejecución y los resultados de los proyectos. Lee Malany, quien lideraba dicho programa, destacó que la organización carecía de un plan claro para abordar las necesidades de vivienda en el país. En una reunión celebrada en 2010 en la sede de Washington, D.C., Malany señaló que los altos directivos, incluida la entonces presidenta y directora general Gail McGovern, no contaban con una estrategia definida para gestionar los millones de dólares asignados al programa (Elliott y Sullivan, 2015). Incluso para 2013, los documentos internos revelan que la organización seguía deliberando sobre cómo gastar los fondos destinados a vivienda. Esta indecisión sobre la asignación de las donaciones resultó en una gestión inconsistente de los recursos. Por ejemplo, en un correo electrónico enviado en noviembre de 2013, McGovern reconoció que un proyecto específico estaba “fracasando” y preguntó a su equipo si podía redirigir parte de los 20 millones restantes hacia otras iniciativas o socios (Figura 8) (Elliott, 2015a).

## **Figura 8: Fragmento de correos electrónicos de Gail McGovern y David Meltzer sobre el programa para Haití de la Cruz Roja Americana**

So now that the Northern project is going bust and we still are holding \$20 million of contingency, any ideas on how to spend the rest of this?? (Besides the wonderful helicopter idea?) Can we fund Conrad's hospital? Or more to PiH? Any more shelter projects?

Fuente: Elliott (2015a) • Creado con Datawrapper

Además, Carline Noailles, responsable del proyecto de Campeche en Washington, D.C., mencionó que los retrasos constantes se debieron a que la Cruz Roja “no tenía los conocimientos técnicos” (Elliott y Sullivan, 2015). Esta carencia de personal capacitado con experiencia en gestión de desastres y desarrollo en contextos complejos quedó reflejada en comunicaciones internas de 2011, que también señalaron una falta de estabilidad en los equipos de trabajo en Haití (Elliott, 2015b). La rotación constante de personal y la excesiva dependencia en personal extranjero limitaron la continuidad de los proyectos y el entendimiento del contexto local, generando vacíos de liderazgo y problemas de coordinación (Elliott y Sullivan, 2015). Casos emblemáticos fueron el proyecto de construcción de viviendas en Quartier-Morin, que sufrió retrasos de dos años y terminó siendo cancelado debido, en parte, a cambios recurrentes en el liderazgo del programa (Elliott, 2015b), y el proyecto en Campeche, para el cual documentos internos mostraron un gasto elevado, donde gran parte de los fondos se destinó a gastos

indirectos y consultorías en lugar de la construcción directa de infraestructura (Elliott y Sullivan, 2015).

En respuesta a estas críticas y evidencias, la Cruz Roja publicó un informe en el que buscaba “desmentir mitos” sobre su intervención. En este documento, la organización rechazó la acusación de falta de planificación, calificándola como un mito y argumentando que “respondió continuamente a las circunstancias cambiantes adaptando nuestro plan y permaneciendo receptiva a las necesidades emergentes y en evolución” (American Red Cross, 2015a). Según la Cruz Roja, la planificación a largo plazo comenzó poco después del terremoto, con un plan de trabajo elaborado durante el primer año que establecía seis prioridades estratégicas —ayuda de emergencia, refugio, salud, agua y saneamiento, medios de subsistencia y preparación ante catástrofes— a las que posteriormente se sumó la prevención del cólera. La organización atribuyó los cambios en su estrategia a la complejidad del contexto haitiano, argumentando que los ajustes fueron necesarios para responder a los desafíos emergentes. Como ejemplo, señaló el caso de las viviendas permanentes en Campeche: al no poder acceder a terrenos para nuevas construcciones, optó por un enfoque flexible que incluyó subsidios de alquiler, reparaciones y reforzamiento de viviendas existentes, así como capacitación para que las personas aprendieran a reparar sus propios hogares (American Red Cross, 2015a). Sin embargo, no existen pruebas de que estos ajustes en la planificación resultaron en una mayor eficacia en la implementación de los proyectos. Por el contrario, la evidencia disponible sugiere una gestión deficiente de los fondos, con recursos desaprovechados y una falta de claridad sobre su destino final (Elliott y Sullivan, 2015).

Programas de USAID sufrieron retrasos debido a problemas de planificación relacionados a falta de personal en terreno y la ausencia de mecanismos para expandir el equipo, de acuerdo con un informe de la GAO (2011). Además, el puerto relacionado al PIC, según la GAO, se desechó debido a falta de experiencia interna, en particular, la inexperiencia en la región de los responsables en la construcción del puerto, y de planificación inicial (Johnston, 2014; Kushner, 2019), además de que la agencia subestimó el interés del sector privado y el tiempo necesario para su construcción (Johnston, 2018; Kushner, 2019). A pesar de los retrasos y la falta de implementación de varios programas debido a deficiencias en la planificación, USAID siguió asignando fondos a nuevos proyectos sin abordar los problemas señalados en los informes recurrentes de la GAO (Johnston, 2014).

### **3.5. Disparidad entre la necesidad y la ayuda humanitaria**

La respuesta humanitaria en Haití tras el terremoto de 2010 evidenció problemas significativos derivados de una marcada disparidad entre las necesidades reales de la población afectada y la ayuda humanitaria proporcionada por los actores internacionales. Uno de los aspectos más críticos fue la falta de consulta y participación activa de las comunidades locales en el diseño de los proyectos, lo que resultó en iniciativas poco alineadas con las prioridades de la población. Asimismo, la planificación de los programas no consideró adecuadamente la realidad local, lo que limitó su eficacia y relevancia. A continuación, se presentan ejemplos que ilustran estas problemáticas y sus repercusiones en la respuesta humanitaria.

Katz (2013) señaló que el modelo vertical y altamente centralizado de los equipos de respuesta humanitaria bajo el mando de la JTF-Haití resultó en una distribución desigual de la atención, favoreciendo áreas como Pétion-Ville mientras que zonas periféricas, como Carrefour, fueron en su mayoría desatendidas. Además, como señala un estudio de RAND Corporation sobre la respuesta militar estadounidense, gran parte de la ayuda implementada careció de una comprensión clara de las necesidades reales en el terreno (Cecchine et al., 2013):

Por ejemplo, el personal de la JTF-Haití realizó más de 1.000 intervenciones quirúrgicas, pero ¿cuál fue el número total de pacientes heridos que necesitaron cirugía debido a las lesiones sufridas en el terremoto? Del mismo modo, la JTF-Haití proporcionó refugio de emergencia a 1,7 millones de personas, pero ¿fue suficiente? Si es así, la JTF-Haití fue muy eficaz a la hora de proporcionar refugio de emergencia a las víctimas del terremoto de Haití, pero si el doble de personas se quedó sin hogar a causa de la catástrofe, entonces fue mucho menos eficaz de lo que esa cifra podría indicar en un principio (Cecchine et al., 2013).

Esta falta de alineación entre las acciones implementadas y las necesidades reales también se reflejó en el hecho de que, más de una semana después del terremoto, el Hospital General de Puerto Príncipe seguía careciendo de medicamentos y materiales esenciales para tratar a cientos de pacientes en estado crítico. Un médico describió la priorización desproporcionada de la seguridad por parte de las fuerzas militares como el “principal obstáculo para que llegue la ayuda” (Democracy Now!, 2010b). Mientras tanto, los esfuerzos para evacuar a ciudadanos estadounidenses y expatriados fueron efectivos, pero el rescate de los sobrevivientes haitianos atrapados en los escombros recayó, en gran medida, en los propios ciudadanos haitianos, quienes utilizaron herramientas improvisadas para salvar vidas (Democracy Now!, 2010a).

A pesar de estos problemas, evaluaciones posteriores realizadas por las mismas fuerzas militares no identificaron deficiencias en cuanto al reconocimiento de los intereses y necesidades de las poblaciones afectadas y el contexto local (DiOrio, 2010; Keen et al., 2011).

La desconexión entre las iniciativas implementadas por la Cruz Roja y las necesidades urgentes de la población haitiana fue otro punto crítico. Durante una crisis sanitaria y de recursos básicos, la organización priorizó campañas educativas que no atendían necesidades fundamentales como el acceso al agua potable, alimentos y atención médica (NPR, 2015). A la vez, la Cruz Roja destinó aproximadamente 48 millones de dólares a programas de capacitación laboral y apoyo económico con el objetivo de ayudar a las comunidades a recuperar medios de subsistencia. Sin embargo, estos esfuerzos fueron limitados frente a las necesidades estructurales del país, que enfrentaba un alto nivel de desempleo y una falta crónica de oportunidades económicas (Johnston, 2014). Testimonios de exfuncionarios indicaron que estos programas se percibieron como desconectados de la realidad haitiana, generando frustración tanto entre los beneficiarios como entre los trabajadores (Elliot y Sullivan, 2015).

La organización desplegó un número significativo de trabajadores expatriados para liderar y coordinar los proyectos, muchos de los cuales no hablaban francés ni criollo haitiano, lo que dificultó la comunicación con las comunidades afectadas. Esto creó una barrera significativa, limitando la capacidad del personal para entender las necesidades específicas de

las comunidades y colaborar eficazmente con líderes locales. Carline Noailles, quien trabajó en proyectos de la Cruz Roja, destacó lo poco productivo que resultaba participar en reuniones comunitarias sin poder comunicarse adecuadamente, una situación que se tradujo en la exclusión de las voces locales en procesos decisivos (Elliott y Sullivan, 2015).

Asimismo, correos revelaron que las discusiones se enfocaban en identificar proyectos que generaran buena publicidad, relegando a un segundo plano las necesidades reales de la población haitiana. En uno de estos intercambios, McGovern señaló que ciertos proyectos serían aceptables porque “se verían bien”, evidenciando una mayor preocupación por la imagen pública de la organización que por el impacto concreto en Haití (Elliott, 2015a).

A pesar de las evidencias presentadas por ProPublica y NPR sobre la falta de comunicación con las comunidades locales en proyectos como el de viviendas permanentes en Campeche (Elliott y Sullivan, 2015), la organización negó haber engañado a los residentes al no informarles sobre la cantidad de dinero destinado a la iniciativa y no cumplir con las promesas de nuevas viviendas. En su defensa, la Cruz Roja destacó que trabajaron de manera estrecha con los residentes de la comunidad, manteniéndolos informados sobre los planes y presupuestos, y recibiendo su opinión para decidir cómo distribuir los fondos en sus barrios (American Red Cross, 2015a).

En cuanto a las denuncias sobre la contratación insuficiente de haitianos en su personal, recurriendo en gran medida al costoso personal expatriado (Elliott y Sullivan, 2015), la organización calificó tales afirmaciones de “falsas” y defendió que, desde el inicio de su programa de recuperación tras el terremoto, más del 90% de su personal fue de origen haitiano. Además, subrayó que no tolera ningún tipo de prejuicio y que implementó medidas para capacitar a su personal en sensibilidad cultural. En cuanto a la contratación de personal internacional, la Cruz Roja buscó justificar su decisión, explicando que se basó en la experiencia en la recuperación de grandes desastres y en un paquete de prestaciones alineado con las normas del sector humanitario internacional (American Red Cross, 2015a).

Respecto a la ONU, el estudio conjunto de la IHRC, el BAI, y el IJDH identificó que, pese al compromiso declarado de la organización de “situar a las víctimas en el centro” de sus esfuerzos, no las reconoció como titulares de derechos ni les otorgó un papel significativo en la toma de decisiones. Antes de implementar el Nuevo Enfoque, la ONU no llevó a cabo un análisis exhaustivo de los daños sufridos por las víctimas ni consideró sus perspectivas y necesidades en el diseño del plan. Decisiones críticas sobre la orientación y el contenido de esta estrategia se adoptaron sin la participación activa de las víctimas, lo que, de acuerdo con el estudio, resultó en un esfuerzo percibido como ilegítimo y desconectado de las prioridades de quienes fueron directamente afectados, que en realidad buscaban compensaciones por los daños causados por la epidemia. Esta exclusión también se reflejó en un estudio publicado en el *International Journal of Environmental Research and Public Health*, que examinó las experiencias de los miembros de la comunidad haitiana durante la epidemia y sus actitudes hacia la rendición de cuentas. Según el estudio, la comunidad haitiana no está suficientemente informada sobre los proyectos de la ONU. También hay mitos y malentendidos en torno a las

compensaciones, donde algunos participantes incluso manifestaron creer que no recibieron indemnizaciones debido a la falta de documentación adecuada (Bartels et al., 2022).

En el caso de USAID, informes de la OIG (2010; 2012) señalaron una limitada participación comunitaria en programas financiados por la agencia, como Cash-for-Work y Haiti Recovery Initiative. De acuerdo con la OIG (2010), esta falta de involucramiento comprometió la sostenibilidad de las iniciativas y su adecuación a las necesidades locales. También ha sido un problema recurrente identificado en múltiples informes de la GAO. Los primeros reportes de 2010 destacaban que los intereses de las comunidades locales no eran adecuadamente considerados en el diseño de los proyectos (GAO, 2010). Esta problemática persistió, ya que el informe más reciente de 2023 sobre las actividades de USAID en Haití siguió evidenciando deficiencias en la inclusión y participación de las comunidades (GAO, 2023).

A modo de ejemplo concreto, un informe de ActionAid USA señaló graves deficiencias en la consideración de los intereses de la comunidad por parte de USAID en el desarrollo del PIC, lo que resultó en el desalojo de agricultores haitianos de sus tierras sin recibir compensación, a pesar de que estudios de factibilidad financiados por el BID ya advertían sobre los efectos negativos del proyecto en la comunidad. No obstante, la construcción del PIC siguió adelante en esa ubicación con el argumento de la descentralización y ubicación privilegiada para la producción y exportación. Según los pobladores, la mayor injusticia radicó en la expropiación de tierras agrícolas de alta calidad, fundamentales para la subsistencia de pequeños agricultores vulnerables, quienes dependían de ellas durante décadas para su alimentación y sustento. La decisión de destinar sus tierras a un proyecto orientado a la exportación se tomó de manera unilateral y sin su consentimiento (Jean-Mary Chérestal, 2015).

Pese a que la apropiación de tierras ocurrió en enero de 2011, el plan de compensación para las familias desplazadas no se firmó hasta ocho meses después. Según la Unité Technique d'Exécution (UTE) del Ministerio de Finanzas de Haití, las compensaciones se calcularon en función del tamaño de las tierras, la infraestructura perdida y el nivel de vulnerabilidad de los afectados. Sin embargo, el Plan de Acción para la Compensación de las Personas Afectadas por el Parque Industrial Caracol en la Región Norte (Plan de Acción) reconoció que los valores estimados eran conservadores y solo consideraban la producción agrícola de 2010. Como señaló Jacques Dumerger, un agricultor local: “Realmente no pueden poner un número a lo que la tierra era capaz de producir y proporcionarnos” (Jean-Mary Chérestal, 2015, p. 14). Además, desde el inicio del proceso de compensación, la preferencia mayoritaria de las familias afectadas era de recibir nuevas tierras en lugar de cualquier otra forma de compensación.

A pesar de la significativa inversión en el PIC, los fondos destinados a compensar a los agricultores desplazados fueron insuficientes, además de delegados al gobierno haitiano, que no contaba con los recursos para satisfacer las demandas de las comunidades desalojadas. Las indemnizaciones otorgadas no restauraron las condiciones de vida previas a la expropiación ni garantizaron el acceso a nuevas tierras de cultivo. En este sentido, como indicó el reporte de ActionAid USA, la compensación limitada incumplió con el principio fundamental de “no hacer daño” al dejar a muchas familias sin los recursos necesarios para cubrir sus necesidades

alimentarias y económicas básicas. Además, remarcó que la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de consentimiento por parte de las comunidades y las violaciones a los derechos humanos a la alimentación y a los medios de subsistencia evidenciaron la necesidad de que el gobierno de Haití y el de EE.UU. refuercen su compromiso con los principios y las normas internacionales sobre gobernanza responsable de la tenencia de la tierra (Jean-Mary Chérestal, 2015).

### **3.6. Descoordinación entre actores humanitarios**

La falta de coordinación, tanto dentro de las organizaciones humanitarias como entre los diversos actores involucrados en la respuesta al terremoto, tuvo un impacto significativo en la efectividad de las intervenciones. La ausencia de mecanismos adecuados de comunicación y planificación conjunta generó demoras, dificultó el trabajo de otros equipos humanitarios en el terreno y derivó en una asignación ineficiente de los recursos. Además, se identificaron deficiencias sustanciales en la integración del gobierno haitiano en la respuesta humanitaria. En este contexto, los casos de la Cruz Roja, las fuerzas militares estadounidenses y la ONU ejemplifican cómo la descoordinación afectó negativamente la implementación de la respuesta humanitaria.

En cuanto a la descoordinación interna, memorandos y correos electrónicos de la Cruz Roja mostraron repetidas advertencias sobre retrasos internos que impedían la implementación de los proyectos. Los gerentes en Haití expresaban frustración ante las demoras en la aprobación de iniciativas por parte de los supervisores en la sede central (Elliott, 2015b). Un ex-funcionario que trabajó en el proyecto de Campeche comentó: “Todo tarda cuatro veces más porque estaría micro gestionado desde DC, y no tenían experiencia en desarrollo” (Elliott y Sullivan, 2015). A pesar de la clara descoordinación interna evidenciada por la investigación de ProPublica y NPR, la organización no realizó comentarios, sino que se limitó a indicar los logros en Haití del “muy trabajador personal”, como la construcción y reparación de viviendas, escuelas, carreteras y puntos de distribución de agua (American Red Cross, 2015a).

Otros ejemplos de descoordinación interna incluyen el caso de las fuerzas militares estadounidenses y la respuesta en clústers liderada por OCHA. Un informe de la GAO (2010) identificó que el SOUTHCOM no estaba preparado para responder a una emergencia de la magnitud del terremoto de Haití, evidenciando deficiencias en la comunicación entre los distintos componentes de las fuerzas. Por otro lado, múltiples análisis (Harvard Humanitarian Initiative, 2011; Bhattacharjee y Lossio, 2011; Howitt et al., 2011; Julmy, 2011; Ferris y Ferro-Ribeiro, 2012; Biquet, 2013; Vinbury, 2017) señalaron que, en el marco de la respuesta en clústers liderada por OCHA, las diferentes agencias de la ONU enfrentaron dificultades de coordinación entre clústeres debido a la existencia de prioridades divergentes, una sobrecarga de información y falta de personal capacitado, lo que generó ineficiencias como retrasos en la asistencia y una gestión inadecuada de los recursos y los esfuerzos, con duplicaciones tanto como vacíos. No obstante, es importante destacar que, en las semanas posteriores a la fase inicial de la respuesta, la ONU logró fortalecer la coordinación interagencial en el país (IASC, 2010; Bhattacharjee y Lossio, 2011), y una autoevaluación de OCHA sobre su desempeño en

la emergencia reconoció la debilidad en la coordinación entre clústeres y planteó recomendaciones para su mejora (Bhattacharjee y Lossio, 2011).

Las deficiencias en la coordinación entre actores de diferentes organizaciones pueden reflejarse en la experiencia del personal del SOUTHCOM de las fuerzas militares estadounidenses, que estaba más orientado a operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, lo que dificultó la coordinación inicial con otras organizaciones (Cecchine et al., 2013). Una de las principales controversias fue la toma del control del tráfico aéreo en el aeropuerto principal de Puerto Príncipe por parte de la JTF-Haití. Aunque el ejército estadounidense argumentó que esta medida era necesaria para garantizar el orden, Haïti Liberté señaló que obstaculizó la llegada de ayuda humanitaria y del personal de búsqueda y rescate (Hallward, 2010). Según The New York Times, los comandantes estadounidenses rechazaron vuelos de World Food Program para priorizar el aterrizaje de tropas, equipos militares y la evacuación de ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros. En consecuencia, un equipo británico de búsqueda y rescate no pudo aterrizar, al igual que cinco aviones de MSF, cuyo personal tuvo que recurrir a comprar sierras en el mercado local para realizar amputaciones debido a la falta de suministros (Thompson y Cave, 2010).

Si bien evaluaciones posteriores de las fuerzas militares estadounidenses reconocieron desafíos en la coordinación tanto interna como con otros actores humanitarios, también justificaron sus decisiones, como la toma del control del tráfico aéreo en el principal aeropuerto, argumentando que eran medidas necesarias para el cumplimiento de sus propios objetivos (DiOrio, 2010; Keen et al., 2011). Como fue mencionado anteriormente, estas evaluaciones no reconocieron plenamente los intereses y objetivos particulares de otras organizaciones humanitarias (DiOrio, 2010; Keen et al., 2011), bajo la suposición de que todos los actores compartían un propósito común de “salvar vidas y aliviar el sufrimiento” (Keen et al., 2011, p. 24).

## **4. Déficit de rendición de cuentas en la respuesta**

En el capítulo anterior se identificaron y analizaron los principales problemas de la respuesta humanitaria internacional al terremoto de Haití en 2010. Si bien sus causas fueron diversas, detrás de cuatro de esos problemas —la epidemia de cólera, los abusos de poder, el incumplimiento de objetivos y la disparidad entre la necesidad y la ayuda humanitaria— se identifican déficits de rendición de cuentas en sus distintas dimensiones —ascendente, descendente, horizontal e interna— que se examinan a continuación.

### **4.1. Limitaciones contextuales**

Antes de avanzar en el análisis, es fundamental señalar algunas limitaciones estructurales conducentes a déficits de rendición de cuentas en el contexto haitiano. La primera y principal es la condición de Estado fallido, es decir, un Estado sin capacidad para ejercer el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de su territorio, conservando el orden público y brindando servicios básicos a la población (Alonso Berrio, 2003). Esta limitación configura un contexto de emergencia humanitaria compleja, en la que las mismas razones por las cuales la respuesta internacional es necesaria también determinan la imposibilidad del Estado de cumplir su rol de “coordinador y articulador” de dicha respuesta (Cotrino, comunicación personal, 19 de diciembre de 2024), monitoreando la actuación de los actores humanitarios internacionales y garantizando la protección de los derechos de la ciudadanía frente a potenciales abusos (Ruiz Medrano, 2011).

Este círculo vicioso resulta particularmente problemático: la fragilidad estatal acentúa la vulnerabilidad ante desastres y genera la necesidad de asistencia internacional (Rotberg, 2003); sin embargo, esa misma fragilidad impide que el Estado controle y supervise adecuadamente la ayuda recibida, lo que puede resultar en respuestas ineficaces o incluso perjudiciales que, a su vez, profundizan la debilidad estatal (García Neumann, 2009). Se establece así una dinámica perversa donde la dependencia de la ayuda internacional se acentúa mientras que la capacidad para gestionarla y asegurar que responda a las necesidades locales se debilita progresivamente.

Hacia 2010, el gobierno haitiano no controlaba vastas áreas del país, particularmente de Puerto Príncipe, donde operaban diversos actores no estatales armados, incluidas pandillas y grupos del crimen organizado. La violencia de actores no estatales, reflejo de la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad interna, contribuía a la descomposición social y al colapso de la infraestructura (De Waal, 1997; Cockayne, 2016). Esta situación no solo dificultaba la distribución de ayuda en zonas controladas por estos grupos, sino que también creaba un entorno propicio para que intereses particulares y locales capturaran recursos de asistencia, desviándolos de sus objetivos originales.

El panorama político estaba marcado por una profunda polarización, con ciclos electorales acompañados de violencia política, protestas masivas y enfrentamientos. La corrupción endémica había debilitado las estructuras gubernamentales. En este contexto, las intervenciones humanitarias frecuentemente operaban a través de canales paralelos a las

instituciones estatales, estableciendo sistemas de gobernanza propios que, si bien podían ser más eficientes en el corto plazo, socavaban las ya frágiles capacidades estatales en el largo plazo (IASC, 2010; Katz, 2013; C.A. Payton, comunicación personal, 09 de enero de 2025).

La infraestructura de salud era extremadamente precaria, y muchos haitianos dependían de organismos intergubernamentales para recibir asistencia básica. El sistema educativo era igualmente débil, con altos niveles de analfabetismo (Mancero García y Múnica Perafán, 2018; Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025). Estas deficiencias críticas en servicios esenciales limitaban severamente la capacidad de la población para acceder a información, comprender sus derechos y participar activamente en los procesos de toma de decisiones relacionados con la ayuda humanitaria, elementos fundamentales para cualquier sistema efectivo de rendición de cuentas.

El acceso a la justicia y la confianza en las instituciones judiciales eran casi nulos (S. Lee, comunicación personal, 14 de enero de 2025). Esta carencia resultaba particularmente problemática para la rendición de cuentas, ya que impedía que las víctimas de abusos o negligencias por parte de actores humanitarios pudieran recurrir a mecanismos formales de reparación. La ausencia de un sistema judicial funcional eliminaba una de las principales vías a través de las cuales los afectados por decisiones o acciones perjudiciales podrían haber exigido rectificaciones (Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025).

El país dependía en gran medida de la ayuda internacional para su supervivencia. Pero las enormes cantidades de asistencia recibidas no lograban resolver los problemas estructurales del país y su fragilidad estatal (Abbott, 2011). De hecho, ciertos patrones de distribución de la ayuda habían contribuido históricamente a perpetuar las desigualdades y vulnerabilidades. Décadas de asistencia internacional habían generado una economía paralela dominada por actores externos, con escasos vínculos con los sistemas productivos locales y limitada capacidad para generar desarrollo sostenible (C.A. Payton, comunicación personal, 09 de enero de 2025).

La combinación de factores de inestabilidad política, baja institucionalidad, violencia, inseguridad alimentaria, insuficiencia de infraestructura y desplazamiento forzado configuraba un contexto de emergencia humanitaria compleja (Barreto, 2021). Esta complejidad exigía respuestas altamente contextualizadas, con fuerte participación de actores locales conocedores del terreno. Sin embargo, las intervenciones humanitarias tendieron a implementar soluciones estandarizadas, desarrolladas en contextos completamente distintos, con limitada adaptación a las realidades locales.

La situación se agravó exponencialmente tras el terremoto de 2010, que devastó el país y diezmó al propio gobierno haitiano. La destrucción de edificios gubernamentales y la muerte de numerosos funcionarios dejaron al Estado en extrema vulnerabilidad. Como resultado, la capacidad del gobierno para exigir rendición de cuentas a los actores humanitarios fue prácticamente inexistente, permitiendo que otros Estados, organismos intergubernamentales y ONG internacionales operaran con un alto grado de autonomía (C.A. Payton, comunicación personal, 09 de enero de 2025).

Este problema se vio intensificado por las inmunidades legales con que contaron algunos de los actores internacionales que operaron en el contexto de la emergencia humanitaria. Estas inmunidades, concebidas para proteger operaciones humanitarias en contextos hostiles, se transformaron paradójicamente en escudos contra la rendición de cuentas, creando zonas de impunidad legal donde los estándares ordinarios de responsabilidad quedaban suspendidos.

La Convención (1946) otorga a la organización y a su personal inmunidad legal en los países donde opera. En Haití, esta protección se reforzó con el SOFA, que reguló la presencia de la MINUSTAH y concedió amplia inmunidad a sus miembros. En consecuencia, los civiles que integraban la MINUSTAH sólo podían ser procesados con la aprobación conjunta del gobierno haitiano y el Representante Especial de la ONU, mientras que los militares quedaban bajo la jurisdicción exclusiva de sus países de origen. El SOFA contemplaba la creación de una Comisión Permanente de Reclamaciones para tratar casos de derecho privado, pero esta nunca se implementó (IHRC et al., 2020). Por tanto, la rendición de cuentas legal en casos que involucraron a efectivos de la ONU no fue posible en Haití.

La no implementación de la Comisión Permanente de Reclamaciones prevista en el SOFA es particularmente reveladora. Evidencia cómo, incluso cuando existen provisiones formales para establecer mecanismos de rendición de cuentas, la falta de voluntad política para implementarlos efectivamente puede neutralizar por completo su potencial. Esta brecha entre lo formal y lo real constituye un patrón recurrente en materia de rendición de cuentas: organizaciones e instituciones adoptan retóricamente principios y compromisos de responsabilidad, pero sistemáticamente fallan en traducirlos en mecanismos operativos efectivos.

#### **4.2. Principales déficits de rendición de cuentas**

Varios de los problemas identificados en la ayuda humanitaria en respuesta al terremoto fueron problemas de rendición de cuentas.

La transformación del brote de cólera en una epidemia de grandes dimensiones y vastas consecuencias, como resultado de la negativa de la ONU a asumir responsabilidad por la introducción de la enfermedad fue uno de ellos. A esto se añadieron el encubrimiento, la falta de medidas para contener la crisis y la continuidad de prácticas deficientes de saneamiento (Piarroux, 2016).

Este caso resulta paradigmático de cómo la falta de rendición de cuentas puede magnificar crisis y generar daños adicionales a poblaciones ya vulnerabilizadas. La secuencia de acontecimientos reveló patrones institucionales profundamente arraigados: inicialmente, la ONU negó toda responsabilidad, a pesar de la evidencia científica que vinculaba el origen del brote con el contingente nepalí de la MINUSTAH; posteriormente, cuando la evidencia se hizo irrefutable, la organización recurrió a su inmunidad legal para evitar compensaciones; finalmente, ante la presión internacional sostenida, admitió una responsabilidad “moral” pero no legal, implementando un programa de compensación voluntario y limitado.

Recién en 2016, cuando aceptó que le cabía una responsabilidad moral, la ONU impulsó el Nuevo Enfoque para abordar la enfermedad (ONU, 2016). Este retraso de seis años evidenció cómo la ausencia de mecanismos formales de rendición de cuentas permite que los actores humanitarios pospongan indefinidamente su respuesta ante crisis generadas por sus propias acciones u omisiones, con consecuencias devastadoras para las poblaciones afectadas. Durante ese período, el cólera se había extendido por todo el país, además propagándose hacia República Dominicana y Cuba (Hadeed et al., 2023), y causando más de 9.200 muertes y afectando a 788.000 personas en Haití (UN, 2016).

Aun así, este esfuerzo no ha recibido financiamiento suficiente, limitando su efectividad. La ONU nunca asumió responsabilidad legal, manteniendo su inmunidad jurídica y desestimando las demandas de indemnización de las víctimas (IJDH y BAI, 2020). La distinción entre responsabilidad moral y legal creó una brecha a través de la cual la organización pudo proyectar una imagen de compromiso con las víctimas mientras simultáneamente evitaba consecuencias significativas. Para las víctimas, esta distinción resultó irrelevante en la práctica, en que continuaron sufriendo consecuencias sanitarias, económicas y sociales sin recibir compensaciones adecuadas.

Otro problema que merece atención, es que, en lugar de asumir su responsabilidad, especialmente ante las comunidades afectadas, los actores humanitarios internacionales priorizaron sus propias metas e intereses organizacionales. Como resultado, muchos proyectos no sólo incumplieron sus objetivos, sino que también generaron consecuencias adversas para la población. Ejemplos de ello fueron la decisión de USAID de ubicar el PIC en un lugar que beneficiaba los intereses estratégicos de EE.UU. (Jean-Mary Chérestal, 2015), la negativa de la ONU a financiar el Nuevo Enfoque mediante cuotas obligatorias debido a la oposición de Estados influyentes (IJDH y BAI, 2020), y la continuidad de proyectos ineficientes por parte de la Cruz Roja (Elliott y Sullivan, 2015) y USAID (GAO, 2023) para justificar el uso de fondos y mejorar su imagen institucional.

En suma, los intereses de los donantes y organizaciones implementadoras adquirieron primacía sobre las necesidades de las poblaciones afectadas. Tal inversión contradice frontalmente los principios básicos de la acción humanitaria —humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia—, transformando intervenciones supuestamente altruistas en vehículos de política exterior, expansión organizacional o posicionamiento institucional. Además, crea incentivos perversos: el éxito se mide en términos de visibilidad, captación de fondos y expansión de operaciones, más que en impactos reales sobre las condiciones de vida de los beneficiarios.

De modo similar a la expansión de la epidemia de cólera, los abusos de poder se generalizaron como consecuencia de la ausencia de rendición de cuentas. La asimetría de poder, una característica particularmente sobresaliente en un contexto de profunda desigualdad, jugó un papel central, ya que la enorme vulnerabilidad de las víctimas propició los abusos de poder (Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025). Esa vulnerabilidad se manifestaba en múltiples dimensiones interconectadas: económica (dependencia material

absoluta), política (exclusión de procesos de toma de decisiones), psicosocial (trauma post-desastre) y jurídica (imposibilidad práctica de acceder a justicia y reparaciones).

La falta de mecanismos eficaces para que las víctimas pudieran reportar instancias de abuso y violencia física, sexual y de género de manera segura y confidencial, y la gestión deficiente de las denuncias, particularmente por parte de la ONU y Oxfam, redundaron en impunidad generalizada, a cuyo amparo los abusos se multiplicaron (Hu et al., 2023; Charity Commission, 2019; Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025). Esta situación reveló una paradoja central de la asistencia humanitaria: intervenciones inicialmente diseñadas para proteger a poblaciones vulnerables pueden, en ausencia de controles adecuados, generar nuevas formas de vulnerabilidad y explotación. La compasión humanitaria, cuando no está acompañada de mecanismos de control democrático y rendición de cuentas, puede desembocar en nuevas formas de dominación.

También a la desconexión entre la ayuda brindada y las necesidades reales de las poblaciones beneficiarias subyace un problema de rendición de cuentas. En efecto, la entrega de asistencia humanitaria a menudo se basó en las necesidades de las víctimas tal como eran percibidas por actores externos más que en las experiencias e interpretaciones de las propias víctimas, las cuales fueron sistemáticamente excluidas del proceso de planificación e implementación de las acciones de asistencia humanitaria. Esta exclusión reflejó concepciones paternalistas, según las cuales las poblaciones afectadas son vistas como receptores pasivos de ayuda más que como agentes capaces de identificar sus propias necesidades y participar activamente en la búsqueda de soluciones.

La distancia entre proveedores y receptores de ayuda no fue meramente técnica, sino también epistemológica: las organizaciones humanitarias operaron desde marcos conceptuales y categorías desarrolladas en contextos muy diferentes, con limitada sensibilidad hacia cosmovisiones, prácticas culturales y estructuras sociales locales. Como resultado, numerosas intervenciones impusieron soluciones inapropiadas o incluso contraproducentes, que no solo desaprovecharon recursos escasos, sino que también pudieron desarticular mecanismos locales de resiliencia y apoyo mutuo.

Otros problemas, como la descoordinación y la mala planificación, no son directamente atribuibles a déficits de rendición de cuentas, ya que tuvieron mayor importancia otros factores tales como las dificultades en la comunicación inicial, pérdida de recursos e infraestructura, escasez de personal, falta de experiencia, subestimación de plazos y desinterés del sector privado. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas exacerbó estas deficiencias. En particular, sin sistemas efectivos para monitorear resultados, evaluar impactos y corregir cursos de acción, problemas inicialmente menores tendieron a perpetuarse y magnificarse en lugar de ser detectados y corregidos.

### **4.3. Dimensiones de la rendición de cuentas**

Como se estableció al inicio de la presente investigación, la rendición de cuentas implica una relación bidireccional entre un agente y un principal, donde el agente debe informar al

principal sobre su desempeño, el principal puede interrogar al agente y cuestionar la validez de la información y legitimidad de su conducta, y finalmente, el principal emite un juicio sobre el agente que puede traducirse en la aprobación de informes, denuncia de políticas o sanción de comportamientos. En el caso de la respuesta humanitaria al terremoto, este proceso no tuvo su debido desenlace en ninguna de las posibles dimensiones (Bovens et al., 2014).

En todos los casos se observó un enorme déficit de rendición de cuentas descendente, es decir, hacia las comunidades afectadas. A pesar del compromiso de los actores humanitarios con la AAP, no hubo mecanismos que permitieran a las comunidades cumplir con su rol como principales.

Ante la epidemia del cólera, la ONU desestimó todas las acusaciones e ignoró la evidencia de su responsabilidad, y no ofreció un recurso efectivo para que las víctimas pudieran reclamar y obtener reparaciones adecuadas (IHRC et al., 2020). Esta negativa a reconocer responsabilidad, más allá de evidencia científica, reflejó dinámicas institucionales donde la protección de la imagen y la reputación organizacional adquiere prioridad sobre la justicia y compensación para las víctimas. También dejó en evidencia una contradicción entre el rol de la ONU como promotora de derechos humanos y el blindaje legal del que goza la organización.

En cuanto a los abusos de poder, aunque la ONU creó un fondo de apoyo a las víctimas, su acceso fue extremadamente burocrático y la organización no otorgó compensaciones directas. La complejidad de los procedimientos, combinada con las limitaciones educativas y la vulnerabilidad de las víctimas, creó barreras infranqueables para la mayoría de los afectados. Además, la naturaleza misma de las violaciones —particularmente las de carácter sexual— generó estigmatización social para las víctimas, disuadiéndolas de presentar denuncias formales (Hu et al., 2023).

Asimismo, las víctimas enfrentaron trabas legales, ya que los cascos azules solo podían ser juzgados en sus países de origen. Este marco jurisdiccional, establecido para proteger a las fuerzas de paz de persecuciones políticas o judiciales arbitrarias, tuvo el efecto práctico de crear zonas de casi total impunidad ante abusos graves. La distancia geográfica, las barreras lingüísticas y culturales, y los costos asociados hacían prácticamente imposible que víctimas haitianas pudieran perseguir casos legales en países tan diversos como Sri Lanka o Uruguay. Esta fragmentación jurisdiccional se tradujo en tasas extremadamente bajas de procesamiento y condena por abusos documentados (Johnston, 2012; Hu et al., 2023; Exfuncionario de la ONU, comunicación personal, 11 de febrero de 2025).

Oxfam, por su parte, llevó a cabo una investigación interna sin involucrar a las autoridades locales ni hacer públicos los hallazgos hasta que la presión mediática lo hizo inevitable, y no dio importancia suficiente a los testimonios de las víctimas (The Times, 2018). Este manejo encubierto de las denuncias refleja una tendencia generalizada a priorizar la protección institucional por encima de la justicia para las víctimas. La preocupación por posibles daños reputacionales condujo a la organización a gestionar los abusos como problemas de relaciones públicas más que como violaciones de derechos humanos fundamentales. Cuando finalmente los casos se hicieron públicos, el escándalo resultante socavó la confianza pública no solo en Oxfam sino en el sector humanitario en general.

Tampoco hubo mecanismos de consulta previa sobre las necesidades e intereses de los destinatarios de la ayuda. Como explica Payton (comunicación personal, 09 de enero de 2025), “las familias y grupos sociales tenían que reorganizarse para satisfacer las expectativas de la gente que llegaba a Haití, en lugar de que la gente que llegaba a Haití comprendiera el contexto y creara ayuda para satisfacer ese contexto”. Esta inversión de la lógica de asistencia —donde los beneficiarios deben adaptarse a los patrones de ayuda en lugar de que la ayuda se adapte a las necesidades locales— evidenció la persistencia de enfoques verticales y centralizados, donde el conocimiento experto externo predomina sobre el saber local y contextual.

Las reformas e iniciativas implementadas por los actores humanitarios para corregir fallas —el Nuevo Enfoque (ONU, 2016) y el Fondo Fiduciario en Apoyo a las Víctimas de la Explotación y los Abusos Sexuales (Hu et al., 2023) de la ONU, las medidas de Oxfam para fortalecer la protección contra abusos (Oxfam Internacional, s.f.), y el Plan de Acción de USAID (Jean-Mary Chérestal, 2015)— fueron tardías y reactivas. No surgieron de un compromiso interno con la rendición de cuentas, sino tras la exposición pública de los casos y la condena internacional. La naturaleza reactiva de estas medidas sugiere que la preocupación central no fue necesariamente reparar el daño causado, sino mitigar el impacto de los escándalos sobre la reputación y capacidad operativa de las organizaciones involucradas.

En este sentido, la rendición de cuentas dejó de ser un principio rector para convertirse en un mecanismo instrumental destinado a mantener la legitimidad de las organizaciones. Esta instrumentalización refleja una dinámica preocupante, donde la adopción formal de principios y mecanismos de rendición de cuentas obedece más a presiones externas y necesidades de legitimación que a un compromiso genuino con la responsabilidad y transparencia. Como resultado, se generan estructuras nominales de rendición de cuentas que cumplen funciones primordialmente cosméticas, sin transformar sustancialmente las prácticas organizacionales o las relaciones de poder subyacentes.

En cuanto a la rendición de cuentas ascendente, si bien existían mecanismos formales como auditorías, evaluaciones, investigaciones e informes financieros, su aplicación no fue efectiva. Algunos actores humanitarios se negaron a participar en estos procesos, como ocurrió con la ONU y la Cruz Roja al rechazar investigaciones en las bases de la MINUSTAH (Katz, 2013) y Campeche (Elliott y Sullivan, 2015). En los casos donde sí hubo participación, aunque los reportes identificaron problemas significativos, no hubo consecuencias concretas ni medidas de seguimiento para garantizar correcciones. Esto señala una deficiencia en el rol de los principales dentro del proceso de rendición de cuentas: si bien exigen explicaciones y emiten juicios, no completan el proceso al no garantizar la implementación de cambios.

La ineffectividad de los mecanismos formales de rendición de cuentas ascendente refleja problemas estructurales más profundos. Por un lado, las organizaciones donantes tienen incentivos ambiguos para exigir rendición de cuentas rigurosa: identificar deficiencias graves en proyectos que han financiado puede dañar su propia reputación y cuestionar la efectividad de sus estrategias de asignación de recursos. Por otro lado, las complejas cadenas de implementación —donde los recursos fluyen desde donantes originales a través de múltiples intermediarios hasta llegar finalmente a los beneficiarios— tienden a diluir responsabilidades

y complicar la atribución de éxitos o fracasos a actores específicos. Finalmente, donantes y organizaciones humanitarias frecuentemente comparten objetivos e intereses institucionales, lo que puede generar dinámicas de control mutuo más laxas.

Algo similar ocurrió con la rendición de cuentas interna. Los mecanismos como autoevaluaciones, reportes e investigaciones no generaban consecuencias significativas, incluso cuando identificaban fallas graves. En algunos casos, los procesos internos fueron percibidos como insuficientes al ser expuestos públicamente. Un ejemplo es el caso de Oxfam, donde, pese a una investigación interna que concluyó con sanciones (The Times, 2018), una vez que la situación trascendió, la respuesta fue interpretada como falta de transparencia y las sanciones impuestas resultaron inadecuadas. Al igual que en la rendición de cuentas ascendente, en la interna se evidencia un mayor énfasis en su aplicación como mecanismo que en su consideración como virtud.

La limitada efectividad de la rendición de cuentas interna refleja dinámicas organizacionales donde prevalecen culturas de autoprotección institucional. Dentro de muchas organizaciones humanitarias, identificar y corregir fallas se percibe más como un riesgo reputacional que como una oportunidad de aprendizaje y mejora. Esto genera presiones para minimizar, ocultar o reinterpretar evidencias de mal funcionamiento, especialmente cuando éstas podrían afectar relaciones con donantes o autoridades.

Aunque la respuesta humanitaria al terremoto involucró a una amplia diversidad de actores operando simultáneamente, incluidos muchos adheridos a iniciativas de rendición de cuentas sistémicas, como la Humanitarian Accountability Partnership (HAP) y el IASC, la respuesta se caracterizó por la falta de colaboración y descoordinación, sin registros significativos sobre la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas horizontal (IASC, 2010). La ausencia de rendición de cuentas horizontal—entre organizaciones que operan en un mismo contexto— limita severamente las posibilidades de aprendizaje colectivo, identificación temprana de problemas comunes y desarrollo de respuestas coordinadas ante desafíos emergentes.

Esta ausencia podría explicarse porque la rendición de cuentas horizontal pudo percibirse como un aspecto implícito del trabajo humanitario, por la falta de voluntad para destinar recursos a este tipo de mecanismos, debido a la falta de coordinación entre los distintos actores, o porque estos mecanismos se implementaron sin documentación pública. Sin embargo, un factor decisivo fue probablemente la competencia entre organizaciones humanitarias por recursos, visibilidad y reconocimiento. En un contexto donde la obtención de fondos y la expansión organizacional dependen crucialmente de demostrar resultados positivos y alta eficiencia, existe un desincentivo estructural para compartir información sobre problemas o fracasos con otras organizaciones.

Nuevamente, la falta de rendición de cuentas horizontal evidenció la profunda asimetría de poder entre los actores humanitarios internacionales y los actores locales. Payton (comunicación personal, 09 de enero de 2025) señaló que, a pesar de su fragilidad, estos actores estaban dispuestos a cooperar con las organizaciones internacionales en la respuesta

humanitaria. Sin embargo, fueron marginados en la práctica, relegados a un papel secundario. En palabras de Payton:

La ONU llegó e instaló su base logística. Pero a los haitianos ni siquiera se les dejaba entrar en la base logística (...), y, especialmente inmediatamente después [del terremoto] (...), era allí donde se tomaban muchas de las decisiones. Esa podría haber sido una oportunidad para que los actores estatales haitianos ganaran influencia (Payton, comunicación personal, 09 de enero de 2025).

La segregación física de los espacios de poder, reflejo de las dinámicas neocoloniales del sector humanitario, no sólo limitó la participación efectiva de actores locales en la toma de decisiones, sino que también reforzó simbólicamente su estatus subordinado. Paradójicamente, mientras la retórica humanitaria enfatizaba el empoderamiento comunitario y el fortalecimiento de las capacidades locales, las prácticas concretas perpetuaron y profundizaron las asimetrías preexistentes.

#### **4.4. Consecuencias del déficit de rendición de cuentas**

La falta de rendición de cuentas en todas sus dimensiones no sólo exacerbó las consecuencias de la crisis, sino que también evidenció un problema estructural más profundo: la ausencia de un compromiso genuino con la ayuda humanitaria. Esto se hizo particularmente evidente en la marcada ausencia de rendición de cuentas descendente, un aspecto crítico en un contexto donde el Estado era extremadamente vulnerable.

Las consecuencias de los déficits de rendición de cuentas trascendieron ampliamente la respuesta inmediata. A nivel sistémico, reforzaron los patrones de desigualdad, exclusión y dependencia que han caracterizado históricamente las relaciones entre Haití y la comunidad internacional. A nivel institucional, debilitaron la ya frágil confianza pública en las organizaciones humanitarias, cuestionando su legitimidad como agentes de cambio positivo. A nivel individual, perpetuaron vulneraciones de derechos y profundizaron traumas psicosociales.

Los déficits de rendición de cuentas representan una violación de los principios humanitarios fundamentales como el principio de “no hacer daño”, ya que exponen a las comunidades afectadas a nuevos riesgos en lugar de protegerlas. La ausencia de mecanismos efectivos de control y supervisión facilitó prácticas negligentes o directamente abusivas que vulneraron este principio básico, transformando a ciertos actores humanitarios de potenciales protectores a perpetradores de daño.

Además, estos déficits revelaron un incumplimiento del enfoque de AAP, puesto que los actores responsables de brindar asistencia no solo fallaron en prevenir abusos y negligencias, sino que en muchos casos fueron responsables directos de perpetuarlos. El enfoque AAP, desarrollado precisamente para situar a las comunidades afectadas en el centro de los procesos humanitarios, reconociéndolas como sujetos de derechos más que como objetos de asistencia, quedó reducido en el contexto haitiano a declaraciones programáticas sin correlato operativo significativo. En la práctica, las poblaciones afectadas continuaron siendo percibidas y tratadas

como receptores pasivos de ayuda, sin voz ni capacidad de incidencia sobre decisiones que afectaban directamente sus vidas, necesidades y futuros.

Las consecuencias afectaron tanto a la comunidad haitiana como al ecosistema de la ayuda humanitaria en su conjunto. La falta de rendición de cuentas socavó la credibilidad de los actores humanitarios a nivel internacional, debilitando la confianza de la opinión pública, las organizaciones donantes y los Estados receptores. La percepción de impunidad y mala gestión generó escepticismo sobre la eficacia y ética de la ayuda humanitaria, potencialmente reduciendo el financiamiento y dificultando la movilización de recursos para futuras crisis.

Ante la limitada capacidad de las comunidades locales para exigir rendición de cuentas, es crucial destacar el papel de la sociedad civil —investigadores, periodistas y ONG— en visibilizar los problemas y presionar para que los actores humanitarios respondieran por sus acciones. Esta forma de rendición de cuentas en la que actores independientes asumen roles de monitoreo y denuncia adquirió relevancia crítica en un contexto donde las vías formales de rendición de cuentas demostraron ser inoperantes o inaccesibles para las poblaciones afectadas.

Medios como ProPublica y NPR, y periodistas e investigadores como Katz (2013), Johnston y Main (2013), y Elliott y Sullivan (2015) expusieron fallas y abusos, generando presión pública y política. Particularmente significativo fue el trabajo de Katz, quien como corresponsal de Associated Press en Haití, documentó meticulosamente tanto la devastación inicial como las problemáticas de la respuesta internacional. Este tipo de periodismo investigativo, caracterizado por inmersión prolongada en el terreno y compromiso sostenido con la temática, resultó fundamental para quebrar narrativas idealizadas sobre la respuesta humanitaria y visibilizar realidades sistemáticamente ocultadas por informes y comunicaciones oficiales.

Organizaciones como el IIDH y la BAI abogaron por los derechos de las víctimas, buscando justicia y reparación, como en el caso de la epidemia de cólera. Su trabajo combinó litigio estratégico en múltiples jurisdicciones con campañas de incidencia política a nivel internacional, utilizando innovadoramente instrumentos del derecho internacional de derechos humanos para desafiar marcos jurídicos restrictivos, particularmente las inmunidades de organizaciones internacionales. Aunque sus éxitos judiciales fueron limitados —la mayoría de las demandas contra la ONU fueron desestimadas por inmunidad—, su presión sostenida contribuyó significativamente al reconocimiento público de responsabilidad por parte de la organización y a la creación del Nuevo Enfoque para el cólera en Haití.

El rol de estos actores independientes fue clave en un contexto donde las asimetrías de poder limitaban severamente la efectividad de los mecanismos formales de rendición de cuentas.

#### **4.5. Lecciones y limitaciones**

En respuesta a las fallas en la asistencia humanitaria tras el terremoto, surgieron diversas iniciativas internacionales orientadas a mejorar la rendición de cuentas en el terreno humanitario. Estas reformas, desarrolladas por diversos actores a lo largo de la última década,

reflejan un reconocimiento institucional de los problemas identificados y un compromiso declarado con su superación. Sin embargo, como se analiza a continuación, muchas de estas iniciativas han reproducido patrones preexistentes de verticalidad, tecnocracia y distanciamiento de las realidades locales, lo que ha limitado su impacto transformador.

La HAP, que en 2015 se fusionó con People In Aid para formar la Alianza CHS, centró su informe anual de 2010 en la respuesta humanitaria en Haití, presentando una investigación basada en entrevistas a haitianos afectados y un análisis de iniciativas para mejorar futuras operaciones. HAP contribuyó al desarrollo de estándares que fortalecen la rendición de cuentas hacia las poblaciones afectadas, promoviendo un enfoque más inclusivo y participativo (HAP International, 2010).

En 2010, el Proyecto Esfera llevó a cabo una revisión exhaustiva de su Manual Esfera, que establece estándares mínimos para la ayuda humanitaria. Aunque este proceso no fue una respuesta directa a las deficiencias identificadas en la intervención en Haití, dicho caso tuvo influencia en las recomendaciones incluidas en la nueva edición del manual, publicada en 2011. Entre las mejoras introducidas, se reforzó el análisis de vulnerabilidad y contexto, y se incorporó un capítulo sobre principios de protección, estableciendo seis estándares fundamentales, incluyendo una respuesta humanitaria centrada en las personas y la transparencia. El manual fue traducido a varios idiomas, incluyendo el criollo haitiano (HAP International, 2010). La edición de 2018 también integró lecciones aprendidas de la experiencia en Haití (Sphere Association, 2018).

La evolución del Manual Esfera refleja un proceso de aprendizaje institucional significativo. Sin embargo, existe el riesgo de que estos estándares, desarrollados principalmente por expertos y organizaciones del “norte global”, reflejen y reproduzcan concepciones occidentales de la asistencia, con limitada consideración por perspectivas y prácticas locales desarrolladas en contextos específicos. La experiencia haitiana precisamente demostró que la existencia de estándares técnicos, por sofisticados que sean, resulta insuficiente sin mecanismos efectivos para garantizar su implementación en situaciones concretas, especialmente cuando existen incentivos institucionales o contextuales que presionan en el sentido contrario.

En 2011, el IASC adoptó la Agenda Transformativa para fortalecer el liderazgo, la coordinación y la rendición de cuentas en la acción humanitaria, con énfasis en la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas. Basado en las lecciones aprendidas de las respuestas a las crisis de Haití y Pakistán en 2010, el programa se centró inicialmente en contextos de desastres a gran escala con capacidades humanitarias limitadas. Los primeros resultados indicaron efectos positivos en áreas clave, mejorando el liderazgo de los coordinadores humanitarios y fortaleciendo la coordinación a nivel global (Krueger et al., 2016).

Sin embargo, una evaluación de 2016 reveló que el impacto en aspectos como el liderazgo colectivo de los equipos humanitarios nacionales, la rendición de cuentas hacia las poblaciones afectadas y la seguridad y protección fue limitado. También se identificaron avances insuficientes en la descentralización y la coordinación, y un aumento en la carga burocrática para el personal humanitario sobre el terreno (Krueger et al., 2016). Esta evolución

ilustra una tendencia recurrente en reformas humanitarias: avances significativos en dimensiones técnicas y organizacionales (como liderazgo y coordinación) que contrastan con progresos más limitados en dimensiones relacionales y políticas (como participación comunitaria y redistribución de poder decisonal). Ello evidencia, nuevamente, que las transformaciones técnicas son insuficientes cuando no abordan las asimetrías fundamentales de poder y recursos que constituyen el sustrato de los problemas de rendición de cuentas en el sector humanitario.

La ONG Active Learning Network for Accountability and Performance (ALNAP) trabajó en Haití para promover la mejora de la rendición de cuentas y la colaboración interinstitucional. Uno de sus aportes fue la difusión del ALNAP Lessons Paper on Earthquake Responses, que sintetiza aprendizajes de respuestas previas a terremotos. Además, estableció un portal de aprendizaje y rendición de cuentas sobre Haití en inglés y francés, facilitando el acceso a información crítica para los actores humanitarios. También colaboró con la Red de Evaluación del Desarrollo del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, el Grupo de Evaluación de la ONU (UNEG), y la Haiti Evaluation Task Force para evaluar y compartir las percepciones de la respuesta humanitaria (HAP International, 2010; Patrick, 2011). En los años siguientes, ALNAP ha integrado las lecciones aprendidas en Haití en sus publicaciones y recomendaciones para el sector (ALNAP, 2025).

Esta labor de sistematización y difusión de aprendizajes refleja un intento serio por transformar la experiencia haitiana en conocimiento aplicable a futuras intervenciones. Sin embargo, el sistema humanitario enfrenta desafíos significativos en sus procesos de aprendizaje organizacional, ya que exhibe dificultades para traducir aprendizajes teóricos en transformaciones prácticas. Esta brecha entre conocimiento y acción se manifestó claramente en Haití, donde numerosas problemáticas identificadas en respuestas a crisis previas reaparecieron con patrones sorprendentemente similares.

El foro independiente Red de Práctica Humanitaria (HPN) lanzó en octubre de 2010 un reportaje especial de su revista Humanitarian Exchange, centrado en las lecciones que dejó la respuesta al terremoto de Haití. Esta publicación, que incluyó contribuciones de diversos actores humanitarios, investigadores y, significativamente, representantes de organizaciones locales haitianas, fue un espacio valioso para la reflexión crítica sobre la respuesta y la identificación de áreas de mejora (HPN, 2010). Sin embargo, su impacto depende de la disposición de cada actor a incorporar sus recomendaciones, la cual puede variar ampliamente entre distintos actores y contextos operativos.

Además, diversos actores humanitarios llevaron a cabo evaluaciones internas para mejorar su respuesta ante futuras crisis. Mientras que algunas entidades, como las fuerzas militares estadounidenses y agencias de la ONU, realizaron estos procesos de manera voluntaria, otras, como Oxfam y USAID, lo hicieron en respuesta a la presión de la opinión pública o a la imposición de normativas legales. Esta diferencia en motivaciones para la autoevaluación resulta significativa para analizar sus resultados: cuando tales procesos responden primordialmente a presiones externas, tienden a enfocarse en la gestión de riesgos reputacionales más que en el aprendizaje organizacional profundo. Como consecuencia, pueden

generar ajustes superficiales dirigidos a satisfacer demandas inmediatas de rendición de cuentas, sin cuestionar premisas fundamentales o transformar culturas organizacionales problemáticas que subyacen a los déficits identificados.

Por último, es importante destacar el papel de la academia, que ha generado numerosas investigaciones a partir del caso del terremoto de Haití en 2010, con recomendaciones orientadas a mejorar la eficacia y la rendición de cuentas en el sector humanitario (ver Portilla et al., 2010; Bilham, 2010; Benjamin et al., 2011; Babcock et al., 2012; Manilla Arroyo, 2014; O'Connor et al., 2014; Ramachandran y Walz, 2015; Chynoweth et al., 2018; Lee y Bartels, 2019).

A pesar de estos avances, persisten importantes desafíos en la implementación efectiva de mecanismos de rendición de cuentas en el sector humanitario. La experiencia de Haití demuestra que no basta con establecer estándares y directrices si estos no se traducen en prácticas concretas y cambios estructurales en la forma en que se planifica, ejecuta y evalúa la ayuda humanitaria. Es necesario un compromiso genuino con la rendición de cuentas en todas sus dimensiones, especialmente la descendente, y un esfuerzo sostenido para reducir las asimetrías de poder que caracterizan la relación entre actores humanitarios internacionales y comunidades afectadas.

En última instancia, la falta de rendición de cuentas en la respuesta humanitaria a Haití no fue simplemente una deficiencia, sino una manifestación de indiferencia estructural hacia los derechos y la dignidad de las víctimas. Sin mecanismos efectivos para exigir responsabilidad y garantizar justicia, los errores y abusos no solo quedaron impunes, sino que también sentaron un peligroso precedente para futuras intervenciones humanitarias.

## 5. Conclusión

A lo largo de la presente investigación, se examinó la respuesta humanitaria de los actores internacionales al terremoto de Haití en 2010 para identificar cuáles de los problemas de las operaciones humanitarias se vincularon a deficiencias en los procesos de rendición de cuentas. Como punto de partida, se planteó como pregunta central de investigación: ¿Qué revela la respuesta humanitaria al terremoto de Haití en 2010 sobre la importancia de la rendición de cuentas en contextos de emergencia? En respuesta a esta pregunta, se sostuvo que una parte significativa de los problemas recurrentes en las operaciones de ayuda humanitaria radica en deficiencias en los mecanismos de rendición de cuentas. En este sentido, el desarrollo y fortalecimiento de estos mecanismos podría contribuir a mejorar la efectividad, transparencia y eficiencia de la ayuda humanitaria.

Al realizar la investigación del caso se encontró que la respuesta humanitaria al terremoto de Haití estuvo marcada por una serie de problemas: la introducción de cólera que generó una epidemia que terminó en otras tragedias; abusos de poder, incluyendo violencia física, sexual y de género; el incumplimiento de los objetivos establecidos en las operaciones humanitarias y los programas y proyectos realizados; problemas de planificación asociados a una falta de personal capacitado, deficiencias en el liderazgo, ausencia de medidas para garantizar recursos adecuados, alta rotación de personal y una subestimación de los tiempos necesarios; una notable disparidad entre la necesidad de las comunidades afectadas y la ayuda efectivamente entregada; y una descoordinación evidente de los actores humanitarios, tanto interna como de forma externa con otros actores del sector y otras partes de interés como el Estado haitiano y el sector privado. Dentro de los problemas identificados, se pudo establecer que cuatro de ellos —la epidemia de cólera, los abusos de poder, el incumplimiento de objetivos, y la disparidad entre la necesidad y la ayuda humanitaria— fueron una manifestación de déficits de rendición de cuentas. El análisis de fuentes primarias y secundarias permitió reconstruir la cadena de fallos en los mecanismos de rendición de cuentas, desde la evasión de responsabilidades legales hasta la deficiente coordinación, lo que en conjunto comprometió gravemente la efectividad de la respuesta.

El caso haitiano evidencia que la ineficacia de la respuesta humanitaria se vincula directamente a déficits de rendición de cuentas en sus múltiples dimensiones. La rendición de cuentas ascendente, centrada en la relación entre los actores humanitarios y, por un lado, los donantes y, por el otro, el Estado como órgano regulador, fue deficiente. No garantizó el uso adecuado de los recursos ni la transparencia en la gestión de la crisis. Un ejemplo claro fue la gestión de la epidemia de cólera: a pesar de la creciente evidencia que señalaba las deficientes condiciones sanitarias en las bases de la MINUSTAH, la ONU negó sistemáticamente su responsabilidad y utilizó su inmunidad legal para evadir cualquier obligación jurídica o financiera. Este caso demuestra cómo el énfasis en satisfacer las exigencias de los donantes y proteger la imagen institucional generó una grave brecha en la capacidad de fiscalización y corrección de errores. La fragilidad del Estado y el precario entorno institucional resultaron en mecanismos de control locales insuficientes para supervisar las acciones de los organismos internacionales.

La rendición de cuentas descendente, que debería garantizar que las comunidades afectadas puedan exigir respuestas, reparaciones y participar activamente en las operaciones humanitarias, estuvo particularmente ausente. En primer lugar, la ausencia de mecanismos efectivos para que las víctimas demandaran justicia —como lo evidencia la negativa de la ONU a establecer una comisión de reclamaciones tras la epidemia de cólera— no sólo profundizó la brecha entre la ayuda prometida y la efectivamente entregada, sino que también debilitó la confianza en el sistema de asistencia internacional y reforzó una dinámica de intervención que no priorizó la reparación del daño ni los derechos de las víctimas. En segundo lugar, la exclusión de las poblaciones afectadas en la planificación e implementación de proyectos humanitarios —como se observó en las respuestas de emergencia de las fuerzas militares estadounidenses y las agencias de la ONU, y en diversas iniciativas de USAID y la Cruz Roja— las marginó de los procesos de toma de decisiones, lo que resultó en una respuesta desarticulada entre las necesidades y el contexto local.

Paralelamente, la ausencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas horizontal e interna a las organizaciones involucradas contribuyó a la falta de supervisión efectiva. La escasa coordinación entre agencias y la externalización de responsabilidades dificultaron la implementación de procesos de mejora continua y la prevención de malas prácticas. Esta debilidad estructural permitió que los fallos operativos y los abusos de poder se perpetuaran. La mayor parte de los actores involucrados terminaron pensando a la rendición de cuentas como un mero requisito burocrático para cumplir con las exigencias de los donantes y la opinión pública, desvirtuando su potencial para responder genuinamente a las necesidades y derechos de las comunidades afectadas.

Las causas estructurales de estos déficits pueden atribuirse, en primer lugar, a las profundas asimetrías de poder que caracterizan al sistema humanitario global. La preponderancia de la rendición de cuentas ascendente refleja la influencia decisiva de los donantes en el diseño y ejecución de la asistencia. Estos actores imponen estrictos requisitos de transparencia y control financiero, priorizando la eficiencia en la utilización de recursos, lo que inevitablemente quita prioridad a la rendición de cuentas descendente. Este desequilibrio reproduce una lógica en la cual las poblaciones beneficiarias, aunque destinatarias finales de la ayuda, quedan relegadas a un papel pasivo, sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan directamente su bienestar.

Existe, además, una tensión inherente entre la rendición de cuentas concebida como un mecanismo formal y la rendición de cuentas entendida como una virtud ética. La dimensión formal se materializa en informes, auditorías y evaluaciones, instrumentos esenciales para garantizar la transparencia. Sin embargo, estos mecanismos, al centrarse exclusivamente en obligaciones legales y financieras, frecuentemente ignoran las dimensiones éticas y morales que deberían fundamentar toda acción humanitaria. Así, la rendición de cuentas se reduce a un trámite administrativo incapaz de abordar cuestiones fundamentales de justicia y reparación.

La debilidad estructural del Estado haitiano exacerbó significativamente estos déficits. La fragilidad institucional y la limitada capacidad de control impidieron que el gobierno ejerciera adecuadamente su rol regulatorio. La extrema dependencia de Haití respecto de la

ayuda externa creó un entorno donde las organizaciones internacionales operaron con un alto grado de autonomía, sin sujeción a sistemas locales de rendición de cuentas que garantizaran una respuesta coherente y ajustada a las necesidades reales de la población. Esta situación reforzó la asimetría de poder, perpetuando un ciclo donde las comunidades carecían de capacidad para exigir responsabilidades o reparaciones por los daños sufridos.

Los déficits de rendición de cuentas tuvieron profundas implicaciones para la legitimidad del sector humanitario. La rendición de cuentas hacia las comunidades afectadas es fundamental para legitimar la labor humanitaria que, aunque realizada con buenas intenciones, carece de legitimidad jurídica o democrática intrínseca. Incluir a las comunidades en los procesos decisorios no solo refuerza su derecho a participar en asuntos que les afectan directamente, sino que resulta crucial para garantizar la eficacia de la asistencia. En Haití, esta necesidad era particularmente apremiante dada la fragilidad institucional del país y las asimetrías de poder que se intensificaron tras el terremoto. Sin embargo, en lugar de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, la respuesta humanitaria se caracterizó por su ausencia, reflejando una concepción de la rendición de cuentas como un mero requisito formal.

Esta carencia amplificó las dinámicas de poder desiguales, y como consecuencia los actores humanitarios asumieron roles en competencia con el gobierno haitiano, tomando decisiones y ejecutando proyectos sin consulta ni participación comunitaria. En vez de abordar los factores sociopolíticos que perpetuaban la vulnerabilidad, ello reforzó estructuras de dependencia y exclusión. Lejos de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza, la intervención humanitaria exacerbó la crisis política en Haití, priorizando agendas externas sobre necesidades y aspiraciones nacionales.

El impacto de estos déficits trascendió el contexto haitiano, afectando la legitimidad global del sector humanitario. Los problemas en la respuesta desencadenaron escándalos mediáticos que alimentaron una crisis de confianza y desprestigiaron a las organizaciones humanitarias. La percepción pública negativa no solo dañó la reputación de actores específicos, sino que provocó reducciones en el financiamiento, cancelaciones de programas y disminución de oportunidades colaborativas con gobiernos y donantes. Mientras que la sólida rendición de cuentas fortalece la legitimidad y sostenibilidad del sector, su ausencia, aun cuando afecta a unos pocos actores, puede comprometer la credibilidad de toda la comunidad humanitaria.

Cabe reconocer las iniciativas de fortalecimiento de la rendición de cuentas surgidas tras la experiencia haitiana, así como sus limitaciones. La mayoría de ellas, como el Proyecto Esfera y ALNAP, consisten en mecanismos de rendición de cuentas horizontal de adhesión voluntaria, lo que condiciona su efectividad al compromiso individual de los actores humanitarios. Las recomendaciones del IASC para optimizar futuras intervenciones no generaron avances sustanciales en materia de rendición de cuentas. De modo similar, las autoevaluaciones realizadas por actores como las fuerzas militares estadounidenses mostraron mejoras en la efectividad operativa, pero no se tradujeron en mayor inclusión o participación comunitaria.

Los avances más significativos han surgido de iniciativas sujetas a marcos de obligatoriedad, sea por regulación legal o presión externa. La aprobación del APHA en EE.UU. introdujo nuevas exigencias para la rendición de cuentas de USAID, mientras que la presión de la opinión pública impulsó reformas en organizaciones como la ONU y Oxfam tras escándalos que afectaron su reputación. En suma, aunque los compromisos voluntarios pueden ser importantes, los progresos más sustanciales tienden a materializarse cuando existen mecanismos coercitivos o incentivos externos que obligan a los actores humanitarios a responder en forma efectiva.

En el ámbito humanitario es imperativo fortalecer la rendición de cuentas entendida como una virtud ética y no únicamente como un mecanismo formal, priorizando la inclusión y la participación comunitaria. Aunque tanto la academia como el sector humanitario reconocen teóricamente su importancia, en la práctica su implementación sigue siendo limitada. El caso haitiano evidencia las consecuencias tangibles de esta deficiencia, tanto en términos de efectividad como de legitimidad. La falta de mecanismos adecuados contribuyó a problemas a gran escala, socavando la confianza pública y generando impactos negativos duraderos.

Retomando nuestra pregunta inicial, es posible afirmar que muchos de los problemas recurrentes en las operaciones de ayuda humanitaria en Haití tras el terremoto en 2010 efectivamente radicarón en deficiencias en los mecanismos y prácticas de rendición de cuentas. La evidencia analizada demuestra que fortalecer estos mecanismos mejoraría sustancialmente la efectividad, transparencia y eficiencia de la asistencia. El caso haitiano reveló claramente que la rendición de cuentas no constituye un aspecto secundario, sino un elemento central que determina tanto la calidad de la respuesta como su legitimidad ante las comunidades afectadas y ante el público global en general.

Este trabajo abre varias líneas para futuras investigaciones. Sería valioso explorar cómo se manifiestan los déficits de rendición de cuentas en otros contextos, particularmente en escenarios de conflicto armado, donde cabe esperar que las dinámicas de poder y restricciones operativas difieran significativamente. También sería importante investigar la implementación efectiva de las recomendaciones surgidas tras la experiencia haitiana, examinando casos concretos que revelen obstáculos prácticos y factores de éxito no evidentes en el plano teórico. Igualmente pertinente sería analizar cómo los factores organizacionales y culturales influyen en la adopción de mecanismos de rendición de cuentas, comprendiendo cómo la resistencia al cambio, las dinámicas internas y las prioridades institucionales afectan la traducción de compromisos formales en prácticas efectivas. Finalmente, evaluar si las intervenciones humanitarias posteriores en Haití han mostrado mejoras en términos de rendición de cuentas permitiría determinar si las lecciones aprendidas han sido efectivamente incorporadas.

La rendición de cuentas debe entenderse no como mero requisito formal o exigencia impuesta por los donantes, sino como principio ético fundamental que orienta toda acción humanitaria. En Haití, los déficits en esta materia no solamente comprometieron la efectividad de la respuesta, sino que también perpetuaron dinámicas de poder desiguales y minaron la confianza de la comunidad local y eventualmente de la comunidad internacional. Avanzar hacia un sistema humanitario más responsable requiere reconocer que la rendición de cuentas

constituye tanto un medio para mejorar la calidad de la ayuda como un fin en sí mismo, intrínsecamente vinculado al respeto de la dignidad y los derechos de las personas afectadas. Esto implica trascender enfoques meramente técnicos para adoptar una concepción de la rendición de cuentas como compromiso ético con la justicia, la participación y la reparación. La experiencia haitiana enseña que, en contextos de fragilidad estatal y pronunciadas asimetrías de poder, la responsabilidad de rendir cuentas adquiere una relevancia aún mayor. Solo mediante mecanismos sólidos y multidimensionales de rendición de cuentas será posible construir un sistema de ayuda humanitaria que responda genuinamente a las necesidades comunitarias, respete la autonomía local y contribuya a procesos de recuperación equitativos y sostenibles en el largo plazo.

## Bibliografía

- Abbott, E. (2011). *Haiti: A shattered nation*. Overlook Duckworth.
- Abrisketa, J., & Pérez Armiño, K. (2000). *Diccionario de Acción Humanitaria*. Acción humanitaria: concepto y evolución. <https://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1.html>
- Ackerman, J. (2004). Co-Governance for Accountability: Beyond «Exit» and «Voice». *World Development*, 32(3), 447-463.
- ACNUR. (2020). *Guía Operativa sobre Rendición de Cuentas a las Personas Afectadas (APP)*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-10/aap-operational-guidance-spanish.pdf>
- ActionAid USA. (s. f.). *Land Grabbing in Haiti: The Caracol Industrial Park*. ActionAid USA. Recuperado 1 de febrero de 2025, de <https://www.actionaidusa.org/work/land-grabbing-in-haiti-the-caracol-industrial-park/>
- Adaptado de “Derivative: Haiti Quake Map,” por CIA, 2010 ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiti\\_map.png#/media/File:Haiti\\_Quake\\_Map.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiti_map.png#/media/File:Haiti_Quake_Map.png)). Obra de Dominio Público.
- Aín, G. (2009). Intervención internacional. Haití: Receta rápida, fracaso anticipado. *Relaciones Internacionales*, 10, 1-36. <https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2009.10.001>
- Al Jazeera. (2010). UN investigates Haiti outbreak. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2010/10/28/un-investigates-haiti-outbreak/>
- Al Jazeera. (2012). UN Pakistani troops convicted in Haiti trial. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2012/3/14/un-pakistani-troops-convicted-in-haiti-trial>
- ALBA-TCP. (s. f.). *Mecanismo de trabajo ALBA - Haití*. ALBA-TCP. Recuperado 1 de febrero de 2025, de <https://www.albatcp.org/acta/mecanismo-de-trabajo-alba-haiti/>
- ALNAP. (2025). *Humanitarian resources*. [https://alnap.org/help-library/resources/?start=2010&end=2025&operator=or&list\\_order=relevance&q=haiti#listing](https://alnap.org/help-library/resources/?start=2010&end=2025&operator=or&list_order=relevance&q=haiti#listing)
- Alonso Berrio, M. (2003). Los Estados Fallidos. *Cuadernos de estrategia*, 120, 199-227.
- American Red Cross. (2012). *Programa LAMIKA*. [https://embed-documentcloud-org.translate.google.com/documents/1690716-lamika-factsheet-from-red-cross-website/?embed=1&x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=es&x\\_tr\\_hl=es&x\\_tr\\_pto=tc](https://embed-documentcloud-org.translate.google.com/documents/1690716-lamika-factsheet-from-red-cross-website/?embed=1&x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)
- American Red Cross. (2015a). *American Red Cross Responds to Latest ProPublica and NPR Coverage*. <https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/press-release/american-red-cross-responds-to-latest-propublica-and-npr-coverag.html>
- American Red Cross. (2015b). *Haiti Five Year Update*. <https://www.documentcloud.org/documents/1568746-haiti-five-year-update/?mode=document#document/p1/a210740>

- Amnesty International. (2015). *Haiti: Five years on, no justice for the victims of the cholera epidemic*. <https://www.amnesty.org/en/documents/amr36/2652/2015/en/>
- Anderson, M. B. (1996). *Do No Harm: Supporting Local Capacities for Peace Through Aid : Collaborative for Development Action, Local Capacities for Peace Project*. Local Capacities for Peace Project.
- Anderson, M., Becknell, K., & Taliano, J. (2018). History of Humanitarian Emergencies. En D. Townes (Ed.), *Health in Humanitarian Emergencies* (1.<sup>a</sup> ed., pp. 9-24). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107477261.003>
- Anstorp, H. B., & Horst, C. (2021). Broadening the Concept of Humanitarian Accountability. *Peace Research Institute Oslo (PRIO)*. <https://www.prio.org/publications/12760>
- AP. (2010). Anti-UN protests spread in cholera-struck Haiti. *France 24*. <https://www.france24.com/en/20101116-anti-un-protests-spread-cholera-struck-haiti-nepalese-peacekeepers-earthquake-disease-violence>
- Arcos González, P., & Gan, R. K. (2024). The Evolution of Humanitarian Aid in Disasters: Ethical Implications and Future Challenges. *Philosophies*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/philosophies9030062>
- Babcock, C., Theodosis, C., Bills, C., Kim, J., Kinet, M., Turner, M., Millis, M., Olopade, O., & Olopade, C. (2012). The Academic Health Center in Complex Humanitarian Emergencies: Lessons Learned From the 2010 Haiti Earthquake. *Academic Medicine*, 87(11), 1609-1615. <https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e31826db6a2>
- Baranda, E., & Büchner, I. (2019). *Dynamic Accountability: Changing approaches to CSO accountability*. Accountable Now. [https://www.csostandard.org/wp-content/uploads/2019/09/Dynamic-Accountability\\_Accountable-Now.pdf](https://www.csostandard.org/wp-content/uploads/2019/09/Dynamic-Accountability_Accountable-Now.pdf)
- Barnett, M. (2011). *Empire of Humanity: A History of Humanitarianism*. Cornell University Press. <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt7z8ns>
- Barnett, M. N., & Weiss, T. G. (Eds.). (2008). *Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics*. Cornell University Press.
- Barreto, J. C. (2021). Emergencia Humanitaria Compleja, en la Universidad Central de Venezuela. *Universidad Central de Venezuela*. <http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/21022/1/Emergencia%20Humanitaria%20Compleja-UCV%20.pdf>
- Bartels, S. A., Fraulin, G., Etienne, S., Wisner, S. C., & Lee, S. (2022). Cholera in the Time of MINUSTAH: Experiences of Community Members Affected by Cholera in Haiti. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 4974. <https://doi.org/10.3390/ijerph19094974>
- BBC Mundo. (2018). El escándalo que salpica a Oxfam por las «fiestas con prostitutas» de sus altos cargos en Haití tras el terremoto de 2010. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43010118>

- BBC News. (2010a). Haiti cholera outbreak response «inadequate», says MSF. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-11802488>
- BBC News. (2010b). Las catástrofes se repiten en Haití. [https://www.bbc.com/mundo/america\\_latina/2010/01/100114\\_desastres\\_haiti\\_mj](https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/01/100114_desastres_haiti_mj)
- Benjamin, E., Bassily-Marcus, A. M., Babu, E., Silver, L., & Martin, M. L. (2011). Principles and Practice of Disaster Relief: Lessons From Haiti. *Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of Translational and Personalized Medicine*, 78(3), 306-318. <https://doi.org/10.1002/msj.20251>
- Bhattacharjee, A., & Lossio, R. (2011). *Evaluation of OCHA Response to the Haiti Earthquake*. <https://reliefweb.int/report/haiti/evaluation-ocha-response-haiti-earthquake>
- Bilham, R. (2010). Lessons from the Haiti earthquake. *Nature*, 463(7283), 878-879. <https://doi.org/10.1038/463878a>
- Biquet, J.-M. (2013). Haiti: Between Emergency and Reconstruction: An inadequate response. *Revue internationale de politique de développement*, 4(3). <https://doi.org/10.4000/poldev.1600>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946-967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. (2014). Public Accountability. En M. Bovens, R. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Accountability* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0012>
- Buchanan, R. B., Schfürmann, P., & Wolosiuk, R. A. (1976). Appearance of sedoheptulose 1,7-diphosphatase activity on conversion of chloroplast fructose 1,6-diphosphatase from dimer form to monomer form. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 69(4), 970-978. [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(76\)90468-x](https://doi.org/10.1016/0006-291x(76)90468-x)
- Buncombe, A. (2005). Peacekeepers accused after killings in Haiti. *Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/peacekeepers-accused-after-killings-in-haiti-302259.html>
- Calatrava, A., & Durán Cenit, M. (2011). La compleja construcción del estado en el siglo XXI: el caso de los estados fallidos. En R. Vázquez García, *Teorías actuales sobre el Estado contemporáneo* (pp. 143-163). Universidad de Granada.
- Call, C. T. (2008). The Fallacy of the 'Failed State'. *Third World Quarterly*, 29(8), 1491-1507. <https://doi.org/10.1080/01436590802544207>
- Caribank. (2012). *Statement on Haiti*. <https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/statement-haiti>

- Cecchine, G., Morgan, F. E., Wermuth, M. A., Jackson, T., Schaefer, A. G., & Stafford, M. (2013). *The U.S. military response to the 2010 Haiti earthquake: Considerations for Army leaders*. RAND.
- Chan, R., Johnson, T., Krishnaswami, C., Olikier-Friedland, S., Perez Carballo, C., & Association Haïtienne de Droit de L'Environnement. (2013). *Peacekeeping without Accountability: The United Nations' Responsibility for the Haitian Cholera Epidemic*. Transnational Development Clinic, Global Health Justice Partnership (GHJP), L'Association Haïtienne de Droit de l'Environnement (AHDEN). [https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Clinics/Haiti\\_TDC\\_Final\\_Report.pdf](https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Clinics/Haiti_TDC_Final_Report.pdf)
- Chandler, D. (2004). The responsibility to protect? Imposing the 'Liberal Peace'. *International Peacekeeping*, 11(1), 59-81. <https://doi.org/10.1080/1353331042000228454>
- Charity Commission. (2019). *Charity Inquiry: Oxfam GB* (p. 6). <https://www.gov.uk/government/publications/charity-inquiry-oxfam-gb>
- Christensen, R. A., & Ebrahim, A. (2006). How does accountability affect mission? The case of a nonprofit serving immigrants and refugees. *Nonprofit Management and Leadership*, 17(2), 195-209. <https://doi.org/10.1002/nml.143>
- CHS. (2024). *La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas*. [https://www.corehumanitarianstandard.org/\\_files/ugd/e57c40\\_316104ae80a84456b550566492bde444.pdf](https://www.corehumanitarianstandard.org/_files/ugd/e57c40_316104ae80a84456b550566492bde444.pdf)
- Chuck Grassley. (2016). *Grassley Releases Memo on Red Cross' Haiti Earthquake Relief Response, Finds Red Cross Does Not Know How Much Each Project Cost, Spent Significant Amount of Donor Funds on Program Management, Other Internal Expenses*. <https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/grassley-releases-memo-red-cross-haiti-earthquake-relief-response-finds-red>
- Chynoweth, S. K., Zwi, A. B., & Whelan, A. K. (2018). Socializing accountability in humanitarian settings: A proposed framework. *World Development*, 109, 149-162. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.04.012>
- CICR. (2019). *Accountability to Affected People Institutional Framework*. <https://shop.icrc.org/accountability-to-affected-people-institutional-framework-pdf-es.html>
- Cockayne, J. (2016). *Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime*. Oxford University Press.
- Congreso de los Estados Unidos. (2014). *Assessing Progress in Haiti Act of 2014* (No. S.1104). Senate - Foreign Relations. <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1104>
- Congress of the United States. (2016). *Haiti Cholera*. [https://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2016/06/06\\_29\\_16-Kerry-Haiti-Cholera-Letter-Final.pdf](https://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2016/06/06_29_16-Kerry-Haiti-Cholera-Letter-Final.pdf)

- Consejo de Seguridad de la ONU. (2004). *Resolución 1542 (2004), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4961ª sesión, celebrada el 30 de abril de 2004*. Recuperado 1 de febrero de 2025, de <https://www.refworld.org/es/leg/resol/csonu/2004/es/60469>
- Consejo de Seguridad de la ONU. (2010). *Resolución 1908 (2010)*. <https://digitallibrary.un.org/record/675259?ln=en>
- Consejo de Seguridad de la ONU. (2011). *Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití*. ONU. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/480/04/pdf/n1148004.pdf>
- Convención sobre los Privilegios e Inmунidades de la ONU. (1946). <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/undp-uy-convencion-privilegios-inmунidades-nnuu.pdf>
- Cornwall, A., Lucas, H., & Pasteur, K. (2000). Introduction: Accountability through Participation: Developing Workable Partnership Models in the Health Sector. *IDS Bulletin*, 31(1), 1-13. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2000.mp31001001.x>
- Correa Da Silva, W. (2020). El Humanitarismo en Tiempos de Emergencias Complejas. *Araucaria*, 44, 125-154. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2020.i44.06>
- Cotrino, N. (2023). “Viviendo una pesadilla”. *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/es/report/2023/08/14/viviendo-una-pesadilla/haiti-necesita-una-respuesta-urgente-y-basada-en-los>
- Cotrino, N. (2024). *Children Are Among the Hardest Hit by Haiti’s Violence: Four Young People Share Their Stories*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2024/06/05/children-are-among-hardest-hit-haitis-violence>
- Cotrino, N., & Sawyer, I. (2024, septiembre 23). World Leaders Should Stand up for Haiti. *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/news/2024/09/23/world-leaders-should-stand-haiti>
- Couceiro Arroyo, E. (2005). Haití: La MINUSTAH, un mandato fuerte, una interpretación frustrante. *Papeles de cuestiones internacionales*, 92, 41-48.
- Crack, A. (2019). NGO accountability. En *Routledge Handbook of NGOs and International Relations*. Routledge.
- Crack, A. M. (2013). INGO Accountability Deficits: The Imperatives for Further Reform. *Globalizations*, 10(2), 293-308. <https://doi.org/10.1080/14747731.2013.786253>
- Cravioto, Alejandro, Lanata, Claudio, Lantagne, D., & Nair, B. (2011). *Final Report of the Independent Panel of Experts on the Cholera Outbreak in Haiti*. <https://reliefweb.int/report/haiti/final-report-independent-panel-experts-cholera-outbreak-haiti>
- Crisis Group. (2022). *Haiti’s Last Resort: Gangs and the Prospect of Foreign Intervention*. 48. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/haiti/b048-haitis-last-resort-gangs-and-prospect-foreign-intervention>

- Csáky, C. (2008). No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers. *Save the Children*. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/no-one-turn-under-reporting-child-sexual-exploitation-and-abuse-aid-workers-and-peacekeepers/>
- Curto Correo, R. (2022). Estado fallido y regímenes personalistas: El caso de Haití. *Revista Sociedad*, 45. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/8131>
- Darcy, J., Alexander, J., & Kiani, M. (2013). *Humanitarian Accountability Report*. HAP International. <https://d1h79zlgfht2zs.cloudfront.net/uploads/2021/02/2013HAR.pdf>
- Davey, E., Borton, J., & Foley, M. (2013). *A history of the humanitarian system: Western origins and foundations*. ODI: Think Change. <https://odi.org/en/publications/a-history-of-the-humanitarian-system-western-origins-and-foundations/>
- Davis, A. (2007). *Concerning accountability of humanitarian action*. Humanitarian Practice Network. <https://odihpn.org/publication/concerning-accountability-of-humanitarian-action/>
- Davis, C. (2022). Guided by Experience: A Comparative Analysis of the U.S. Military Responses to Natural Disasters in Haiti (2010 and 2021). *Journal of Advanced Military Studies*, 13(1), 179-191. <https://doi.org/10.21140/mcu.20221301009>
- Dawson, S. (2015). Red Cross defends Haiti aid work amid expose it only built six houses. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/world/red-cross-defends-haiti-aid-work-amid-expose-it-only-built-six-houses-idUSKBN0OL170/>
- De Waal, A. (1997). *Famine Crimes: Politics & the Disaster Relief Industry in Africa*. James Currey Ltd. <https://books.google.com.uy/books?id=IwZ1Xb-w45oC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Democracy Now! (2010a). Journalist Kim Ives on How Western Domination Has Undermined Haiti's Ability to Recover from Natural Devastation. [http://www.democracynow.org/2010/1/20/journalist\\_kim\\_ives\\_on\\_how\\_decades](http://www.democracynow.org/2010/1/20/journalist_kim_ives_on_how_decades)
- Democracy Now! (2010b). With Foreign Aid Still at a Trickle, Devastated Port-au-Prince General Hospital Struggles to Meet Overwhelming Need. [http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated\\_port\\_au\\_prince\\_hospital\\_struggles](http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles)
- Derby, R. L. H., & Turits, R. (1993). Historias de Terror y Los Terrores de La Historia: La Masacre Haitiana de 1937 en la República Dominicana. *Estudios Sociales*, 92, 65-76.
- DesRoches, R., Comerio, M., Eberhard, M., Mooney, W., & Rix, G. J. (2011). Overview of the 2010 Haiti Earthquake. *Earthquake Spectra*, 27(1\_suppl1), 1-21. <https://doi.org/10.1193/1.3630129>
- Desvarieux, J. (2010). At the Heart of Haiti's Cholera Riots, Anger at the U.N. *TIME*. <https://time.com/archive/6951502/at-the-heart-of-haitis-cholera-riots-anger-at-the-u-n/>
- DiOrío, D. R. (2010). *Operation Unified Response – Haiti Earthquake 2010*. Joint Forces Staff College.

[https://jpsc.ndu.edu/portals/72/documents/jc2ios/additional\\_reading/4a\\_haiti\\_hadr\\_case\\_study\\_revnov10.pdf](https://jpsc.ndu.edu/portals/72/documents/jc2ios/additional_reading/4a_haiti_hadr_case_study_revnov10.pdf)

- Disasters Emergency Committee. (s. f.). *2010 Haiti Earthquake Facts and Figures*. Recuperado 2 de febrero de 2025, de <https://www.dec.org.uk/article/2010-haiti-earthquake-facts-and-figures>
- Dodds, P. (2017, abril 12). *AP Exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests*. AP News. <https://apnews.com/article/africa-arrests-united-nations-only-on-ap-e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1>
- Doherty, J. (s. f.). *From tick box to turning point: Getting accountability right for improved humanitarian action*. ODI/ALNAP. <https://alnap.cdn.ngo/media/documents/AAP-ALNAP-2023-full-paper.pdf>
- Duffield, M. R. (2001). *Global governance and the new wars: The merging of development and security*. Zed Books.
- Durán Vargas, L. R. (2010). Terremoto en Haití: Las causas persistentes de un desastre que no ha terminado. *Nueva Sociedad*. <https://nuso.org/articulo/terremoto-en-haiti-las-causas-persistentes-de-un-desastre-que-no-ha-terminado/>
- Ebrahim, A. (2003). Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813-829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- ECHO. (2015, enero 8). *Five years on from the Haiti earthquake: The EU's response*. <https://reliefweb.int/report/haiti/five-years-haiti-earthquake-eu-s-response>
- Edwards, M., & Hulme, D. (1995). NGO performance and accountability in the post-cold war world. *Journal of International Development*, 7(6), 849-856. <https://doi.org/10.1002/jid.3380070604>
- Egeland, J. (2005). *Humanitarian accountability: Putting principles into practice*. Humanitarian Practice Network. <https://odihpn.org/publication/humanitarian-accountability-putting-principles-into-practice/>
- Elks, S. (2019). Haiti government demands justice for women and girls abused by U.N. peacekeepers. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/world/haiti-government-demands-justice-for-women-and-girls-abused-by-u-n-peacekeepers-idUSL8N28T5LH/>
- El Mundo. (2019). Un estudio cifra en 2.000 las mujeres víctimas de abusos sexuales en Haití por parte de cascos azules de la ONU. <https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/19/5dfb28d9fdddf565e8b45a7.html>
- Elliott, J. (2015a). *Gail McGovern and David Meltzer Emails on American Red Cross' Haiti Program*. DocumentCloud. <https://www.documentcloud.org/documents/2081190-gail-mcgovern-and-david-meltzer-emails-on/?embed=1&mode=document>
- Elliott, J. (2015b). *Red Cross Haiti Program Director Judith St Fort Memo—May 2011*. DocumentCloud. <https://embed.documentcloud.org/documents/2081560-red-cross-haiti-program-director-judith-st-fort/?embed=1>

- Elliott, J. (2015c). Confidential Documents: Red Cross Itself May Not Know How Millions Donated for Haiti Were Spent. *ProPublica*. <https://www.propublica.org/article/confidential-documents-red-cross-millions-donated-haiti>
- Elliott, J., & Sullivan, L. (2015). How the Red Cross Raised Half a Billion Dollars for Haiti -and Built Six Homes. *ProPublica*. <https://www.propublica.org/article/how-the-red-cross-raised-half-a-billion-dollars-for-haiti-and-built-6-homes>
- Eppinger, M., Pearson, T., Koenig, S. S. K., Pearson, O., Hicks, N., Agrawal, S., Sanjar, F., Galens, K., Daugherty, S., Crabtree, J., Hendriksen, R. S., Price, L. B., Upadhyay, B. P., Shakya, G., Fraser, C. M., Ravel, J., & Keim, P. S. (2014). Genomic Epidemiology of the Haitian Cholera Outbreak: A Single Introduction Followed by Rapid, Extensive, and Continued Spread Characterized the Onset of the Epidemic. *mBio*, 5(6), e01721-14. <https://doi.org/10.1128/mBio.01721-14>
- Farha, L., Gallón, G., Pūras, D., & de Albuquerque, C. (2014). *Mandates of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context; the Independent Expert on the situation of human rights in Haiti; the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health; and the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation.*
- Feldmann, A., & Montes, J. E. (2008). Haití: Tribulaciones de un Estado colapsado. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 28(1), 245-264. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2008000100012>
- Feng, N. C., Neely, D. G., & Slatten, L. A. D. (2016). Accountability Standards for Nonprofit Organizations: Do Organizations Benefit from Certification Programs? *International Journal of Public Administration*, 39(6), 470-479. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1023444>
- Ferris, E., & Ferro-Ribeiro, S. (2012). Protecting people in cities: The disturbing case of Haiti. *Brookings-Bern Project on Internal Displacement*. <https://www.refworld.org/reference/countryrep/brookings/2012/en/85487>
- Fonseca, M. (2017). Críticas a la Colonialidad del Poder: Revisitando la crisis política haitiana de 1991-1994. *Foro Internacional*, 49-88. <https://doi.org/10.24201/fi.v58i1.2484>
- Fox, F. (2001). New Humanitarianism: Does It Provide a Moral Banner for the 21st Century? *Disasters*, 25(4), 275-289. <https://doi.org/10.1111/1467-7717.00178>
- Fox, J. (2007). 2 Civil Society and Accountability Politics. En J. A. Fox (Ed.), *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199208852.003.0002>
- Frantz, C. (2011). The “Enforcers”: MINUSTAH and the Culture of Violence in Port-au-Prince. *Council on Hemispheric Affairs*. [https://coha.org/the-enforcers-minustah-and-the-culture-of-violence-in-port-au-prince/#\\_ftn13](https://coha.org/the-enforcers-minustah-and-the-culture-of-violence-in-port-au-prince/#_ftn13)

- Fry, R. E. (1995). Accountability in organizational life: Problem or opportunity for nonprofits? *Wiley Online Library*, 6(2), 181-195. <https://doi.org/10.1002/nml.4130060207>
- Gallón, G. (2014). *Report of the independent expert on the situation of human rights in Haiti*. UN Human Rights Council. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-71\\_en.doc](https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-71_en.doc)
- GAO. (2010). *Defense Management: U.S. Southern Command Demonstrates Interagency Collaboration, but Its Haiti Disaster Response Revealed Challenges Conducting a Large Military Operation*. <https://www.gao.gov/products/gao-10-801>
- GAO. (2011). *Haiti Reconstruction: Factors Contributing to Delays in USAID Infrastructure Construction*. <https://www.gao.gov/products/gao-12-68>
- GAO. (2013). *Haiti Reconstruction: USAID Infrastructure Projects Have Had Mixed Results and Face Sustainability Challenges*. <https://www.gao.gov/assets/gao-13-558.pdf>
- GAO. (2015). *Haiti Reconstruction: USAID Has Achieved Mixed Results and Should Enhance Sustainability Planning*. <https://www.gao.gov/products/gao-15-517>
- GAO. (2023). *Haiti: USAID and State Should Improve Management and Assessment of Reconstruction Activities*. <https://www.gao.gov/products/gao-23-105211>
- García Neumann, J. (2009). ¿ESTADOS FALLIDOS O ESTADOS EN CRISIS? *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 4(1), 201-207.
- Gauthier, A. (2010). *Haití: Geopolítica revuelta después del terremoto*. *Real Instituto Elcano*. <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2010/03/ari58-2010-gauthier-haiti-geopolitica-terremoto.pdf>
- Gomes, T. (2010). Death of Haitian youth sparks new protests against MINUSTAH. *Lo de Alla*. <https://lo-de-alla.org/2010/09/death-of-youth-sparks-protests-against-minustah/>
- Goodhart, M. (2014). *Accountable International Relations*. En M. Bovens, R. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Accountability* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0028>
- Grant, R. W., & Keohane, R. O. (2005). Accountability and Abuses of Power in World Politics. *American Political Science Review*, 99(1), 29-43. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051476>
- Grant, W. (2018). Haitian Oxfam workers tried to warn of sex scandal before. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-43043923>
- Ground Truth Solutions. (2022). *Trust must be earned: Perceptions of aid in Haiti—A reality check on post-quake accountability to affected people*. [https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/GTS\\_Haiti\\_H2H\\_April\\_2022\\_EN.pdf](https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/GTS_Haiti_H2H_April_2022_EN.pdf)
- Hadeed, S. J., Broadway, K. M., Schwartz-Watjen, K. T., Tigabu, B., Woodards, A. J., Swiatecka, A. L., Owens, A. N., & Wu, A. (2023). Notional Spread of Cholera in Haiti

- Following a Natural Disaster: Considerations for Military and Disaster Relief Personnel. *Military Medicine*, 188(7-8), e2074-e2081. <https://doi.org/10.1093/milmed/usac415>
- Haiti Cholera Response MPTF Secretariat & Office of the Resident Coordinator in Haiti. (2024). *Haiti Multi-Partner Trust Fund 2023 Annual Report*. [https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/2024-05/un\\_haiti\\_cholera\\_response\\_mptf\\_2023\\_annual\\_report.pdf](https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/2024-05/un_haiti_cholera_response_mptf_2023_annual_report.pdf)
- Haitian-American Community. (2015). *Open Letter from the Haitian-American Community to UN Secretary-General Ban and U.S. Secretary of State John Kerry on Cholera in Haiti*. <https://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2015/07/Letter-from-Haitian-Diaspora-Cholera-8-July-2015-final.pdf>
- Hallward, P. (2010). Securing Disaster in Haiti. *Montréal Serai*. <https://montrealserai.com/article/special-update-securing-disaster-in-haiti/>
- HAP International. (2010). *The 2010 Humanitarian Accountability Report*. <https://d1h79zlgft2zs.cloudfront.net/uploads/2021/02/2010HAR.pdf>
- Harrell-Bond, B. E. (1986). *Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees*. Oxford University Press.
- Harvard Humanitarian Initiative. (2011). *Disaster Relief 2.0: The Future of Information Sharing in Humanitarian Emergencies*.
- Held, D. (1996). *Models of Democracy*. Stanford University Press.
- Hendriksen, R. S., Price, L. B., Schupp, J. M., Gillece, J. D., Kaas, R. S., Engelthaler, D. M., Bortolaia, V., Pearson, T., Waters, A. E., Prasad Upadhyay, B., Devi Shrestha, S., Adhikari, S., Shakya, G., Keim, P. S., & Aarestrup, F. M. (2011). Population Genetics of *Vibrio cholerae* from Nepal in 2010: Evidence on the Origin of the Haitian Outbreak. *mBio*, 2(4), e00157-11. <https://doi.org/10.1128/mBio.00157-11>
- Hilhorst, D., Melis, S., Mena, R., & van Voorst, R. (2021). Accountability in Humanitarian Action. *Refugee Survey Quarterly*, 40(4), 363-389. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdab015>
- Houston, A. R. (2020). Applying Lessons from the Past in Haiti: Cholera, Scientific Knowledge, and the Longest-Standing Principle of International Health Law. En *Infectious Diseases in the New Millennium* (Vol. 82, pp. 13-41). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-39819-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-39819-4_2)
- Howitt, A., Leonard, H., VanRooyen, M., & Ronan, L. (2011). *2011 Roundtable Executive Summary*.
- HPN. (2010). *Humanitarian Exchange* (No. 48). Overseas Development Institute. <https://odihpn.org/magazine/lessons-learned-from-the-haiti-earthquake-response/>
- Hu, C., Dupain, E., & Newton, P. (2023). Dozens of children were left behind by UN personnel in Haiti. Their mothers want justice. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2023/09/15/americas/haiti-un-peacekeepers-trust-fund-sexual-abuse-as-equals-intl-cmd/index.html>

- Human Rights Watch. (2012). World Report 2012: Haiti. <https://www.hrw.org/world-report/2012/country-chapters/haiti>
- IASC. (2010). *Response to the Humanitarian Crisis in Haiti: Following the 12 January 2010 earthquake*. <https://interagencystandingcommittee.org/other/documents-public/haiti-earthquake-response-6-month-report-response-humanitarian-crisis>
- IASC. (2012). *Accountability to affected populations: Tools to assist in implementing the IASC AAP Commitments*. <https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/migrated/2014-10/TOOLS%20to%20assist%20in%20implementing%20the%20IASC%20AAP%20Commitments.pdf>
- IASC. (2023). *IASC Collective AAP Framework*. <https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-2-accountability-affected-people/iasc-collective-aap-framework>
- IDB. (2010). *Helping Haiti recover from the earthquake*. <https://www.iadb.org/en/news/helping-haiti-recover-earthquake>
- IJDH. (2011). *Petition for Relief*. <https://ijdh.org/wp-content/uploads/2011/11/englishpetitionREDACTED.pdf>
- Inda, G. A. (2012). Los dilemas del Estado moderno según Max Weber: Un recorrido por sus Escritos Políticos (1917-1920). *Estudios Avanzados*, 17, 13-38.
- Infobae. (2010). *La Unasur aprobó una ayuda de u\$s100 M por el terremoto en Haití*. <https://www.infobae.com/2010/02/09/499861-la-unasur-aprobo-una-ayuda-us100-m-el-terremoto-haiti/>
- Institute for Justice & Democracy in Haiti & Bureau des Avocats Internationaux. (2020). *Cholera 9 Years On... A "New Approach"?* <https://www.ijdh.org/publications/cholera-9-years-on-a-new-approach/>
- International Human Rights Clinic Harvard Law School, Bureau des Avocats Internationaux, & Institute for Justice & Democracy in Haiti. (2020). *Joint Submission to the UN Special Rapporteur: Violations of the Right to Effective Remedy: The UN's Responsibility for Cholera in Haiti – Institute for Justice and Democracy in Haiti*. [https://www.ijdh.org/our\\_works/violations-of-the-right-to-effective-remedy-the-uns-responsibility-for-cholera-in-haiti/](https://www.ijdh.org/our_works/violations-of-the-right-to-effective-remedy-the-uns-responsibility-for-cholera-in-haiti/)
- Jackson, R. H. (2009). Los estados fallidos y la tutela internacional. *Relaciones Internacionales*, 10, 1-31.
- Jean-Mary Chérestal, K. (2015). *Building Back Better? The Caracol Industrial Park and post-earthquake aid to Haiti*. ActionAid USA. <https://www.actionaidusa.org/wp-content/uploads/2016/09/building-back-better-the-caracol-industrial-park-and-post-earthquake-aid-to-haiti.pdf>

- Johnston, J. (2012). *Reduced Charges Against Uruguayan MINUSTAH Troops Latest Example of Lack of UN Accountability*. CEPR. <https://cepr.net/publications/reduced-charges-against-uruguayan-minustah-troops-latest-example-of-lack-of-un-accountability/>
- Johnston, J. (2014, mayo 8). *A Failure Foretold: USAID's Plans to Build a Port in Northern Haiti*. CEPR. <https://cepr.net/publications/a-failure-foretold-usaids-plans-to-build-a-port-in-northern-haiti/>
- Johnston, J. (2018, enero 11). *Where Does the Money Go? Eight Years of USAID Funding in Haiti*. CEPR. <https://cepr.net/publications/where-does-the-money-go-eight-years-of-usaid-funding-in-haiti/>
- Johnston, J. J., & Main, A. (2013). *Breaking Open the Black Box: Increasing Aid Transparency and Accountability in Haiti*. Center for Economic and Policy Research. <https://cepr.net/documents/publications/haiti-aid-accountability-2013-04.pdf>
- Joseph, M. (s.f). The Fight Against UN Impunity And Immunity In Haiti: The Cholera Scandal. *CIVICUS*, 99-105.
- Julmy, S. (2011). Coordinating the earthquake response: Lessons from Leogane, western Haiti. *Humanitarian Practice Network*. <https://odihpn.org/publication/coordinating-the-earthquake-response-lessons-from-leogane-western-haiti/>
- Kaldor, M. (2003). Civil Society and Accountability. *Journal of Human Development*, 4(1), 5-27. <https://doi.org/10.1080/1464988032000051469>
- Katz, J. (2010). *UN probes base as source of Haiti cholera outbreak*. The Washington Times. <https://www.washingtontimes.com/news/2010/oct/27/un-probes-base-as-source-of-haiti-cholera-outbreak/>
- Katz, J. (2013). *The Big Truck That Went By: How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster*. Palgrave Macmillan.
- Katz, J. (2016). *U.N. Admits Role in Cholera Epidemic in Haiti*. <https://www.nytimes.com/2016/08/18/world/americas/united-nations-haiti-cholera.html?hp>
- Keating, V. C., & Thrandardottir, E. (2017). NGOs, trust, and the accountability agenda. *The British Journal of Politics and International Relations*, 19(1), 134-151. <https://doi.org/10.1177/1369148116682655>
- Keen, P. K., Matthew, E., Nolan, C. W., & Kimmey, Jennifer L. (2011). *Respuesta ante situaciones de desastre en el extranjero: Observaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta-Haití*. [https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview\\_20110430\\_art005SPA.pdf](https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview_20110430_art005SPA.pdf)
- Keohane, R. O. (2006). Accountability in World Politics. *Scandinavian Political Studies*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9477.2006.00143.x>
- Klarreich, K. (2010). UN in Haiti: When Protectors Turn Predators. *100 Reporters*. <https://kogainon.com/100Reporters/HAITI/Text.html>

- Knox, R. (2013). After Bringing Cholera To Haiti, U.N. Plans To Get Rid Of It. *NPR*. <https://www.npr.org/sections/health-shots/2013/01/12/169075448/after-bringing-cholera-to-haiti-u-n-plans-to-get-rid-of-it>
- Knox Clarke, P. (2018). *The State of the Humanitarian System (SOHS)*. ALNAP. <https://sohs.alnap.org/the-state-of-the-humanitarian-system-sohs-2018-full-report>
- Kolbe, A. R., & Hutson, R. A. (2006). Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: A random survey of households. *The Lancet*, 368(9538), 864-873. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69211-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69211-8)
- Krasner, S. D. (2001). La soberanía perdurable. *Colombia Internacional*, 53, 25-42. <https://doi.org/10.7440/colombiaint53.2001.01>
- Krueger, S., Derzsi-Horvath, A., & Streets, J. (2016). *IASC Transformative Agenda: A Review of Reviews and Their Follow-Up*. Global Public Policy Institute. <https://reliefweb.int/report/world/iasc-transformative-agenda-review-reviews-and-their-follow>
- Kuperman, A. J. (2009). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All by Gareth Evans. *Political Science Quarterly*, 124(3), 590-591. <https://doi.org/10.1002/j.1538-165X.2009.tb01941.x>
- Kushner, J. (2019). Haiti and the failed promise of US aid. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid>
- Labbé, J. (2012). *Rethinking Humanitarianism: Adapting to 21st Century Challenges*. International Peace Institute. <https://www.ipinst.org/2012/11/rethinking-humanitarianism-adapting-to-21st-century-challenges>
- Lee, S., & Bartels, S. (2019). ‘They Put a Few Coins in Your Hand to Drop a Baby in You’: A Study of Peacekeeper-fathered Children in Haiti. *International Peacekeeping*, 27(2), 177-209. <https://doi.org/10.1080/13533312.2019.1698297>
- Lengyel, M., Thury Cornejo, V., & Malacalza, B. (2010). La eficacia de la ayuda al desarrollo en contextos de fragilidad estatal: Haití y la cooperación latinoamericana. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 34. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2118.4245>
- Lewnard, J. A., Antillón, M., Gonsalves, G., Miller, A. M., Ko, A. I., & Pitzer, V. E. (2016). Strategies to Prevent Cholera Introduction during International Personnel Deployments: A Computational Modeling Analysis Based on the 2010 Haiti Outbreak. *PLOS Medicine*, 13(1), e1001947. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001947>
- Lindberg, S. I. (2013). *Mapping Accountability: Core Concept and Subtypes* (SSRN Scholarly Paper No. 2376711). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=2376711>
- Locke, J. (1690). *Second Treatise of Government*. [http://archive.org/details/ost-history-second\\_treatise\\_of\\_government](http://archive.org/details/ost-history-second_treatise_of_government)
- López Martín, A. G. (2013). Estado fallido. Una aproximación a una “expresión” en auge. *ICADE. Revista De La Facultad De Derecho*, 89, 197-219.

- Luquero, F. J., Rondy, M., Boncy, J., Munger, A., Mekaoui, H., Rymshaw, E., Page, A.-L., Toure, B., Degail, M. A., Nicolas, S., Grandesso, F., Ginsbourger, M., Polonsky, J., Alberti, K. P., Terzian, M., Olson, D., Porten, K., & Ciglenecki, I. (2016). Mortality Rates during Cholera Epidemic, Haiti, 2010–2011. *Emerging Infectious Diseases*, 22(3), 410-416. <https://doi.org/10.3201/eid2203.141970>
- Main, A., Huggins, J., Johnston, J., Zehr, C., Hsu, J., & Yarborough, A. (2016). *A Critical Review of the US State Department's 2015 Progress Report on Haiti*. CEPR. <https://cepr.net/publications/a-critical-review-of-the-us-state-departments-2015-progress-report-on-haiti/>
- Mancero García, A. C., & Múnera Perafán, O. E. (2018). Los Estados fallidos: Una visión desde la Geopolítica/ Failed States: an insight from Geopolitics. *URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 22, 41-57. <https://doi.org/10.17141/urvio.22.2018.3081>
- Manilla Arroyo, D. (2014). Blurred lines: Accountability and responsibility in post-earthquake Haiti. *Medicine, Conflict and Survival*, 30(2), 110-132. <https://doi.org/10.1080/13623699.2014.904642>
- Margesson, R., & Taft-Morales, M. (2010). *Haiti Earthquake: Crisis and Response*. Congressional Research Service. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA516429>
- McCall, E., Whittle, B. J., & Youlten, L. J. (1976). Effects of prostaglandin E2 methyl analogues on the anti-inflammatory and gastric erosive activity of indomethacin. *The Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 28(7), 588-589. <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1976.tb02803.x>
- McNeil, D. G. (2010). Cholera's Second Fever: An Urge to Blame. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2010/11/21/weekinreview/21mcneil.html>
- Meltzer, D. (2015). *The Real Story of the 6 Homes in Haiti: Answering Your Questions*. <https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/The-Real-Story-of-the-6-Homes-Answering-Questions-about-Haiti.html>
- MINUSTAH. (2010). *CDP: MINUSTAH tient à faire la lumière autour des rumeurs*. <https://web.archive.org/web/20130329064944/http://minustah.org/?p=27375>
- Nations Unies en Haïti. (s. f.). *L'ONU en Haïti*. <https://haiti.un.org/fr/about/about-the-un>
- Newman, M. (2009). *Humanitarian Intervention: Confronting the Contradictions*. Columbia University Press.
- NPR. (2015). *In Search Of The Red Cross' \$500 Million In Haiti Relief*. <https://www.npr.org/2015/06/03/411524156/in-search-of-the-red-cross-500-million-in-haiti-relief>
- O'Donnell, G. (2001). *Accountability horizontal. La institucionalización legal de la desconfianza política*. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/accountability-horizontal-la-institucionalizacin-legal-de-la-desconfianza-poltica-0/>

- OAS. (2010). *OAS Donates 100,000 US Dollars to Earthquake Victims in Haiti*. [https://www.oas.org/en/media\\_center/press\\_release.asp?sCodigo=E-011/10](https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-011/10)
- O'Brien. (2013a, a). *Letter from Patricia O'Brien, UN Under Secretary-General for Legal Affairs, to Brian Concannon, Director of IJDH*.
- O'Brien. (2013b, b). *Letter from Patricia O'Brien, UN Under Secretary-General for Legal Affairs, to Brian Concannon, Director of IJDH*.
- O'Connor, D., Brisson-Boivin, K., & Ilcan, S. (2014). Governing failure: Development, aid and audit in Haiti. *Conflict, Security & Development*, 14(3), 309-330. <https://doi.org/10.1080/14678802.2014.923150>
- O'Donnell, G. (1993). *Delegative Democracy*. *Journal of Democracy*. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/delegative-democracy/>
- O'Donnell, G. (1998). *Horizontal Accountability and New Polyarchies* (p. 403799 Bytes). University of Notre Dame. <https://doi.org/10.7274/26126377>
- OECD. (2020). Development Co-operation Report 2020: Learning from Crises, Building Resilience. *OECD*. <https://www.oecd.org/development-development-cooperation-report-2020>
- OIG. (2010). *Audit of USAID's Cash-for-Work Activities in Haiti* (Nos. 1-521-10-009-P). <https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2018-06/1-521-10-009-p.pdf>
- OIG. (2012). *Audit of USAID's Haiti recovery initiative activities managed by Office of Transition Initiatives* (Nos. 1-521-12-009-P). <https://reliefweb.int/report/haiti/audit-usaid%E2%80%99s-haiti-recovery-initiative-activities-managed-office-transition>
- OIG. (2018). *Misjudged Demand, Stalled Reforms, and Deficient Oversight Impeded USAID/Haiti's Sustainable Electricity Goals*. <https://oig.usaid.gov/node/1765>
- OIOS. (2015). *Audit of waste management in the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. ONU. [https://deadlyriver.com/pdf/C15\\_slide10pdf.pdf](https://deadlyriver.com/pdf/C15_slide10pdf.pdf)
- Olvera, A. J., & Isunza Vera, E. (2004). «Rendición de cuentas»: Los fundamentos teóricos de una práctica de la ciudadanía. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/242310577\\_Rendicion\\_de\\_cuentas\\_los\\_fundamentos\\_teoricos\\_de\\_una\\_practica\\_de\\_la\\_ciudadania](https://www.researchgate.net/publication/242310577_Rendicion_de_cuentas_los_fundamentos_teoricos_de_una_practica_de_la_ciudadania)
- ONU. (2016). *Secretary-General's remarks to the General Assembly on a New Approach to Address Cholera in Haiti*. <https://reliefweb.int/attachments/3827af6a-3851-30ba-bbdc-80ab0ab4452d/Secretary-General%27s%20remarks%20to%20the%20General%20Assembly%20on%20a%20New%20Approach%20to%20Address%20Cholera%20in%20Haiti%20%5BTrilingual%20version%2C%20as%20delivered%5D%20%5Bscroll%20down%20for%20English%5D%20%20United%20Nations%20Secretary-General%20Ban%20Ki-moon.pdf>
- Oxfam Internacional. (s. f.). *Políticas de prevención y salvaguardia*. <https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos/politicas-de-prevencion-y-salvaguardia>

- Oxfam International. (2011). *Informe del avance en Haití, 2010*. OXFAM International. <https://www.oxfam.org/es/informes/informe-del-avance-en-haiti-2010>
- Oxfam International. (2018). *Investigation Report, FRN5- Haiti*. [https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/haiti\\_investigation\\_report\\_2011.pdf](https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/haiti_investigation_report_2011.pdf)
- Patrick, J. (2011). *Evaluation Insights* (No. 1). Red de Evaluación del CAD. <https://alnap.cdn.ngo/media/documents/1304-pdf>
- Peruzzotti, E., & Smulovitz, C. (2002). Controlando La Política: Ciudadanos y Medios En Las Nuevas Democracias Latinoamericanas. *Temas*. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2003000200015>
- Piarroux, R. (2016, septiembre 7). The U.N.'s Responsibility in Haiti's Cholera Crisis. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2016/09/08/opinion/the-uns-responsibility-in-haitis-cholera-crisis.html>
- Piarroux, R., Barrais, R., Faucher, B., Haus, R., Piarroux, M., Gaudart, J., Magloire, R., & Raoult, D. (2011). Understanding the Cholera Epidemic, Haiti. *Emerging Infectious Diseases*, 17(7), 1161-1168. <https://doi.org/10.3201/eid1707.110059>
- Piarroux, R., Moore, S., & Rebaudet, S. (2022). Cholera in Haiti. *La Presse Médicale*, 51(3), 104136. <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2022.104136>
- Pilkington, E. (2016). UN makes first public admission of blame for Haiti cholera outbreak. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/18/un-public-admission-haiti-cholera-outbreak>
- Pilkington, Ed, & Sandler Clarke, J. (2016). UN could have prevented Haiti cholera epidemic with \$2,000 health kit – study. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/haiti-cholera-epidemic-un-prevention>
- Portilla, D., Shaffer, R. N., Okusa, M. D., Mehrotra, R., Molitoris, B. A., Bunchman, T. E., & Ibrahim, T. (2010). Lessons from Haiti on Disaster Relief. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 5(11), 2122-2129. <https://doi.org/10.2215/CJN.03960510>
- Prieto Olivares, D. F. (2018). El ejército azul: Incidencia de la MINUSTAH en la estabilidad y seguridad del Estado haitiano. *Criterios*, 11(1), 171-191. <https://doi.org/10.21500/20115733.3777>
- Ramachandran, V., & Walz, J. (2015). Haiti: Where Has All the Money Gone? *Journal of Haitian Studies*, 21(1), 26-65. <https://doi.org/10.1353/jhs.2015.0003>
- Ratcliffe, R. (2019). Oxfam failed to report child abuse claims in Haiti, inquiry finds. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/11/oxfam-abuse-claims-haiti-charity-commission-report>
- Roberts, B. (2005). Accountability. En *Humanitarianism*. Routledge.

- Rotberg, R. I. (2003). Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators. En *State Failure and State Weakness in a Time of Terror* (pp. 1-26). Brookings Institution Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvbd8j54.4>
- Rotem, N. (2022). World society and field theory: The infiltration of development into humanitarianism. *The British Journal of Sociology*, 73(2), 402-420. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12932>
- Roy, D., & Labrador, C. (2014). Haiti's Troubled Path to Development. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/backgrounder/haitis-troubled-path-development>
- Ruiz Medrano Salvador, S. F. (2011). De los Estados Fallidos. *Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho*, 11, 86-113.
- Sawandi, N., & Thomson, I. (2014). Broadening Corporate Accountability: An 'Idealised' Downward Accountability Model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 429-436. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.099>
- Schuller, M. (2012). *Killing with Kindness: Haiti, International Aid, and NGOs*. Rutgers University Press. <https://archive.org/details/KillingWithKindnessSchullerMarkFarmerPaul/page/n59/mode/2up>
- scjoshRussell. (2015, octubre 21). Cholera victims in Haiti tell UN to "Face Justice". *MCC Washington Memo*. <https://washingtonmemo.wordpress.com/2015/10/21/cholera-victims-in-haiti-tell-un-to-face-justice/>
- Seybolt, T. B. (1996). The Myth of Neutrality. *Peace Review*, 8(4), 521-527. <https://doi.org/10.1080/10402659608426005>
- Sharpe, M. (2024). It's all relative: The origins, legal character and normative content of the humanitarian principles. *International Review of the Red Cross*, 106(925), 12-55. <https://doi.org/10.1017/S1816383123000292>
- Shelton, D. L. (2005). Remedies in International Human Rights Law (Chapter). *George Washington University Public Law*. <https://papers.ssrn.com/abstract=2235195>
- Slim, H. (2002). Not Philanthropy But Rights: The Proper Politicisation of Humanitarian Philosophy. *The International Journal of Human Rights*, 6(2), 1-22. <https://doi.org/10.1080/714003759>
- Sphere Association. (2018). *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. [www.spherestandards.org/handbook](http://www.spherestandards.org/handbook)
- Steets, J., Grunewald, F., Binder, A., Geoffroy, V. de, Kauffmann, D., Krüger, S., Meier, C., & Sokpoh, B. (2010). Cluster Approach Evaluation 2: Synthesis Report. *Groupe URD*. <https://digitallibrary.un.org/record/752307>
- Sullivan, L. (2015). In Search Of The Red Cross' \$500 Million In Haiti Relief. *NPR*. <https://www.npr.org/2015/06/03/411524156/in-search-of-the-red-cross-500-million-in-haiti-relief>

- Tan, Y. S. A., & von Schreeb, J. (2015). Humanitarian assistance and accountability: What are we really talking about? *Prehospital and Disaster Medicine*, 30(3), 264-270. <https://doi.org/10.1017/S1049023X15000254>
- The Guardian. (2011). Haiti earthquake aid pledged by country. <http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/jan/14/haiti-quake-aid-pledges-country-donations>
- The Times. (2018). How the Oxfam sex scandal unfolded. *The Times*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.thetimes.com/uk/article/one-week-on-how-the-oxfam-sex-scandal-unfolded-rdq6qhzgh&ved=2ahUKewjajfXZwuSLAxW8IbkGHcAKF8YQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1-zksMwQOic0uaPYiOtZCz>
- The White House Office of the Press Secretary. (2010, junio 25). *The United States Government's Haiti Earthquake Response*. Whitehouse.Gov. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/united-states-governments-haiti-earthquake-response>
- Thieren. (2010). *Statement by Michel Thieren, MINUSTAH Press Conference*.
- Thompson, G., & Cave, D. (2010, enero 16). Officials Strain to Distribute Aid to Haiti as Violence Rises. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2010/01/17/world/americas/17haiti.html>
- Trouillot, M.-R. (2018). Una historia impensable: La Revolución Haitiana como un no-acontecimiento. En C. Valdés León & F. Voltaire, *Antología del pensamiento crítico haitiano contemporáneo* (pp. 47-88). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0jsn>
- UN. (2011). *Report of the United Nations in Haiti 2010—Situation, Challenges and Outlook*. <https://reliefweb.int/report/haiti/report-united-nations-haiti-2010-situation-challenges-and-outlook>
- UN. (2016, octubre 17). *United Nations Response to Cholera in Haiti, September 2016*. <https://reliefweb.int/report/haiti/united-nations-response-cholera-haiti-september-2016>
- UN Accountability Pledge. (2016). <https://ijdh.org/wp-content/uploads/2016/07/UN-Accountability-Pledge.pdf>
- UN General Assembly. (2016). *Extreme poverty and human rights (A/71/367)*. UN General Assembly. <https://reliefweb.int/report/haiti/extreme-poverty-and-human-rights-a71367>
- UN News. (2010). UN deplores ‘politically motivated’ violence in Haiti.. <https://news.un.org/en/story/2010/11/359122>
- UN News. (2012). Haiti: Three UN peacekeepers repatriated for sexual abuse. <https://news.un.org/en/story/2012/03/406312>
- UN News. (2016). UN’s Ban apologizes to people of Haiti, outlines new plan to fight cholera epidemic and help communities. <https://reliefweb.int/report/haiti/un-s-ban-apologizes-people-haiti-outlines-new-plan-fight-cholera-epidemic-and-help>

- UN Radio (Director). (2010). *UN to set up independent panel to probe cholera outbreak in Haiti* [Broadcast]. <https://reliefweb.int/report/haiti/un-set-independent-panel-probe-cholera-outbreak-haiti>
- UNDP. (2010). Human Development Report 2010. En *Human Development Reports*. United Nations. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2010>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2012, febrero 1). *Are we capable of learning the lessons of Haiti?* <https://www.undrr.org/news/are-we-capable-learning-lessons-haiti>
- U.S. Department of State. (2015). *Fast Facts on the U.S. Government's Work in Haiti: Caracol Industrial Park*. U.S. Department of State. [//2009-2017.state.gov/p/wha/ci/ha/hsc/factsheets/2015/248540.htm](https://2009-2017.state.gov/p/wha/ci/ha/hsc/factsheets/2015/248540.htm)
- USAID. (2011). *Haiti—Earthquake and Cholera Fact Sheet #13, Fiscal Year (FY) 2011*. <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-earthquake-and-cholera-fact-sheet-13-fiscal-year-fy-2011>
- USAID. (2015). *Infrastructure Fact Sheet: Support for Caracol EKAM (2015)*. <https://2012-2017.usaid.gov/haiti/fact-sheets/northern-corridor-housing-caracol-ekam>
- Valencia Londoño, P. A. (2020). Retos del posconflicto frente a la respuesta humanitaria: Entre la persistencia de las consecuencias humanitarias y las limitaciones al mandato de los actores humanitarios. *Opinión Jurídica*, 19(38), 179-200. <https://doi.org/10.22395/ojum.v19n38a9>
- Vinbury, N. (2017). Cluster Approach: Gaps and shortcomings in UN coordination of humanitarian actors in post-earthquake Haiti and implications for policy concerns of the New Humanitarian school of thought. *International Development, Community and Environment*. [https://commons.clarku.edu/idce\\_masters\\_papers/178](https://commons.clarku.edu/idce_masters_papers/178)
- Walker, P., & Maxwell, D. (2014). *Shaping the Humanitarian World*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203614532>
- Warren, M. (2014). Accountability and Democracy. En M. Bovens, R. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Accountability* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0018>
- Wheeler, N. J. (2000). *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199253102.001.0001>
- WHO. (2017). *Number of reported cases of cholera*. World Health Organization. <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/number-of-reported-cases-of-cholera>
- WHO. (2022). *Cholera—Haiti*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON427>
- World Bank Group. (2019). *Rebuilding Haitian Infrastructure and Institutions*. <https://www.worldbank.org/en/results/2019/05/03/rebuilding-haitian-infrastructure-and-institutions>

- Yamashita, H. (2015). New Humanitarianism and Changing Logics of the Political in International Relations. *Millennium*, 43(2), 411-428. <https://doi.org/10.1177/0305829814554408>
- Young, N. (2015, diciembre 14). Haitian Letters Remind the UN of Cholera Victims' Sadness. *PassBlue*. <https://www.passblue.com/2015/12/13/haitian-letters-remind-the-un-of-cholera-victims-sadness/>
- Zavaleta Hernández, S. K., & Franco Silva, A. (2020). La Militarización del Desarrollo: La intervención humanitaria humanicida en Haití. *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 7(1), 12-34. <https://doi.org/10.21500/23825014.4739>
- Zúñiga, D. (2019). “Te daban unas monedas y te metían un hijo”. *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/es/cascos-azules-en-haití-te-daban-unas-monedas-y-te-metían-un-hijo/a-51756802>

## Anexos

### Anexo 1: Entrevistas

<b>Nombre</b>	<b>Título / Posición</b>	<b>Fecha de entrevista</b>	<b>Formato de entrevista</b>
Nathalye Cotrino	Investigadora Sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch	19 de diciembre de 2024	Entrevista virtual realizada vía Zoom.
Claire Antone Payton	Historiadora sobre América Latina y el Caribe y creadora del Haiti Memory Project	09 de enero de 2025	Entrevista virtual realizada vía Zoom.
Sabine Lee	Profesora en Historia Moderna en la Universidad de Birmingham y coordinadora de CHIBOW	14 de enero de 2025	Entrevista virtual realizada vía Zoom.
Anónimo	Exfuncionario de la ONU	11 de febrero de 2025	Entrevista virtual realizada vía Zoom.

Las grabaciones de las diferentes entrevistas pueden encontrarse [aquí](#). La grabación del exfuncionario de la ONU no se incluye con el fin de preservar su anonimato.